

**POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A ORGANIZACIONES INDÍGENAS EN
LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA, DURANTE EL PERÍODO
2000-2010**

*Tesis presentada para optar al título de Magister de la Universidad de Buenos Aires,
Área Sistemas de Producción Agrícolas para Áreas de Subsistencia*

Ana Cecilia García Salemi
Ingeniera Agrónoma - Universidad Nacional de Tucumán - 2004

Lugar de trabajo: Facultad de Agronomía y Zootecnia de la
Universidad Nacional de Tucumán



Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto Soriano
Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires



COMITÉ CONSEJERO

Director de tesis

Alejandro Daniel Ríos

Ingeniero Zootecnista (Universidad Nacional de Tucumán)

Master en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible (Universidad Internacional de Andalucía-España)

Consejero de Estudios

Marcela Blanca Colombo

Ingeniera Agrónoma (Universidad Nacional de Tucumán)

Master en Ciencias Sociales (FLACSO)

JURADO DE TESIS

Director de tesis

Alejandro Daniel Ríos

Ingeniero Zootecnista (Universidad Nacional de Tucumán)

Master en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible (Universidad Internacional de Andalucía-España)

JURADO

María Fernández de Ullivarri

Licenciada en Historia (Universidad Nacional de Tucumán)

Doctora de la Universidad de Buenos Aires, Área Historia (Universidad de Buenos Aires)

JURADO

Gustavo Fabián Larrañaga

Ingeniero Agrónomo (Universidad Nacional de La Plata)

Master en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible (Universidad Internacional de Andalucía-España)

Fecha de defensa de la tesis: 23 de septiembre de 2013

Dedicatoria

A la lucha de las comunidades originarias de Tucumán y Argentina y a las organizaciones e instituciones que creen en la igualdad y justicia para los pueblos.

Agradecimientos

A Eugenia y Manolo por mostrarme el camino y haberme despertado el respeto por la cultura de nuestra región y la rebeldía respecto a la injusticia que padecen los Pueblos Originarios.

A la ex UML Diaguita Calchaquí, Jorge Aimaro, Darío Abdala, Mariano Cinquegrani, Delfín Gerónimo, José Díaz, Moisés Balderrama, Antonio Leone, por lo vivido y aprendido.

A la familia Ríos Colombo, Ale y Marce: ¡gracias por el apoyo y la confianza!.

Al equipo del INAI Tucumán y CDR, queridos compañeros.

Al Ing. José Salas Oroño por sus valiosos y generosos aportes.

A Fogón Andino, por su incansable lucha y compromiso con las comunidades originarias.

A la Fundación ANDHES por permitirme creer en una “mejor justicia”.

A la Cátedra de Sociología Agraria.

A la Cátedra libre de Pueblos Originarios.

A la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.

A Valentina García Salemi.

A Juan José Jorrat.

A Daniel Slutzki.

A María F. de Ullivarri.

A todas las comunidades originarias tucumanas, mi respeto y solidaridad siempre.

A Don Pancho Chaile, Cacique de la Comunidad India Quilmes.

Al Sr. Luis Guanca.

A Gringa Bordón.

A Mario Quinteros.

A toda la comunidad India Quilmes.

A Don Cachamai Sequeira. Cacique de la comunidad Indígena de Casas Viejas.

A Nora Sequeira.

A la comunidad Indígena de Casas Viejas.

A Joaquín Pérez, Cacique de la comunidad indígena de Nogalito.

A Simón Pérez.

A toda la comunidad indígena de Nogalito.

A David Sánchez.

A Marcelo Cruz.

A Lourdes Cruz.

A Beatriz Gutiérrez.

A Aurelio Velardez.

A todas las Comunidades indígenas del Valle de Trancas/Choromoro.

A mis hermanas y a toda mi familia por el eterno apoyo.

A mis amigas y amigos por su acompañamiento.

A Joze, mi compañero.

Declaración

Declaro que el material incluido en esta tesis es, a mi mejor saber y entender, original producto de mi propio trabajo (salvo en la medida en que se identifique explícitamente las contribuciones de otros), y que este material no lo he presentado, en forma parcial o total, como una tesis en ésta u otra institución.

Índice general.

1. Introducción.
 - 1.1. Justificación.
 - 1.2. Los pueblos originarios en Argentina.
 - 1.3. Las leyes y políticas orientadas a los pueblos originarios.
 - 1.4. Aspectos jurídicos en la temática indígena.
 - 1.5. Marco institucional en la temática indígena.
 - 1.5.1. Ministerio de Desarrollo Social de Nación (MDS).
 - 1.5.2. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
 - 1.6. Programas y proyectos desarrollados en el período 2000-2010.
 - 1.7. Objetivos.
 - 1.7.1. Objetivo general.
 - 1.7.2. Objetivos específicos.
 - 1.8. Hipótesis.
2. Estado actual del conocimiento.
 - 2.1. Políticas públicas.
 - 2.2. Pueblos originarios.
 - 2.3. Territorio.
 - 2.4. Desarrollo rural territorial.
3. Marco teórico.
 - 3.1. Políticas públicas.
 - 3.2. Pueblos originarios.
 - 3.3. Territorio.
 - 3.4. Desarrollo rural territorial.
4. Materiales y método.
5. Resultados.
 - 5.1. Comunidad india Quilmes.
 - 5.1.1. Clima y suelos Valle Calchaquí-Quilmes.
 - 5.1.2. Vegetación.
 - 5.1.3. Breve reseña histórica.
 - 5.1.4. Principales actividades.
 - 5.1.5. La ciudad sagrada de Quilmes.
 - 5.1.5.1. El sitio, la tenencia y su recuperación.
 - 5.1.6. Organización actual de la comunidad india Quilmes.
 - 5.1.7. Caracterización de la cultura organizacional de la comunidad india Quilmes.
 - 5.1.8. Proyectos implementados.
 - 5.2. Comunidades del departamento Trancas.
 - 5.2.1. Caracterización de la zona.
 - 5.2.2. Clima.
 - 5.2.3. Breve reseña histórica.
 - 5.2.4. Principales actividades y servicios.
 - 5.2.5. Organización actual de las comunidades del Valle de Trancas.
 - 5.2.6. Proyectos implementados en la zona.
 - 5.2.7. Problemática identificada.
 - 5.3. Comunidad indígena Casas Viejas.
 - 5.3.1. Características de la zona.
 - 5.3.2. Breve reseña histórica.

- 5.3.3. Principales actividades.
- 5.3.4. Organización actual de la comunidad.
- 5.3.5. Problemática identificada.
- 5.4. Comunidad indígena Nogalito.
- 5.4.1. Breve reseña histórica.
- 5.4.2. Organización actual de la comunidad.
- 5.4.3. Principales actividades.
- 5.4.4. Problemática identificada.
- 5.5. Análisis de entrevistas.
- 5.6. Efectos en los aspectos socio-organizacionales.
- 5.7. Efectos en los aspectos económico-productivos.
- 5.7.1. Aspectos productivos.
- 5.7.2. Aspectos económicos.
- 5.8. El Estado como actor clave en los procesos.
- 6. Discusión.
- 7. Conclusiones.
- 8. Bibliografía.
- Anexos

Índice de tablas.

- Tabla N° 1: Pueblos originarios, ubicación y población en la región NOA.
- Tabla N° 2: Número aproximado de familias por comunidad y departamento.
- Tabla N° 3: Pregunta incluida en el cuestionario utilizado en el CNPHV 2001.
- Tabla N° 6: Enfoques de desarrollo rural.
- Tabla N° 7: Proyectos priorizados.
- Tabla N° 8: Síntesis de entrevistas sobre participación de los jóvenes.
- Tabla N° 9: Síntesis de aspectos positivos y negativos vinculados al rol del Estado.
- Tabla N° 10: Políticas públicas demandadas, implementadas y no implementadas.

Índice de cuadros.

- Cuadro N° 1. Etapas y productos de la investigación.
- Cuadro N° 2: Características generales de las comunidades indígenas.

Índice de figuras.

- Figura N° 1: Tipos de diseño para el estudio de casos según Yin
- Figura N° 2: Dinámica de relaciones
- Figura N° 3: Diagrama de vínculos entre comunidades y Estado

**POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A ORGANIZACIONES INDÍGENAS EN
LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA, DURANTE EL PERÍODO
2000-2010**

Resumen

En la República Argentina habitan en la actualidad aproximadamente 18 pueblos indígenas registrados, pertenecientes a diversas etnias. Muchos de éstos son parte de los llamados beneficiarios de proyectos y/o programas generados principalmente desde el Estado. Dichas iniciativas han tenido diferentes efectos en las organizaciones indígenas, como en los aspectos productivos al interior de las comunidades. La provincia de Tucumán cuenta con 17 comunidades indígenas organizadas, las cuales han formado parte de los procesos mencionados. En el presente trabajo se abordan desde una mirada cualitativa los efectos que estas políticas públicas tuvieron en los pueblos originarios en las dimensiones socio-organizacionales y técnico-productivas, durante el periodo 2000-2010. Específicamente, se realizó esta investigación desde el método de estudio de caso, para lo cual se tomaron como referencia cuatro pueblos indígenas ubicados en diferentes zonas de la provincia de Tucumán. Los resultados obtenidos reflejan un escenario complejo donde existen diversos actores con su problemática particular y que en la mayoría de los casos poseen objetivos diferentes. Sin embargo estos actores interactúan entre sí y en muchos casos se necesitan unos de otros. Este trabajo intenta visibilizar la situación por la que atraviesan las comunidades indígenas tucumanas, su relación con el Estado, y en este contexto las interrelaciones que se dan entre las partes. Las conclusiones no son absolutas, y permiten indagar o reflexionar acerca de la cuestión indígena en torno a su relación con el Estado, los equipos técnicos y hacia el interior de los propios pueblos originarios.

Palabras clave: pueblos, originarios, Estado, políticas, Tucumán

PUBLIC POLICIES FOR INDIGENOUS ORGANIZATIONS IN THE PROVINCE OF TUCUMAN, ARGENTINA, DURING 2000-2010 PERIOD

Abstract

Nowadays in Argentina live about 18 registered indigenous peoples belonging to different ethnic groups. Many of these are part of the so-called beneficiaries of projects and / or programs generated mainly from the State. These initiatives have had different effects on both indigenous organizations, as production aspects within communities. Tucumán province has 17 organized indigenous communities which have been part of these processes. In this paper it is addressed from a qualitative look the effects these public policies had on the native peoples in the socio-organizational and technical productive dimensions, during 2000-2010 period. Specifically, this research was conducted from the case study method, for which were taken as reference four tribes located in different areas of the province of Tucumán. The results show a complex scenario where diverse actors with their particular problems and in most cases have different objectives. However these actors interact with each other and in many cases are needed each other. This paper attempts to visualize the situation being experienced by indigenous communities in Tucumán, their relationship with the state, and in this context the interrelationships between them. The conclusions are not absolute, and allow to investigate and reflect on the indigenous issue about its relationship with the State, technical teams and into native peoples themselves.

Keywords: people, originating, state policies, Tucumán

POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A ORGANIZACIONES INDÍGENAS EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA, DURANTE EL PERÍODO 2000-2010

1. Introducción.

1.1. Justificación.

La temática de los pueblos originarios atravesó a lo largo de la historia diferentes situaciones como principal consecuencia la invisibilización de los mismos.

Un concreto ejemplo de esto es la denominación de “desierto” a las regiones patagónicas y chaqueñas en el siglo XVII (Lois, 1999: 4-5). El tema principal que aborda esta autora, es el proceso de apropiación privada de los territorios del Chaco Salteño en el siglo XVII y las estrategias utilizadas para tal fin. En este último punto toma relevancia la utilización del término “desierto” como una manera de invisibilizar a los pueblos originarios que habitaban esos espacios. Esta invención es la representación subjetiva del área geográfica sobre la que se puede ejercer un dominio efectivo. (Lois, op. cit.: 13-14).

Finalmente, el territorio también aparece como concepto, como un horizonte espacial colectivo permeable en este caso puntual a acciones represivas de conquista. Lo antes mencionado hace referencia a una estrategia política más, para invisibilizar a los pueblos originarios.

En cuanto a ubicar a las comunidades indígenas en una caracterización, no hay una tipología establecida y determinada que defina a los pueblos originarios. Sí se los podría incluir en ciertas categorías ya existentes que a su vez han ido cambiando a través del tiempo, tendencia la cual se mantiene.

Originariamente, y desde tiempos inmemoriales, las comunidades indígenas fueron dueñas del territorio que habitaron, del cual obtenían a través de la caza y recolección su alimento y en donde se sucedía el cotidiano de su vida.

Posteriormente, en la revolución neolítica o inicios de la agricultura, muchas comunidades indígenas se dedicaron al cultivo de numerosas especies. En esta etapa el “tipo de productor” que predominaba eran los grupos de parentesco, o tribus que llevaban a cabo sus tareas agrícolas de manera comunitaria (Salas Oroño, 2007:2)

Con la conformación y avance del Imperio Incaico, una nueva figura comienza a caracterizar a los pobladores indígenas. Al establecerse relaciones de marcado tinte estatal en el incario, el tipo de productor será la “familia campesina”, que recibía parcelas y otros recursos según su capacidad de trabajo.

La llegada de los españoles a América, marca un proceso de cambios aún más profundos en los modos de vida de los pueblos indígenas, ubicándolos en aquel momento de la historia y luego grandes luchas de resistencia a la violenta colonización en la figura de esclavo.

La etapa de la “agricultura tradicional”, generó también una transformación en la caracterización de los pueblos indígenas. Estas grandes extensiones de tierra, ahora en manos de unas pocas familias aristocráticas, posicionaron a las comunidades indias que venían sufriendo procesos de conquista, evangelización y a-culturización, en la figura de “campesino tradicional”, al cual se le otorgaba en calidad de préstamo una parcela de tierra para vivir, y debían retribuir al “terrateniente”, con productos y mano de obra. Esto sucedía en toda América y también en Argentina.

En la provincia de Tucumán, hasta hace unos años atrás, algunas comunidades indígenas vivían bajo el régimen del latifundio (por ejemplo la comunidad indígena Pueblo de Tolombón), pagando el pastaje de sus animales, el ingreso a cerros y caminos y entregando su cosecha al terrateniente, para que éste les permitiera vivir en ese lugar.

La organización interna de las comunidades es la que permitió salir de la figura impuesta desde muchos años atrás.

Otros acontecimientos que aportan a la invisibilización de estos pueblos son los procesos migratorios que tuvo y tiene la Argentina. Alrededor de 1990 la llegada de inmigrantes bolivianos y paraguayos a la Argentina, proceso que generó múltiples discusiones, y estudios referidos a la “etnicidad”, y la “hipervisibilización de las diferencias” (Grimson, 2006: 5-6). Llama la atención esto último en cuanto lo étnico propio, vale decir, la diversidad étnica Argentina, nuevamente se “ocultaba” tras estos migrantes de marcada identidad cultural.

Todo esto coincide con el proyecto de país o “argentinización” (Grimson, op. cit.: 2) en el siglo XIX, en el que se buscaba la “homogeneización del ser argentino”.

Esto se mantuvo por décadas, y los grupos con subalternidad, como los pueblos originarios argentinos, o de otro origen y las familias consideradas pobres no entraban en este plan de país, sufriendo fuertes discriminaciones por los grupos dominantes como así también en la cotidianeidad (por ejemplo la negación del idioma y de la vestimenta en las escuelas primarias y secundarias del Valle Calchaquí).

1.2. Los pueblos originarios en Argentina.

En la República Argentina existen aproximadamente 18 pueblos indígenas registrados, pertenecientes a diversas etnias.

En general, se calcula que en América Latina y el Caribe hay entre 40 y 50 millones de indígenas divididos en unos 410 grupos étnicos diferentes, cada uno de los cuales tiene su idioma, su organización social, su cosmovisión, su sistema económico y modelo de producción adaptado a su ecosistema. Cinco países agrupan casi el 90% de la población indígena regional: Perú (27%), México (26%), Guatemala (15%), Bolivia (12%) y Ecuador (8%) (Hopenhayn, 2003:9).

Pese a no estar la Argentina entre los países señalados como mayoritarios en población indígena, según datos del RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) se estima que existen 18 pueblos indígenas distribuidos a lo largo del país, pertenecientes los mismos a diversas etnias. La mayoría de estos pueblos se concentran en la región del Noroeste Argentino (NOA). No se sabe a ciencia cierta qué cantidad de personas son

realmente pertenecientes a pueblos originarios, debido al sesgo que muestran algunos censos dentro de cada comunidad y porque el punto fundamental para definir si se pertenece a determinada etnia es el “autorreconocimiento”, aspecto controversial en la actualidad debido a que muchos pobladores indios sufren discriminación y atropellos.

En cuanto a los datos del censo complementario del año 2004-2005, la población del país que se reconoce indígena es 457.363 personas. (Cervera Novo, 2010: 13). Otro dato de importancia es que el número de personas que no se reconocen pertenecientes a un pueblo indígena pero descienden de pueblos indígenas en primera generación son: 142.966 personas. Esto hace un total de 600.329 originarios (Anexo N° 1).

Estos pueblos originarios también llamados comunidades indígenas, están actualmente organizados y replican en su vida cotidiana las prácticas transmitidas por sus ancestros. Son descendientes de diferentes etnias, y se distribuyen a lo largo de todo nuestro país (Anexo N° 2).

En cuanto a la región NOA o también denominada Norandina (Cervera Novo, 2010: 27), los pueblos originarios se dividen de la siguiente manera:

Tabla N° 1: Pueblos originarios, ubicación y población en la región NOA

Pueblo	Provincia	Población
Aymará	Jujuy	4104
Atacama	Jujuy	2805
Diaguíta/Diaguíta Calchaquí	Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca	16810
Kolla	Salta y Jujuy	53106
Maimará	Jujuy	178
Omaguaca	Jujuy	1374
Quechua	Salta y Jujuy	561
Lule	Tucumán	80
TOTAL		79018

Fuente: Cervera Novo, 2010.

Se ha incorporado a la Tabla precedente los datos poblacionales del Pueblo Lule, habitante de la zona montañosa del departamento Lules, provincia de Tucumán.

Para abordar un caso en particular de los pueblos originarios de la provincia de Tucumán, se hace necesario describir la distribución de dichas comunidades, y también sus principales actividades, problemáticas y organización.

Con respecto a la cantidad de familias y su ubicación se incorporan los datos obtenidos por los propios representantes de las comunidades indígenas.

Tabla N° 2: Número aproximado de familias por comunidad y departamento.

Comunidad	N° aproximado de familias	Departamento
Casas Viejas	105	Tafi del Valle
Diaguita El Mollar	225	Tafi del Valle
La Angostura	86	Tafi del Valle
Valle de Tafi	450	Tafi del Valle
Ayllu El Rincón	50	Tafi del Valle
Potrero de Rodeo Grande	100	Trancas
Chasquivil	25	Trancas
Tolombón	103	Trancas
Hualinchay	40	Trancas
Chuschagasta	84	Trancas
Ancajuli	15	Trancas
San Pedro de Colalao	40	Trancas
Anfama	10	Trancas
Solco Llampá	5	Chicligasta
Amaicha del Valle	873	Tafi del Valle
Quilmes	630	Tafi del Valle
El Nogalito	80	Lules
Mala Mala	25	Lules
Potrero de las Tablas	15	Lules
El Siambón	45	Tafi Viejo
La Oyada	15	Tafi Viejo
TOTAL	3.021	

Fuente: información comunitaria.

1.3. Las leyes y políticas orientadas a los pueblos originarios.

Todo lo antes mencionado generó que las comunidades indígenas permanezcan silenciadas e invisibilizadas ante gobiernos y actores relevantes del Estado.

A nivel internacional, la temática indígena cobra interés alrededor de los años 70 (Mombello, 2002: 7-10), a partir de sucesos como la Declaración de Barbados (1971).

Esta declaración otorga responsabilidad al Estado como garante de Derecho en lo referido a los Pueblos Indígenas, y se propone mecanismos de denuncia ante incumplimientos. También se cuestiona la figura de las misiones evangelizadoras por un fuerte tinte discriminatorio, y la relación de la ciencia y la academia con las comunidades indígenas.

El documento finaliza con palabras de liberación de los pueblos indígenas e invita a pensar a dichos pueblos como hacedores de su propio destino (Anexo N° 3).

El primer parlamento Indígena de Sudamérica, o como algunos autores lo citan “Parlamento Indio Americano del cono Sur” (Rojas Mix, 1991) se llevó a cabo en el año 1974 en San Bernardino, Paraguay.

De este evento significativo por las discusiones y temas tratados (violencia, tierra, identidad, y otros), participaron ciudadanos de Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela. Es de destacar que en este evento hubo observadores canadienses. (Mombello, 2002 op. cit.)

Otro suceso, de marcada trascendencia en la temática, es la creación del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI) en 1975. Este Consejo se crea en búsqueda de justicia para los pueblos indígenas. En esos momentos, pueblos como los de Ecuador, Bolivia y Colombia se hallaban luchando por diversas cuestiones (Servindi, 2012). En las declaraciones del CMPI, se expresan reclamos en relación a la sangrienta conquista española y al sometimiento por el que atravesaron estos pueblos. En su versión radial, dice así:

*Nosotros, pueblos indígenas del mundo, unidos en una gran asamblea de hombres sabios,
declaramos a todas las naciones:
Cuando la Tierra Madre era nuestro alimento,
cuando la noche oscura formaba nuestro techo,
cuando el cielo y la luna eran nuestros padres,
cuando todos éramos hermanos y hermanas,
cuando nuestros caciques y ancianos eran grandes líderes,
cuando la justicia dirigía la ley y su ejecución,
¡Entonces llegaron otras civilizaciones!
Con hambre de sangre, de oro, de tierra y de todas las riquezas, trayendo en una mano la cruz
y en la otra la espada, sin conocer ni querer aprender las costumbres de nuestros pueblos,
nos clasificaron por debajo de los animales, nos robaron nuestras tierras y nos llevaron lejos
de ellas, transformando en esclavos a los Hijos del Sol.
¡Sin embargo, no pudieron eliminarnos!
ni nos hacen olvidar lo que somos, porque somos la cultura de la tierra y del cielo.
Somos de una ascendencia milenaria. Y somos millones.
Y aunque nuestro universo entero sea destruido,
¡Nosotros viviremos por más tiempo que el imperio de la muerte!
Port Alberni, 1975*

La firma de la Declaración de Barbados II en 1977, también marca un hito importante en las luchas indígenas. Si bien asistieron casi los mismos participantes de la reunión donde se realizó la Declaración de Barbados I, se dice que en ésta (Bonfil Batalla, 1977), hubo presencia de la dirigencia indígena de 12 países que fueron los que confeccionaron las conclusiones que luego se difundieron al continente y al mundo (Anexo N° 4).

1. 4. Aspectos jurídicos en la temática indígena.

En Argentina la cuestión indígena no aparecía en agenda nacional hasta 1980 (Mombello, 2002: 8). El fin de la dictadura militar en el año 1983 pone en discusión la cuestión de los Derechos Humanos e incluye, a los pueblos originarios no como protagonistas del genocidio vivido, pero sí como grupos vulnerables necesarios de ser atendidos. Algunas provincias pudieron avanzar en cuestiones legislativas que inspiraron avances nacionales.

En el año 1984, Formosa propone la ley N° 426 denominada “Ley Integral del Aborigen”; un año más tarde, la provincia de Salta dicta la ley N° 6373 de “Promoción y Desarrollo del Aborigen”. En el año 1987, Chaco dicta la “Ley del Aborigen” (N° 3258). Río Negro dicta la Ley Integral del Indígena en 1988; Misiones se suma con la ley N° 2727 en 1989. En la provincia de Chubut, en 1991, surge la ley N° 3657 que lleva como título “Establecimientos de normas tendientes a la preservación social y cultural de las comunidades aborígenes”. Como último registro que antecede a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, aparece la ley N° 11078 denominada “Ley de Comunidades Aborígenes” dictada en el año 1993 por la provincia de Santa Fe (Anexo N° 5).

En la provincia de Tucumán, la mayoría de las comunidades iniciaron o continuaron procesos de resistencia en sus territorios por conflictos con terceros, actualmente “terratenientes”. Tal es el caso de la comunidad de Quilmes que inició sus luchas en la década del 70; Tolombón 30 años más tarde, y así otras. Todo esto toma relevancia para gestar la reivindicación de derechos de los pueblos originarios en el periodo bajo estudio.

En este contexto se confeccionaron numerosos tratados internacionales que protegían a los pueblos indígenas y a partir de esto, la Argentina y algunas de sus provincias fueron escribiendo aspectos legales diversos dentro de los cuales la reforma de la Constitución Nacional de 1994 es el más trascendente. Este marco legal aportó la aceptación de la existencia de estos pueblos en Argentina.

Algunos de los hitos más relevantes de la protección jurídica hacia los pueblos indígenas se mencionan a continuación:

Marco internacional

- Convención Americana de Derechos Humanos. Esta convención entra en vigencia en el año 1984, en San José de Costa Rica.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la década del 60.
- Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
- Convención de los Derechos del Niño (Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), la cual entra en vigencia en el año 1990.
- Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (ratificado mediante Ley N° 24.071).
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

Indígenas; año 2007.

- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los siguientes casos: “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua” (2001); “Yatama vs. Nicaragua” (2005); “Yakye Axa vs. Paraguay” (2005); “Sawhoyamaya vs. Paraguay” (2006) y “Saramaka vs. Surinam” (2007 y 2008); “Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay” (2010).

Marco nacional

- Constitución Nacional (artículos 75 inc. 17).
- Ley Nacional N° 23.302 de Política Indígena y de Apoyo a las Comunidades Aborígenes.
- Ley Nacional N° 24.071, que consagra y explicita lo establecido por el Convenio N° 169 de la OIT.
- Ley Nacional N° 26.160: De Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena; y su prórroga, la Ley Nacional N° 26.554.

Marco provincial

- Artículo 149 de la Constitución Provincial.
- Ley N° 7958 de año 2007, que declara al 11 de octubre de cada año como “último día de libertad de los Pueblos Originarios”.

En el marco de la ley Nacional N° 26.160, y su prórroga (ley N° 26554), se desarrolla actualmente en Tucumán un relevamiento territorial mediante un convenio específico entre el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INAI), la Defensoría del Pueblo de Tucumán y la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán, con un Equipo Técnico Operativo (ETO) pluralista, coordinado por el INAI y convocado a los efectos del cumplimiento de la mencionada ley (Anexo N° 6).

Las comunidades indígenas con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, inician un camino que otras provincias allanaron previamente. Tucumán tuvo su aporte recién en el año 2006, cuando se incorpora el artículo 149 a la Constitución Provincial, tomando el modelo del artículo 75 inc. 17, aprobado en la Constitución Nacional.

El artículo 75 inciso 17, consagra:

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

El artículo N° 149, incorporado por la provincia de Tucumán en su Constitución, enuncia:

“La Provincia reconoce la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad y las instituciones de los Pueblos Indígenas que habitan en el territorio provincial. Garantiza la educación bilingüe e intercultural y el desarrollo político cultural y social de sus comunidades indígenas, teniendo en cuenta la especial importancia que para estos Pueblos reviste la relación con su Pachamama. Reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Se dictarán leyes que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados en este artículo.”

Este artículo y aquellos abordados en los diferentes tratados internacionales y otras leyes, obligarán a los Estados, en este caso al Estado Argentino, a generar acciones concretas que permitan en cumplimiento efectivo de lo enunciado en el artículo. Además, en Argentina se establece como derecho constitucional para los pueblos indígenas que la habitan su “derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”, aspecto de marcada importancia para el abordaje del tema territorial a lo largo del periodo 2000-2010.

1.5. Marco institucional en la temática indígena.

1.5.1. Ministerio de Desarrollo Social de Nación (MDS).

Para abordar aspectos referidos a la implementación de proyectos, financiamiento y políticas públicas en comunidades originarias, se hace necesario citar al MDS, como principal generador de estas propuestas.

El MDS como su marco institucional lo indica, es un organismo nacional, que depende del Poder Ejecutivo, y tiene la misión de planificar e implementar las acciones orientadas hacia el fomento de la integración social y el desarrollo humano, atención y reducción de las situaciones de vulnerabilidad social, el desarrollo de igualdad de oportunidades, la protección de la familia y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias (MDS, 2012).

La estrategia de trabajo se apoya en un abordaje territorial que comprende la dinámica propia de cada municipio, provincia o región y supone la acción coordinada entre el Estado, las organizaciones sociales y las comunidades (Anexo N° 7).

Siguiendo la línea de las políticas sociales que tiene el MDS, corresponde incluir el abordaje territorial como propuesta de intervención. En esta línea de trabajo figuran: Plan “AHÍ”, Centros Integradores Comunitarios (CIC); promotores territoriales, Tren de Desarrollo Social y Sanitario y los Centros de Referencia (CDR). Esta última, en Tucumán, es una herramienta que nuclea e instrumenta numerosos programas de desarrollo. Son espacios interdisciplinarios de trabajo que, según manifiestan, articulan las diversas líneas de acción del Ministerio para construir estrategias de desarrollo local y provincial desde un abordaje integral (MDS, 2012 op. cit).

Los CDR se encuentran distribuidos por todo el país y funcionan como delegaciones locales del nivel central, cuya forma de trabajo es articular políticas con los gobiernos

provinciales y municipales, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en lo que se denomina la Red Federal de Políticas Sociales.

Tucumán tiene un CDR, y es donde confluyen los diferentes programas del MDS, es sede del INAI delegación norte, e interviene con las comunidades indígenas de la provincia.

En este marco, el MDS tiene organismos con administración centralizada y descentralizada. En la primera están la Comisión Nacional de Pensiones; y la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.

Los organismos descentralizados, que poseen administración propia son: INAI, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y Lotería Nacional.

1.5.2. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

En el marco de la ley N° 23302, se crea en el año 1985 el INAI. Se intentó crear un instituto descentralizado pero en la actualidad y desde su creación este organismo dependió del actual MDS (Anexo N° 8). Al respecto y enmarcada en áreas o direcciones, la nómina de instituciones y programas que conforman esta red de proyectos de desarrollo se presentan a continuación (Aimaro, 2013).

El INAI tiene tres Direcciones:

i) Dirección Nacional de Desarrollo de Comunidades Indígenas.

Esta dirección tiene tres áreas (Desarrollo Comunitario, Educación y Cultura y Artesanías) a través de las cuales se formulan, aprueban, apoyan e implementan proyectos en las comunidades originarias del país. La primera área se denomina de Desarrollo Comunitario, desde la que, en el caso particular de la provincia de Tucumán, se ejecutaron los siguientes proyectos:

- Proyecto de hortalizas en la comunidad indígena Nogalito.
- Agua Potable para la comunidad indígena Diaguita El Mollar.
- Agua para la comunidad de Ampimpa.
- Agua para consumo comunidad indígena Nogalito.
- Agua para la comunidad indígena de Tafi del Valle.
- Radios VHF (varios destinatarios).

En esta línea de trabajo se ejecutaron propuestas como las del Proyecto de Desarrollo de Comunidades Indígenas (DCI); Planificación Comunitaria en 2003; Fortalecimiento Organizacional para las comunidades de Amaicha y Quilmes en el año 2004 y 2007; y Fortalecimiento de las capacidades administrativas para la comunidad india Quilmes y Comunidad Indígena Amaicha del Valle.

Por último se menciona como relevante en esta línea el Programa de Acompañamiento a Comunidades Indígenas (PACI). Dicho programa, en Tucumán, denominado “TucumPACI” tuvo sus inicios en el año 2007, con el fin único de que las comunidades

indígenas realicen una efectiva priorización de sus necesidades. A partir de la implementación del mencionado programa todas las comunidades pueden formular proyectos acordes a sus realidades.

Una vez aprobado el TucumPACI, se eligió a la comunidad responsable, que fue la comunidad indígena de Casas Viejas. Se adquirió equipamiento, y se llevaron adelante capacitaciones de referentes propuestos por las distintas comunidades para asumir la responsabilidad como promotores del proyecto. La función de los promotores fue la de recorrer las comunidades reuniéndose con sus autoridades para dar a conocer los objetivos del proyecto y proponer las asambleas. En dichas asambleas, las comunidades deberían realizar diagnósticos y priorizar los problemas que las afectan.

De este proceso participaron todas las comunidades indígenas de Tucumán. Como resultado de ese trabajo, en la mayoría de los casos la prioridad fue la referida a la problemática del agua, tanto para consumo humano como para riego. También surgió como una cuestión fundamental, la del territorio, ante lo cual se planteó que la ley N° 26160 abordaría esta problemática.

En un rango de menor importancia surgieron los problemas de vivienda, caminos, infraestructura para la atención de la salud, la educación y espacios de uso comunitario.

Una vez efectuada la priorización, cada comunidad, en conjunto con el equipo del INAI, pudo establecer acuerdos con profesionales del ámbito público y privado para formular e implementar los proyectos.

Según surge de los informes del TucumPACI, los problemas que se manifiestan tienen que ver con:

- Tiempos de cada comunidad en llevar adelante los procesos de acuerdos y priorizaciones.
- Demora en la tarea de los promotores quienes debieron adecuarse a los tiempos de las organizaciones.
- Exceso de gastos por tareas de gestión.
- Vencimiento de plazos de ejecuciones.
- Demoras en la elección de los técnicos (Anexo N° 9).

La segunda área es la de Educación. Ésta es el área en donde se implementa el programa “Educación Intercultural Bilingüe” - EIB (Anexo N° 10).

Esta línea de trabajo se vincula con las becas a estudiantes secundarios (actuales becas complementarias); becas a universitarios y terciarios y tutores interculturales.

La tercera y última línea es la Dirección de Desarrollo, llamada de Cultura y Artesanías. En el caso de Tucumán, los proyectos financiados bajo esta línea fueron: radio y comunicación, donde intervinieron la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que es un organismo descentralizado y autárquico creado a partir del artículo 10 de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual; su función principal es aplicar, interpretar y hacer cumplir la nueva ley; el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), quien junto con la AFSCA habilitan las frecuencias radiales para los pueblos originarios; y el MDS. Las comunidades indígenas

participantes del proyecto radio fueron Comunidad India Quilmes y Comunidad Indígena Diaguita El Mollar.

Otro proyecto bajo esta línea fue el del Banco de Datos e Imágenes y Sonido (sin participación de comunidades tucumanas por el momento) y tres proyectos artesanales donde sí participa la provincia de Tucumán, y son “Cueros” con la comunidad indígena Chuschagasta; y “Rescate tejido La Angostura I”, y “Rescate de tejido La Angostura II” (diferentes etapas de un mismo proyecto para la comunidad indígena de La Angostura).

ii. Dirección Nacional de Tierras y el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI).

Esta Dirección aborda la cuestión de las personerías jurídicas para las comunidades indígenas, elemento esencial que el Estado requiere para que las comunidades originarias sea reconocidas como tales y reciban apoyo en proyectos y /o programas.

El RENACI es el Registro Nacional de Comunidades Indígenas creado entre los años 1997 y 1998, a partir de la Resolución N° 4811 que establece los requisitos para la inscripción de las Comunidades Indígenas en el mencionado registro.

En el año 2007, se crea el RETECI, que es el Programa de Relevamiento Territorial en Comunidades Indígenas para abordar y regularizar las cuestiones territoriales de las comunidades originarias del país. Este organismo se enmarca en la Ley Nacional N° 26160 de emergencia territorial, ante el avance de los históricos conflictos que los pueblos tuvieron y tienen en materia de tenencia de tierra.

En Tucumán está operando con notables avances en materia de resolución de conflictos. Al respecto, se afirma

“...el RETECI es el segundo acto en serio, trascendental y concreto del estado nacional (el primero fue la sanción y prorroga ley 26.160) en materia de efectivización de los derechos Humanos de los pueblos Originarios. Es comenzar de verdad a trazar una política publica en el tema, discriminado qué es territorio indígena hoy (uso actual tradicional y publico) y qué no. Esto era muy necesario para después poder instrumentar (sea vía política o judicial) su entrega definitiva en posesión y propiedad comunitaria, a la comunidad indígena que sea. El RETECI es un trabajo arduo y difícil. solo equipos sólidos y de confianza pueden hacerlo bien. tal el caso de Tucumán. Es mi opinión. En todo el país solo 6 provincias no tienen co coordinación del INAI central, entre ellas Tucumán” (García V., 2012).

Siguiendo la línea del otorgamiento de personerías jurídicas y reconocimientos, surge por decreto en el año 2010 el RENOPI (Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas), con lo cual se avanza un poco más en cuanto al reconocimiento y reivindicación de las comunidades y de sus organizaciones. Tucumán tiene personería de la Unión de la Nación de los Pueblos Diaguitas (UNPD).

Otras importantes propuestas surgidas desde esta Dirección son las siguientes: el Programa de regularización dominial, y el Programa de fortalecimiento comunitario y acceso a las justicia. El último proyecto se implementó en el año 2007 en la comunidad indígena de Chuschagasta. En el año 2010 participó la Unión de la Nación de los

Pueblos Diaguitas y en el año 2011, a causa del asesinato del dirigente indígena de Chuschagasta Javier Chocobar en manos de terratenientes de la zona, la comunidad indígena de Chuschagasta participó del Programa vinculado al “Acceso a la Justicia”.

iii. Dirección Nacional de Afirmación de Derechos.

Esta Dirección fue creada en el año 2010 con el fin de abordar cuestiones de fortalecimiento institucional. Se esperaba que la misma tuviera alcance en los aspectos referidos al acceso a la justicia ya que tiene personal nombrado a esos efectos, pero hasta la fecha en la provincia de Tucumán esta Dirección aún no está operativa.

1.6. Programas y proyectos desarrollados en el período 2000-2010.

En este apartado se describen los programas y proyectos que se ejecutaron en el periodo 2000-2010. Cabe destacar que los mismos tuvieron diferentes alcances y efectos frente a las comunidades indígenas destinatarias. Asimismo, existen algunos que aún no se han implementado pero se rescatan como surgidos a partir de políticas públicas en materia de pueblos originarios.

Con respecto a procesos de desarrollo rural, es importante mencionar la ejecución e implementación del Proyecto Desarrollo de Comunidades Indígenas (DCI) cuyo beneficiario o destinatario directo fue la comunidad india Quilmes, y todas sus comunidades de base. Vale decir que la comunidad indígena como organización, tuvo un rol principal a lo largo del proceso de implementación de las diversas líneas del proyecto.

La etnia Diaguita-Calchaquí, particularmente las comunidades indígenas de Amaicha del Valle y Quilmes, fueron beneficiarias durante el año 2003 hasta 2007 con el Proyecto Desarrollo Sustentable de Comunidades Indígenas –DCI Préstamo BIRF N° 4580-AR, con fondos del Banco Mundial, los cuales se distribuyeron en Argentina en diferentes provincias. Se inicia entonces el Proyecto DCI, el cual preveía la formulación, ejecución e implementación de proyectos de desarrollo productivo y cultural de índole comunitario en diferentes comunidades de todo el país. Los fondos de inversión para estos proyectos provenían del Banco Mundial, se operaban en el territorio a través del MDS y desde el mencionado organismo hacia las cuentas de las Comunidades Indígenas participantes (Anexo N° 11).

Estas comunidades, elegidas por su grado de organización, eran acompañadas por un equipo técnico interdisciplinario e intercultural llamado Unidad de Manejo Local (UML); la que participaba en el proceso de diagnóstico, priorización, formulación y ejecución de los que se llamaron subproyectos comunitarios.

En la provincia de Tucumán, se seleccionaron para la implementación del Proyecto DCI a las comunidades indígenas de Amaicha del Valle y Quilmes. La UML tomó el nombre de “UML Diaguita-Calchaquí” y su sede fue radicada en Amaicha del Valle, localidad situada a unos 160 Km de la ciudad capital provincial.

Durante los inicios del Proyecto DCI, se realizaron relevamientos, diagnósticos, reuniones y priorizaciones de necesidades de las comunidades, para poder formular

subproyectos comunitarios adaptados a la zona y que reflejen las necesidades reales de ambas poblaciones (Amaicha y Quilmes).

Los proyectos más relevantes en los cuales este equipo participó activamente desde su formulación hasta su ejecución y seguimiento durante el año 2006-2008 fueron los siguientes:

- **Planificación Comunitaria:** financiaban los encuentros de ambas comunidades para efectuar la priorización y búsqueda de problemas con el fin de formular futuros proyectos.
- **Fortalecimiento Cultural:** financiaba todo lo referido a fortalecimiento institucional, vale decir, asambleas, capacitaciones, entre otros aspectos.
- **Torna Amaicha-Quilmes:** financiaba un pequeño fondo rotatorio con el cual los pequeños productores indígenas tanto de Amaicha del Valle como de Quilmes, obtenían crédito en semillas y herramientas e iban devolviendo en cuotas.
- **Estudio de las Aguas Subterráneas Amaicha-Quilmes:** financió un completo estudio de aguas subterráneas con el fin de efectuar futuras perforaciones de pozos para el aprovechamiento del recurso.
- **Agua para la Comunidad de Anjuana:** financió la perforación de un pozo para el aprovechamiento de las aguas subterráneas, y la bomba eléctrica para su utilización.
- **Agua para la Comunidad de El Paso:** financió la perforación de un pozo para el aprovechamiento de las aguas subterráneas, y la bomba eléctrica para su utilización.
- **Provisión y uso sustentable del agua para la Comunidad de Rincón, Centro y Quilmes Bajo:** financió el entubado de las aguas desde la toma del río, para abastecer a cada familia beneficiaria de agua.
- **Provisión y uso sustentable de Agua para la Comunidad de Yasyamayo:** financió el entubamiento de agua desde la toma del río, hasta cada parcela productiva, con el otorgamiento de aspersores para eficientizar el antiguo sistema de riego del lugar.
- **Riego presurizado para la Comunidad de Los Colorados:** financió el entubamiento del agua desde la toma del río, hasta cada parcela productiva, más aspersores, riego por goteo y plantas de frutales para cada familia.

La UML Diaguita-Calchaquí estuvo conformada por un equipo técnico interdisciplinario, coordinado por el CPN Jorge Daniel Aimaro, persona con vasta experiencia en la zona y que fuera asesor contable ad-honorem en los inicios de la organización de la comunidad india Quilmes.

El resto del equipo estaba conformado por un promotor territorial indígena, un empleado administrativo indígena, dos Contadores Públicos Nacionales, un abogado, un ingeniero agrónomo y un ingeniero civil. Los técnicos fueron ingresando al equipo en diferentes momentos.

Las funciones del promotor territorial eran visitar a las familias comuneras de Amaicha y de Quilmes para comentarles acerca de los subproyectos en curso; recepcionar demandas de los destinatarios; acompañar al resto del equipo en tareas de visitas técnicas; completado de planillas; registro de alcances de los proyectos; fotografiar sembrados y sistemas de riego, entre otras acciones que le permitían participar de la cotidianidad de las familias destinatarias del DCI.

El técnico administrativo tenía como función tareas de gabinete. En conjunto con el técnico contable de la UML Diaguíta-Calchaquí, realizaban las rendiciones de cuenta de los diferentes subproyectos, que debían ser presentadas ante las autoridades del INAI a nivel nacional, y a su vez ante los organismos internacionales de financiamiento. Paralelamente orientaba a los tesoreros de cada comunidad indígena sobre cómo se realizaba las rendiciones de cuentas. También se dedicaba al manejo del fondo rotatorio del subproyecto Torna Vuelta, donde artesanos y productores agropecuarios sacaban un crédito en materiales, herramientas o servicios y el mismo se devolvía en cuotas en dinero, producción o trabajo a este fondo rotatorio.

El consultor técnico contable se dedicaba a la cuestión administrativa y socio productivo. Realizaba tareas asociadas a la formulación de proyectos, seguimiento, capacitaciones de diversas temáticas (por ejemplo cálculo del costo de hora de luz en el proyecto de pozos de agua). Esto serviría para que los destinatarios del proyecto pudieran determinar técnicamente cuánto deberían pagar por el uso del pozo el cual tenía una bomba eléctrica. En cuanto a la formulación de proyectos, sus funciones eran determinar la viabilidad de los mismos a través de cálculos de costos de inversión, gastos, tasa interna de retorno (TIR), entre otros aspectos específicos.

El abogado de la UML participaba activamente del estudio de títulos realizado en la Comunidad de Quilmes, asesoraba y acompañaba a las comunidades en las cuestiones legales que cotidianamente surgían en la zona; y participaba en la formulación, ejecución y seguimiento de numerosos proyectos. En determinados subproyectos, apoyaba a las comunidades cuando surgían conflictos en torno al territorio que ponían en riesgo la implementación de los mismos. Ejemplo de esto fue la mediación entre vecinos por el proyecto Casa de la Comunidad India Quilmes, con presentaciones ante organismos provinciales por “demoras” en aprobaciones de obra, entre otros.

El ingeniero civil del equipo se dedicaba a asesorar en subproyectos que requerían cierta infraestructura, como lo fue la perforación de dos pozos de aguas subterráneas y canalizaciones y entubamiento para la instalación de sistemas de riego. Asimismo colaboraba con la formulación y seguimiento de algunos subproyectos.

El consultor técnico agrícola, personificado en el proyecto DCI como el ingeniero agrónomo, formulaba proyectos con diagnósticos participativos, implementaba y realizaba seguimientos de los mismos lo que se implicaba acciones tales como la búsqueda de presupuestos, realización de reuniones para informar acerca de los subproyectos a desarrollarse, organización de encuentros para confeccionar reglamentos de uso compartido, capacitaciones en temas específicos (sanidad en frutales de carozo, implantación de pasturas, entre otros temas). También realizaba visitas a los productores indígenas que participaban del proyecto Torna Vuelta, para realizar un seguimiento de sus cultivos y registro de algunas demandas que pudieran tener.

En los proyectos de agua, el consultor técnico agrícola, participaba en la compra de frutales para las parcelas de los productores que accederían al riego, y de la compra de semillas que ofrecía el proyecto.

Todo lo antes mencionado se llevaba adelante por organización y supervisión del coordinador del equipo. Éste realizaba tareas de coordinación interna, formación de los miembros del equipo de trabajo, gestionaba recursos ante organismos provinciales y nacionales; elaboraba informes ante organismos y auditores internacionales, y

participaba en reuniones generales dónde se debatía las disponibilidades de recursos para las diferentes UML del país.

A su vez gestionaba recursos que complementaban los existentes en los subproyectos y de esta manera se garantizaba la culminación de los mismos. Ejemplo de esto fue la obtención de planes PEC para cubrir la mano de obra para la realización de un canal que cubriría toda la zona desde Rincón de Quilmes, Quilmes Bajo y Quilmes Centro. De esta manera desde la coordinación del equipo se hacía un acabado estudio de las políticas existentes en materia indígena, para utilizarlas en beneficio de las comunidades originarias tucumanas.

La modalidad de trabajo interna que se tuvo en la UML Diaguíta-Calchaquí, respondía a los parámetros de la horizontalidad y con plena participación en las diferentes etapas de los proyectos (formulación, implementación, ejecución y seguimiento).

La vinculación del equipo técnico con las comunidades de base destinatarias de los diferentes proyectos se hacía a través del diálogo, discusión y consenso de todos los puntos que podrían prestarse a discusiones. En todo momento se fomentó la participación de los comuneros en los distintos momentos de los proyectos, involucrándose el equipo en las problemáticas emergentes que surgen constantemente en estas poblaciones.

Un aspecto notable de la UML Diaguíta-Calchaquí es que fue la única que funcionó “in situ” o sea en el área de implementación de proyectos. Este dato no es menor ya que con el tiempo, los comuneros de Amaicha y de Quilmes fueron familiarizándose con el equipo del Proyecto, sus oficinas y de esta manera se sintieron parte de un proyecto que daba respuestas concretas.

La marca que ha dejado este proyecto en la zona de los Valles Calchaquíes, es de significativa importancia. En la zona se hicieron visibles obras de gran envergadura, y se pudo vincular a instituciones ajenas a la comunidad para un abordaje integral.

Otros programas implementados en el marco de los pueblos originarios fueron:

Programa Médicos Comunitarios (PMC). Programa dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, implementado desde el área “Salud Indígena” creada en 2005. La propuesta consistía en un abordaje interdisciplinario tendiente a mejorar la calidad de vida y salud de los pueblos originarios. El abordaje era interdisciplinario, siempre acompañados por actores de la zona, principalmente agentes sanitarios. Las acciones que se llevaban adelante eran de diagnóstico, intervenciones inmediatas, articulaciones y gestiones con el sistema de salud de la provincia, escuelas, clubes, centros vecinales. (Rudelli, 2013).

En cada comunidad y con aprobación de la misma, el equipo se conformaba por médicos, enfermeros, obstetra, trabajadores sociales y antropólogos. Además había un equipo técnico itinerante los cuales eran especialistas en saneamiento ambiental y zoonosis y nutrición. (Rudelli, op. cit.).

La capacitación experiencial para los técnicos se materializaba a través de una beca de investigación. La duración de la misma fue desde el año 2005 hasta 2008. Según se

informa, fue una etapa diagnóstica para evaluar el Programa ANAHI (Programa de Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para las Poblaciones Indígenas), dependiente también del Ministerio de Salud, área programas sanitarios. Este proyecto se implementó en la zona de Amaicha y Quilmes, durante la ejecución Proyecto DCI. Este equipo identificó problemas de calidad de agua en la zona de las comunidades de base de Quilmes Bajo, Quilmes Centro y Rincón de Quilmes.

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia es creada a partir de la Ley N° 26.061, de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, dictada en el año 2005. La SENAF, es un organismo del Poder Ejecutivo Nacional especializado en infancia y familia; y del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, órgano de debate y consulta que propone políticas públicas para la infancia y la adolescencia en todo el territorio argentino. Según se informa desde el MDS, el principal objetivo de las políticas implementadas por estos organismos consiste en fortalecer a la familia, entendiéndola como base para un desarrollo humano sustentable y como espacio afectivo fundamental para el crecimiento de niños y niñas. También se aborda desde la SENAF, la problemática de adolescentes en conflicto con la ley penal, y la temática de los adultos mayores (MDS, 2012).

Desde esta mirada integradora del organismo, los proyectos propuestos e implementados en comunidades originarias son diversos, pero intentan apuntar hacia el fortalecimiento cultural a partir del encuentro reflexivo de los destinatarios.

Algunas de las propuestas fueron (Cinquegrani, 2013):

Proyecto Inti Huayra en la comunidad indígena de Amaicha del Valle. Se enmarcó en la línea de fortalecimiento familiar y comunitario. Esta línea como se mencionó anteriormente, se basó en generar espacios de encuentro, diálogo y reflexión a través de la música. En esta misma línea pero desde el aspecto deportivo se ejecutó el proyecto “Yaku Guagua”.

En la comunidad indígena de Casas Viejas se llevó adelante el proyecto Deporte e Identidad en Casas Viejas. Fue una propuesta simple de tres meses de duración. Las actividades propuestas fueron jornadas deportivas y de integración en el club de la zona (San Guillermo), con la participación de once clubes del departamento Tafí del Valle.

Otra propuesta en la zona fue el Proyecto de rescate de memoria y recopilación de historias, anécdotas, juegos ancestrales. Éste se basó en la Ley N° 26061 (Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes).

En la comunidad de base de El Paso, perteneciente a la comunidad india Quilmes, la SENAF financió un proyecto denominado Deporte solidario. La idea se propuso desde la línea deporte y recreación.

En la comunidad indígena de Potrero Rodeo Grande, asentada en Valle de Trancas, se financiaron proyectos desde la línea de fortalecimiento cultural para promover y solidificar la identidad de la zona. Se llevaron adelante actividades tales como

confección de trajes típicos, y trabajo con jóvenes en el rubro de la curtiembre ya que en la zona se realizan actividades para confeccionar monturas para caballos.

En la comunidad indígena de Chuschagasta, asentada también en el Valle de Trancas, la SENAF financió una cancha para fútbol y hockey, enmarcado en la línea de deporte y recreación.

Desde el Centro de Referencia, el programa del monotributo social también buscaba beneficiar a numerosos emprendedores indígenas.

El MDS dentro de su organigrama contiene a la Secretaría de Deportes de la Nación, quien también apoya a las comunidades a través de financiamiento de proyectos.

En la comunidad india Quilmes, se llevó adelante en el año 2010 el proyecto Deporte de orígenes, cuyo objetivo fue capacitar a promotores deportivos en identidad, recuperación de relatos, de juegos y reglamentos de los diferentes deportes, para que ellos fuesen multiplicadores del conocimiento entre sus pares y la comunidad en general.

El Programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Tucumán, se ejecuta a través de la Subsecretaría de Empleo de la provincia, y ha beneficiado a muchos jóvenes tucumanos de diferentes departamentos de la provincia. Este programa se implementó en la comunidad india Quilmes, comunidad indígena de Casas Viejas y comunidad indígena Nogalito.

Otras áreas de apoyo de la Subsecretaría de Empleo que fueron implementadas en comunidades originarias fueron proyectos de mano de obra para desocupados para trabajar en construcciones colectivas, como por ejemplo obras de agua en la comunidad de base de Ampimpa de la comunidad indígena de Amaicha del Valle; proyectos de canales para conducción de agua en la comunidad de Base de El Pichao y Colalao del Valle, pertenecientes a la comunidad india Quilmes.

Becas. Desde el año 2007, se implementaron becas para estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas en la provincia. Desde la implementación de la Asignación Universal por Hijo en el año 2010, estas becas se dieron de baja. En el 2011 y con la marcha de los pueblos originarios denominada “Por un Estado Plurinacional” (Anexo N° 12), evento reivindicativo de gran envergadura, se elevó un pedido a la Presidencia de la Nación por el cual se solicitaba la reactivación de estas becas, lo cual recibió respuesta positiva. Dicha beca es un incentivo de \$1.000 en entrega única para los jóvenes destinatarios. Para concretar estas acciones, se firman acuerdos entre el INAI y el Ministerio de Educación.

Estas becas se denominan “complementarias”, y están dirigidas a mayores de 18 años. Las mismas tienen diferentes destinatarios: jóvenes judicializados, padres y madres adolescentes, hijos de ex soldados combatientes de Malvinas, y comunidades indígenas.

En el año 2011, se lograron 700 becas para la provincia de Tucumán, de las cuales desde la coordinación del INAI-Tucumán, se negociaron 600 aproximadamente para comunidades originarias.

Desde el INAI aún se continúa con el programa Tutores interculturales, el cual involucra a referentes indígenas que acompañan a los jóvenes en su trayecto educativo y en la búsqueda y rescate de la identidad cultural de su zona.

Ministerio de Desarrollo Social. Desarrolla un conjunto de programas de asistencia a comunidades originarias consideradas como familias en riesgo y vulnerables. Estos programas de asistencia son de diferentes tipos:

i. Ayuda directa a las personas. Es una asistencia a familias vulnerables, la cual se realiza en base a un informe social realizado por trabajador social del INAI.

ii. Talleres familiares. Es una ayuda de tipo complementaria. Se otorgan herramientas, o maquinarias que completen talleres productivos existentes (por ejemplo máquinas de coser).

De lo referenciado anteriormente, durante el año 2012 se solicitaron alrededor de cincuenta proyectos. En las comunidades indígenas de Potrero de Rodeo Grande se implementaron proyectos de asistencia de ayuda directa. En la comunidad india Quilmes se otorgaron chapas, camas y colchones para viviendas familiares.

Otra línea de apoyo del MDS de la Nación, es la denominada Ayuda Institucional, que consiste en la entrega de materiales para las organizaciones, como por ejemplo mesas y sillas. Las comunidades que solicitaron esta ayuda fueron la comunidad indígena Potrero Rodeo Grande, comunidad indígena Chuschagasta y la comunidad indígena de Amaicha del Valle.

Jornada Solidaria también es una línea de apoyo del MDS, que representa una acción concreta para un establecimiento comunitario. La ayuda no es en dinero; se otorgan materiales y equipamientos. Se beneficiaron de esto la comunidad indígena de Casas Viejas, con el otorgamiento de ventanas y equipamientos para baños para el club que nuclea a toda la comunidad de Casas Viejas, el club San Guillermo.

Durante el año 2011, el Centro de Referencia (CDR) organizó la Feria de Políticas Públicas, cuyo principal objetivo fue difundir las políticas del MDS. Dicha feria contó con la participación de diferentes organizaciones, programas del MDS, comunidades indígenas y otras organizaciones, que mostraron a través de stands sus actividades y resultados. Además se llevaron a cabo talleres de diferentes temáticas como género, pueblos originarios, cerámica, identidad e interculturalidad, entre otros.

De estas ferias hasta el momento se van realizando tres: Amaicha del Valle, Lules y en la capital provincial con sede de la Casa Histórica.

Esta propuesta fue positiva para las comunidades originarias participantes ya que las mismas pudieron llevar a cabo gestiones y trámites (por ejemplo pensiones, monotributo social, entre otros) que por las distancias y accesos no pueden realizar.

En el año 2012, el CDR que nuclea los diferentes programas del MDS de la Nación, firmó convenio con la Subsecretaría de Empleo, para implementar un programa de capacitación en diferentes áreas: deportes, economía social y aspectos socio-

económicos. Este acuerdo tiene por objetivo difundir las políticas del MDS y los agentes son jóvenes del Programa Más y Mejor Trabajo.

La Subsecretaría de Empleo en el año 2012, con apoyo del INAI, formuló proyectos de Maquinarias Agrícolas para las comunidades indígenas de Quilmes, Los Zazos, Casas Viejas, El Mollar, Potrero Rodeo Grande, y Nogalito. Este proyecto que aparenta ser de gran envergadura, se implementará con la figura de un comodato con las comunidades y la Subsecretaría de Empleo en relación a las maquinarias y su uso.

La provincia de Tucumán participa activamente del Programa Argentina Trabaja. Si bien esta iniciativa no fue diseñada para pueblos originarios, el beneficio es indirecto. Las cooperativas se forman y se otorgan recursos a través de las comunas rurales de las diferentes localidades.

La comunidad india Quilmes tiene una situación particular ya que el actual Delegado Comunal es comunero indígena, por lo cual, ejerce el nuevo y conocido “derecho a la consulta” para con los pueblos como así también abre la participación de los comuneros originarios en estos proyectos. Esto permitió que algunas de las personas que dirigen las cooperativas pertenezcan a la comunidad india Quilmes.

Algunas de las tareas que llevan a cabo las cooperativas en donde participan comunidades indígenas son en general de construcción de módulos habitacionales. Tal es el caso de la comunidad indígena de Casas Viejas y comunidad indígena Diaguita El Mollar.

Subsecretaría de Agricultura Familiar. En las últimas etapas del Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino (PRODERNOA), la comunidad de base de Talapazo, implementó un proyecto de pequeñas viviendas para utilizarse como albergues para el turismo de la zona. Ya siendo Subsecretaría de Agricultura Familiar, trabajó y trabaja con las comunidades indígenas de Amaicha y Quilmes para el emprendimiento agrícola de viñedos. Esta propuesta beneficia a unos 100 productores indígenas de las comunidades citadas. Se financian alambre, postes, plantas, y capacitaciones en el manejo del cultivo de la vid.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Desde este Ministerio, entre otras cosas, se llevan adelante la construcción de viviendas, área sensible en las comunidades indígenas, a través del Programa Viviendas rurales y hábitat aborígen. En la provincia de Tucumán este programa se implementa a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). En la actualidad, se construyeron 18 viviendas con 4 ambientes cada una.

Aún está en ejecución un proyecto de agua potable en El Infiernillo. Esta obra es financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), la cual aborda la problemática del agua. El mismo es un organismo autárquico descentralizado del Estado Nacional. Fue creado por ley en 1995 y opera en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas de este Ministerio.

Iniciativas similares se están formulando para la comunidad de base del Arbolar y Colalao del Valle, ambas pertenecientes a la Comunidad India Quilmes. Esto surgió a partir de encuentros entre UNICEF y el INAI. Posteriormente participó el Servicio

Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPA PyS) incrementando el presupuesto para cumplimentar los proyectos de referencia.

Ministerio de la Producción de la provincia de Tucumán. A través de la Dirección de Recursos Hídricos financió la construcción de un sistema de riego en la comunidad de base de Los Zazos, comunidad indígena Amaicha del Valle.

Otros organismos e iniciativas que buscan un efecto positivo en las comunidades indígenas son:

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA): en el año 2012 se financió un proyecto de riego en la comunidad de base del Pichao, comunidad India Quilmes. Este proyecto se lleva adelante en acuerdo con la comuna de Colalao del Valle.

Unidad para el Cambio Rural (UCAR): desde este organismo se ejecutó en el año 2009 el PRODERI (Programa de Desarrollo Rural Incluyente) por el cual se financió la propuesta de un vivero de autóctonos y vivero de frutales en comunidades originarias de Tucumán. La UCAR es un organismo que gestiona carteras de programas y proyectos con financiamiento externo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP): durante el año 2012 realizó una propuesta a nivel regional que financiará tres grandes líneas:

- i) Turismo.
- ii) Agua.
- iii) Industrialización de productos primarios para valor agregado de los mismos.

De estas propuestas, participan las diferentes provincias del NOA y se formó un consorcio con representantes. En el caso de Tucumán, el representante es el Cacique de la comunidad indígena de Tañi del Valle, Don Santos Pastrana. Este proyecto aún no está implementado, pero será de un importante alcance en la región, ya que se abordan tres aspectos que realmente representan necesidades sentidas de los pueblos originarios.

El agua como recurso indispensable tanto para la vida como para las actividades agrícolas y pecuarias de la zona, el turismo como herramienta de transmisión y difusión cultural que conjuntamente con la industrialización de productos apuntan a la mejora económica a través de la comercialización y mejora de éstos.

El PROSAP implementa a nivel provincial y nacional proyectos de inversión pública social y ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): en la actualidad aborda los temas sanidad en nogal y cabras para productores indígenas. Cabe destacar que las distintas agencias del INTA en Tucumán, intervienen con comunidades originarias, ya que en la mayoría de los casos son considerados productores campesinos.

Años anteriores en el marco del Proyecto DCI, los técnicos del INTA de la zona de Valles Calchaquíes, intervinieron con productores indígenas llevando adelante capacitaciones y seguimientos de actividades.

Ministerio de Industria de la Nación: en el año 2012 en la comunidad de base de Colalao del Valle de la comunidad india Quilmes, Colalao, se ejecutó el programa Jóvenes Emprendedores, y desde la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas y Desarrollo Regional (SEPyME) también hubo financiamiento.

Con base en lo hasta aquí descripto, el presente trabajo se plantea como interrogante central el conocer cuáles fueron los efectos que en aspectos productivos y organizacionales han tenido las políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios y desarrolladas durante el periodo 2000-2010 en la provincia de Tucumán.

1.7. Objetivos.

1.7.1. Objetivo general.

Analizar los efectos que en las dimensiones socio-organizacional y técnico-productiva han tenido las políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios en la provincia de Tucumán durante el período 2000-2010.

1.7.2. Objetivos específicos.

- Describir la evolución situacional de comunidades indígenas situadas en diferentes regiones de la provincia de Tucumán en el período de referencia.
- Catastrar los programas de intervención que han sido desarrollados desde el Estado en las comunidades seleccionadas.
- Identificar los resultados que las políticas públicas han tenido en lo socio-organizacional.
- Distinguir los efectos que las políticas públicas han tenido en lo económico-productivo.

1.8. Hipótesis.

La presente investigación plantea como hipótesis lo siguiente:

Las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas de la provincia de Tucumán en el período estudiado, habrían tenido efectos positivos en los aspectos socio-organizacionales, pero éstas no habrían alcanzado significativamente los ámbitos vinculados a lo técnico productivo ni a los ingresos de las familias.

2. Estado actual del conocimiento.

Los contenidos centrales que sostienen el marco conceptual del presente trabajo son cuatro: políticas públicas, pueblos originarios, territorio y desarrollo rural. A continuación se presenta el estado del arte en cada uno de los mismos.

2.1. Políticas públicas.

El tema de políticas públicas presenta variados abordajes. Canet (2010) en su trabajo denominado Análisis de experiencias de intervención pública y privada con pueblos indígenas, realiza un acabado esquema de los organismos públicos y privados que intervienen en todas las comunidades indígenas de Argentina.

Trata el marco jurídico que tienen los pueblos indígenas a nivel internacional, nacional y provincial. En este marco trae conceptos en relación por ejemplo al manejo de los recursos naturales, como el de “gobernanza”

“...gobernanza de los pueblos indígenas es donde la autoridad administrativa y la responsabilidad recaen en los pueblos indígenas bajo diversas formas de instituciones y normas consuetudinarias o legales, formales o informales...”

El trabajo detalla la organización de los pueblos indígenas argentinos, las comunidades que lo integran, la superficie ocupada y el año de conformación de las organizaciones. A partir de ahí, menciona las organizaciones de segundo grado existentes en algunos pueblos, lo cual resulta un avance muy importante por la posibilidad de generar políticas y estrategias para pleno desarrollo como así también de defensa de los derechos. En este contexto, se menciona a la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita como la organización de segundo grado que posee la provincia de Tucumán, en conjunto con otras comunidades Diaguitas de provincias vecinas. El trabajo avanza en la actualización de los organismos que se vinculan con comunidades indígenas.

Realiza asimismo una detallada caracterización de los programas públicos vinculados a pueblos originarios. Particularmente describe al INAI, las direcciones que la integran, las diferentes áreas las cuales son: educación, cultura y artesanías y desarrollo comunitario. Aborda el modelo de intervención, sus alcances y limitaciones.

El trabajo, en su análisis abarca a todo el país, sus provincias y sus pueblos indígenas. Para el caso de la provincia de Tucumán, la autora cita como relevantes al Proyecto DCI; Proyecto Torna Vuelta, y al Proyecto de riego presurizado en el Valle de Tafi.

Además presenta una síntesis de logros, dificultades y recomendaciones, en torno a los siguientes aspectos: educación; derecho; políticas; organización y participación; territorio; diseño de programas y proyectos; salud; género; vivienda; economía y producción; cultura y jóvenes.

Logra sintetizar y actualizar datos muy valiosos cuando se intenta conocer y analizar las intervenciones públicas y privadas en relación a los pueblos indígenas. Es un aporte al conocimiento de las políticas públicas vinculadas a los pueblos indígenas. El hecho de que sea un informe de un organismo nacional como la Subsecretaría de Agricultura Familiar, habla a las claras de un avance en el reconocimiento de estas comunidades.

Astorga y Facio (2009) pertenecientes a la Universidad Autónoma de México, realizan una recopilación de autores que abordan el tema de las políticas públicas. Efectúan un breve racconto histórico del lugar que este concepto ocupó en los diferentes momentos de la política en general, y cómo existe en la actualidad mayor apertura en cuanto a las propuestas originadas desde éstas. Abordan la importancia de las políticas públicas y los tipos de evaluación de las mismas para reflexionar sobre su aplicabilidad y eficiencia.

Recorren definiciones de “políticas públicas” en la palabra de diferentes autores, como: Tamayo Saénz; Aguilar; Lindblom; entre otros.

Los autores abordan dos aspectos relevantes:

- i. Establecen diferencias entre el concepto de “política” y el de “políticas”. El primero habla de relaciones de poder, tensiones entre organizaciones sociales y gobierno y procesos electorales. “Políticas” son las acciones u omisiones de los actores involucrados en procesos o temas de índole público.
- ii. Un segundo punto que mencionan los autores es lo citado por Aguilar cuando postula “el carácter público de las políticas” y a esto se lo define como “intervención de actores que son diferentes al gubernamental...el ámbito público y la participación de actores será el principal aporte para que la política pública sea tal”.

Se hace referencia finalmente a las fases de la política en torno a la participación de los actores involucrados.

Medellín Torres (2004) en el trabajo para la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), División Desarrollo Social titulado “La política de las políticas públicas: propuesta teórica y metodológica para el estudio de las políticas públicas en países de frágil institucionalidad”, aborda las cuestiones de las políticas públicas de manera integral. Si bien Argentina no está considerada como un país de frágil institucionalidad, los conceptos son adaptables a particularidades de cada región. Este autor diferencia las figuras del Estado y del gobierno y relaciona a ambos, en torno a la interrelación entre partes en función del desarrollo e implementación de políticas públicas.

“...Las políticas no pueden ser entendidas sino en la perspectiva del tipo de régimen político y de la acción de gobierno de la que emergen. No son variables independientes...” (Medellín Torres, 2004).

En este marco, aborda el concepto de estructuración de las políticas públicas, el cual debe ser comprendido como el producto de un proceso político donde emergen las ideas o proyectos de los que el autor llama agentes (individuos), agencias (alude a instituciones) y discursos. Este último término hace referencia a la interacción entre agentes y agencias. Todo esto para imponer un proyecto a nivel político y para una sociedad determinada.

Hace referencia asimismo a que dicha estructuración sirve para

“...explicar el proceso mediante el cual un gobernante busca ordenar las partes de una manera tal que sus ideas o intenciones se proyecten como formas, relaciones y significados de gobierno, por su equipo de gobierno y por los gobernados...”

También manifiesta un dato importante en torno a esto, y es que el proceso de las políticas públicas no es lineal. En este marco, destaca la importancia de los regímenes políticos en cuanto a que ordena instancias y grados en el que se estructuran las políticas públicas. El trabajo avanza sobre la importancia del régimen político en torno a las políticas públicas, para lo cual manifiesta

“...el régimen político no sólo fundamenta la producción y estructuración de políticas. También imprime sentido normativo y contenido valorativo a las políticas en su papel de vehículo de la interacción gubernativa entre el Estado y la Sociedad...”

Asimismo aporta elementos que sirven para diferenciar los regímenes políticos como la territorialidad y la institucionalización del orden.

La territorialidad está entendida como un campo de relaciones donde el individuo pasa a ser un “ciudadano” sobre el cual el Estado accionará regulando la sociedad en un lugar geográfico determinado; mientras que por otro lado expresa el significado de la institucionalización del orden como la “definición de mecanismos e instrumentos a través de los cuales el poder político interviene en una sociedad.”

Medellín Torres a partir de esto, propone una tipología de regímenes políticos

Tipo I: Regímenes de obediencias sólidas. Países de alta autonomía gubernativa.

Tipo II: Regímenes de obediencias porosas. Países de mediana autonomía gubernativa.

Tipo III: Regímenes de obediencias endebles. Países de baja autonomía gubernativa.

Este autor ubica a Argentina en régimen tipo II.

Posteriormente, aborda el tema de la producción de las políticas públicas, esquemas y pasos. Finalmente se hace hincapié en lo referido particularmente a países del tipo III, con regímenes endebles y baja autonomía gubernativa.

2.2. Pueblos originarios.

Cervera Novo (2010) en el marco de informes e investigaciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, realiza un estudio de actualización acerca de la cuestión indígena de Argentina. Aborda entre muchos otros temas, aspectos referidos a definiciones y clasificaciones de los pueblos originarios, criterios utilizados y también cuestionados. Se destaca que en el caso de la Argentina el criterio utilizado es el “auto reconocimiento”.

Asimismo realiza una interesante actualización de datos censales del número de familias pertenecientes a los pueblos indígenas, y divide a las mismas en las siguientes regiones:

- Región Chaqueña.
- Región Norandina
- Región Patagónica.
- Otras provincias.

Para este caso en particular, cobran interés los datos de la región Andina, donde la etnia Diaguita y Diaguita-Calchaquí alcanza a una población de 16.810 personas. Este dato, incluye a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. En la descripción se presentan a grandes rasgos las zonas y se detallan la región Puna en la provincia de Jujuy.

Para todas las regiones antes mencionadas se enumera dinámicas productivas y problemáticas identificadas en torno al territorio.

En el caso de la región Norandina se describen las siguientes dinámicas productivas:

- Modelo productivo agropastoril y trashumante. Cría de ganado mayor y menor. Producción de leche y sus derivados.
- Horticultura comercial y de subsistencia.
- Trabajos rurales temporarios.
- Emprendimientos productivos artesanales.
- Floricultura y fruticultura con fines comerciales.
- Servicios turísticos.
- Planes de empleos transitorios nacionales y provinciales.
- Empleo estatal en salud, educación y otras dependencias municipales.

Cabe destacar que las dinámicas productivas antes citadas representan a diferentes provincias de la región Norte y Norte andina.

En cuanto a la problemática, se identifican conflictos de territorio, desalojos, entregas de títulos fraudulentos, acciones judiciales, contaminación ambiental por actividad minera; tala indiscriminada de montes, escasez de agua para riego y falta de consulta en elaboración y diseño de proyectos.

Repasa el marco legal existente en relación a los pueblos indígenas y presenta un análisis acerca de la situación educativa de los pueblos indígenas, en relación a la lengua y sistema de becas, finalizando con una enumeración y breve descripción de los diferentes programas nacionales que operan con comunidades indígenas.

En el año 2009 se publica el libro “Pueblos Indígenas, interculturalidad, colonialidad y política”, compuesto por numerosos autores que presentan allí sus investigaciones. Éstas están en su totalidad relacionadas a diferentes pueblos originarios. Se abordan numerosos temas, algunos de los cuales hacen referencia a la problemática del territorio, a la identidad, a las relaciones de parentesco y al fenómeno de migración de los pueblos originarios, vínculos institucionales, entre otros.

“...se aborda la migración entendiéndose la misma en términos de resistencia y como un fenómeno recurrente que se manifiesta como consecuencia de históricos y actuales procesos de avance, conquistas y desalojos hacia los Pueblos Originarios...” (Maidana C., 2009).

Es un aporte teórico relevante para ampliar el conocimiento y poder reflexionar acerca de los vínculos existentes entre investigadores y pueblos indígenas.

La historia contada por sus protagonistas se ve reflejada en el libro “Los Quilmes contamos nuestra historia”. Es un trabajo realizado por la propia comunidad India Quilmes. Se publicó en el año 2006, en el marco del Proyecto DCI (Desarrollo de Comunidades Indígenas-Ministerio de Desarrollo de la Nación). En el mismo se recopilan datos históricos acerca del Pueblo Diaguita, sus luchas, sus actividades y arte, y sus vínculos con otros pueblos. Además narra la situación histórica que alejó a los Quilmes de sus tierras, y cómo a través de diversos procesos las fueron recuperando. En este contexto, presentan el valioso documento de la “Cédula Real”, el cual tiene vigencia a la hora de disputas territoriales, implementación de proyectos y otros reconocimientos.

Lo interesante de este trabajo, es que se da a conocer cómo comenzó la nueva lucha por el territorio, no la de los conquistadores españoles, sino de otros nuevos sujetos, los terratenientes, cómo fue dicho proceso y cómo es la lucha en la actualidad.

Schkolnik y Del Popolo (2005) en su trabajo Los censos y los pueblos indígenas en América Latina: una metodología regional, realizan un gran aporte hacia la conceptualización de pueblo originario. Se aborda la dimensión de los censos, sus tipos de preguntas, tipos de datos y disponibilidad de los mismos en materia de pueblos originarios, limitaciones y potencialidades de las preguntas y sus combinaciones. Todo esto para fomentar o proponer preguntas adecuadas a las diferentes regiones. El trabajo es un aporte hacia la organización de una herramienta tan importante como un censo, para de esta manera alcanzar un mejor diseño de políticas y programas para los pueblos indígenas.

Se trata la cuestión de grupos étnicos y los criterios para su identificación. Dichos criterios tienen que ver con aspectos tales como rasgos característicos en relación a la vestimenta, color, lengua, prácticas culturales, entre otros. Otro criterio es el de autoidentificación, aspecto que toma cada vez mayor fuerza en esta temática.

En este marco, se abordan las dimensiones de pueblos indígenas, en la cual se registran los siguientes ítems: ancestros comunes; apego a la cultura y desarrollo de la conciencia.

La primera dimensión alude al reconocimiento de ancestros históricos comunes, que permitan reconocerse en una determinada etnia.

El apego a la cultura da cuenta de rasgos culturales característicos, pero tal vez perdidos por cuestiones de homogeneización como el fenómeno de globalización. El ejemplo que ilustra lo antes mencionado es el idioma.

Por último la dimensión de desarrollo de la conciencia hace referencia a la identidad étnica y a reconocerse como pueblo indígena u originario.

Cuestiona puntos relacionados a los indicadores que se utilizan en los censos. Para ello apunta al tipo de pregunta, número de preguntas, relación entre dimensiones, alcance y limitaciones de las mismas.

Ejemplificando en los diferentes países con presencia de pueblos indígenas, las autoras manifiestan:

“...si bien todos los países incluyen una referencia a la población indígena, siete de ellos (Argentina, Bolivia, Chile, México, Panamá, Paraguay y República Bolivariana de Venezuela) aplican un criterio y solo captan a la población indígena o a los hogares con al menos un integrante indígena (como lo hace Argentina). Los otros cinco países (Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Honduras) aplican el criterio más amplio de “grupo étnico” para identificar también a los afrodescendientes y a otros grupos hecho que responde a las crecientes demandas de información por parte de las etnias no originarias”.

A continuación se transcribe la pregunta que daba cuenta de lo antes mencionado, efectuada en el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda realizado en Argentina en el año 2001.

Tabla N° 3: Pregunta incluida en el cuestionario utilizado en el CNPHV 2001.

País y fecha censal	Pregunta	Categoría	Identifica a pueblo indígena	Grupo etario de ref.
Argentina 2001	¿Existe en este hogar alguna persona que se reconozca a nivel de hogar descendiente o perteneciente a un pueblo indígena?	17 pueblos-otro pueblo	Si - pregunta cerrada a nivel de hogar	-

Fuente: Schkolnik y Del Popolo

Un informe presentado por organizaciones de Argentina al relator J. Anaya, en diciembre de 2011, presenta un completo detalle de toda la situación de las comunidades indígenas en relación a sus derechos y su problemática (Anexo N° 13).

2.3. Territorio.

Existe una importante producción en torno a la temática del territorio, y a las comunidades en relación a este. Muchas de estas publicaciones giran en torno al conflicto territorial por el cual atraviesan las comunidades originarias de América Latina, incluida la Argentina, por lo que algunos de estos trabajos toman la forma de denuncias públicas ante el avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios.

Un aporte crítico de la realidad de los pueblos originarios es el trabajo del periodista Darío Aranda (2010) titulado Argentina originaria, genocidios, saqueos y resistencias, el

cual compila denuncias e informes acerca de la problemática de los pueblos originarios en relación a vulneración de sus derechos fundamentales; denuncias ante casos de comunidades excluidas o despojadas de sus tierras por la expansión sojera; tala indiscriminada de especies forestales autóctonas; contaminación por agroquímicos y conflictos territoriales entre pueblos originarios y empresas transnacionales.

En el complejo escenario que se aborda, este autor responsabiliza al Estado por no garantizar los derechos fundamentales de los pueblos, y a las empresas que avanzan sobre los territorios indígenas con el único objetivo de la ganancia económica a corto plazo. Registra fechas de importancia en la cual se sucedieron episodios que agudizaron el reclamo por parte de comunidades indígenas y otras organizaciones. Tal es el caso de la marcha de la comunidad Qom en reclamo por el asesinato de un comunero por defender sus tierras, marcha a Plaza de Mayo con la consigna “por un Estado plurinacional”, entre otros. Además se publican testimonios de dirigentes y pobladores indígenas afectados por esta problemática. No deja de manifestar una postura política en torno al tema de los pueblos indígenas, resultando un interesante bagaje testimonial que da a conocer muchas de las situaciones por la que atraviesan estos pueblos en la actualidad.

Ottenheimer, Zuvrzycki y Tamango (2009) en Pueblos indígenas, interculturalidad colonialidad y política, presentan un trabajo denominado “Las luchas por el territorio: el caso de los Mbya-Guaraní del Cuña Pirú en tierras de la Universidad Nacional de La Plata”, a través del cual abordan un conflicto territorial en materia indígena. Lo interesante son las partes intervinientes en el mencionado conflicto que hace al tema principal del documento, presentando el seguimiento a un conflicto entre esta Universidad y la comunidad indígena Mbya-Guaraní. El conflicto surge por la donación a la Universidad 6.144 hectáreas en la provincia de Misiones, en donde viven familias pertenecientes a la etnia Mbya-Guaraní, quienes avanzaron en sus reclamos. Las autoras intentan hacer visible un largo conflicto entre la Universidad Nacional de La Plata y esta comunidad.

Muchos son los conceptos que abordan las autoras. Entre los más relevantes se puede mencionar el de reserva natural, pero no en sí lo que significa en su sentido propiamente dicho, sino en la intencionalidad con la que se la quiere definir, no con un sentido amplio y natural, sino cuestionando y relacionando este concepto con el de reserva ecológica y reserva de usos múltiples. Esto coloca a los Mbya-Guaraníes en iguales condición que las plantas, animales y geoformas que componen una reserva.

A la demanda indígena también se la conceptualiza, definiéndola según la intencionalidad y resultados, en algo confuso, incierto y que genera tensiones dentro de los propios grupos que la llevan a cabo. El reclamo como concepto tiene una importancia sustantiva. Estaría expresando el tratamiento en condiciones de desiguales a los Mbya-Guaraní respecto a la Universidad, es decir, la palabra reclamo connota un posicionamiento desigual para las partes enfrentadas, donde la Universidad Nacional de la Plata, al tener la propiedad legal, pretende tener la propiedad legítima, y en este marco, los Mbya-Guaraní tienen que peticionar o reclamar en calidad de ilegítimos e ilegales.

El concepto de territorio aparece también como digno de ser destacado. Se menciona que el territorio que ordena la existencia de estos pueblos, no es el mismo concepto que

el de la tierra entendida como recurso factible de ser explotado. Una vez más lo escrito como denuncia, el conflicto como suceso que se repite en torno al territorio de los pueblos indígenas. Se afirma que intentar comprender el conflicto desde una mirada alejada a la cuestión política, resulta imposible por lo que los vínculos institucionales que surgen en este contexto son importantes de revisar.

Abramovay (2006), realiza un aporte hacia la noción o idea del territorio desde una perspectiva teórica y empírica. Analiza componentes y efectos de la implementación de proyectos y a partir de esto plasma un aporte teórico a la formulación de políticas públicas. Desarrolla una sistematización teórica y de conceptos, abordando casos como ejecución de proyectos financiados internacionalmente, lo que serán estudios puntuales.

2.4. Desarrollo rural territorial.

Marcelo Sili (2010) en *¿Cómo revertir la crisis y fragmentación de los territorios rurales?* ideas y propuestas para emprender procesos de desarrollo rural territorial; desarrolla un completo análisis, con críticas y propuestas acerca del desarrollo rural territorial, al cual define como

“... un proceso que tiene como meta final reconstruir y desarrollar los territorios rurales a través del mejoramiento de la capacidad económica, la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental de un área rural, pero considerando como elementos claves a las dinámicas territoriales que viabilizan o limitan el desarrollo...” (Sili, M., 2010).

En un contexto de fragmentación, Sili destaca que son las formas de gestión del territorio y las relaciones espaciales los aspectos que explican la mencionada dinámica del territorio. Realiza un análisis del contexto general en el que se encuentra el ámbito rural; cómo influyen los procesos históricos y el fenómeno de la globalización en la organización de los territorios. Concretamente acerca del Desarrollo Territorial Rural (DTR) enuncia objetivos y puntos importantes a tener en cuenta en proyectos de esas características.

Ofrece propuestas metodológicas de gran utilidad para aplicar en los procesos de DTR, destacando la participación; la constante referencia hacia lo local; formas particulares de organización de actores; dinámica de recursos; el hacer hincapié en la historia local y necesidades de líderes en estos procesos.

Madoery (2007) realiza sustantivos aportes al conocimiento en relación al desarrollo endógeno, su concepción y sus percepciones teóricas, abordando el cambio de paradigma del concepto de desarrollo

“...la visión del desarrollo como un conjunto de capacidades, - ligadas a la calidad de recursos humanos, el potencial organizativo y emprendedor de los agentes locales- que permitan un mejor aprovechamiento de los factores exógenos y que tornen dinámicas las potencialidades de una sociedad..”

Manzanal (2005) aborda la problemática territorial, su actualidad y sus perspectivas desde enfoques históricos, políticos, económicos y sociales, a través de numerosos conceptos en torno a los territorios y “atractividad” (aquellos territorios capaces de captar el capital y las inversiones foráneas); esto relacionado a procesos de desarrollo.

Destaca el concepto de desarrollo rural como parte constitutiva de una política territorial, de una política del desarrollo local en donde se conjugan lo urbano y lo rural.

Destaca al concepto de nueva ruralidad, identificado en América Latina con distintas características tales como espacios que permanecen vinculados a los grandes complejos agroindustriales; espacios reestructurados en función de intereses turísticos y ambientales; y espacios redefinidos como áreas deprimidas, marginales o sin uso económico potencial.

3. Marco teórico.

Tal como se dijo en el capítulo anterior, los elementos conceptuales sobre los que se sustenta este trabajo corresponden a políticas públicas, pueblos originarios territorio y desarrollo rural territorial.

3.1. Políticas públicas.

No existe una definición única de lo que significan e implican; no es un concepto puro, pero sí las definiciones analizadas tocan puntos en común, tales como la toma de decisiones, las acciones y la participación de actores, entre otros. Además se pueden tener diversas interpretaciones de las políticas públicas, cuando se piensa a las mismas desde su aplicación.

Lindblom (1979, citado por Astorga y Facio, 2009: 9) expresan que “una política pública es un proceso de decisiones y resultados sin que ellos excluyan conflictos entre intereses, tensiones entre diferentes definiciones del problema, entre diferentes racionalidades organizativas y de acción y de diferentes perspectivas”; “...es un panorama pleno de poderes en conflicto enfrentándose y colaborando ante opciones específicas”.

Ozlack y O'Donnel (1984, citados por Astorga y Facio 2009:8) definen a las políticas estatales como el “conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión, que concita al interés, la atención y movilización de otros actores del tejido social... expresan necesidades y demandas, y su resolución no necesariamente coincide con la resolución del problema...”

Tamayo Saénz (1997: 9), enuncia que las políticas públicas “son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado ciudadanos y gobernantes consideran prioritarios...”

Kraft y Furlong (2007: 5) plantean que “una política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos. (Las políticas públicas) reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión”.

Según Martínez Nogueira (1995: 3-4) una política pública es una declaración de intención en tanto promesas y compromisos de acción que se expresan en su enunciación. Se abordan aspectos de la realidad por parte del Estado...”

Dice Bocchicchio (2008) al respecto que es un “ciclo de acción que incluye actividades diferentes pero articuladas e torno a la formulación, ejecución, seguimiento evaluación, y en donde intervienen múltiples actores con diferentes grados de responsabilidad, continuidad e involucramiento”.

A los efectos del presente trabajo se entenderá por políticas públicas al conjunto de decisiones que se traducen en acciones, o inacciones (Kraft, et. al., 2007)

estratégicamente seleccionadas (dentro de un conjunto de alternativas, conforme a una jerarquía de valores y preferencia de los interesados). Su dimensión es pública por el tamaño del agregado social sobre el cual coinciden, pero sobre todo por su carácter imperativo, siendo este revestido por autoridad legítima y soberana del poder público. (Gracas Rúa, 2009: 19-20).

En cuanto a cómo es la estructuración de una política pública, Medellín (2004: 27-28), dice que la misma debe ser comprendida como el producto de un intenso proceso político a través del cual emergen y toman forma los proyectos e intereses de individuos, instituciones y discursos en pugna por imponer un determinado proyecto de índole político, es decir ideológico. En este escenario acciona la sociedad y el Estado.

En definiciones anteriores, no se explicitaba en el significado de “políticas públicas” la participación o el involucramiento de diversos actores en el proceso de formulación o propuesta de las mismas. Con el tiempo, las políticas públicas dejan de verse como una tarea propia de los Estados y pasan a ser objetos de discusión y tensión entre actores intervinientes.

Un elemento común que muchas de las citadas definiciones manifiestan es que las políticas públicas son acciones, o intenciones que las llevan a cabo los gobiernos pero con la mirada puesta en las necesidades de grupos de la comunidad.

Por otro lado, mientras que Tamayo Sáenz (1997: 9) expresa que las políticas públicas son acciones que lleva adelante un gobierno, Kraft y Furlong (2007, op. cit.) incorporan la expresión de inacción gubernamental como parte integrante en la definición de políticas públicas.

Ozlack y O'Donnel (1984, op. cit.) postulan que las políticas públicas pueden expresar necesidades y demandas a través de la sociedad, pero su resolución, puede no coincidir con la solución o respuesta al problema en cuestión. Este dato es significativo ya que ilustra situaciones en las cuales las evaluaciones de programas no son buenas debido, en muchos casos a que la política no se ajusta a la demanda.

En este marco, cobra importancia el interés de los actores en estas políticas públicas, la participación de los mismos y el Estado en garantizar dichas políticas en pos del bien común.

En cuanto a la evolución conceptual de las políticas públicas, entre los años 50 y los años 70 se consideraba a las políticas públicas variables dependientes de la actividad política y por qué no política-partidaria. Dichas políticas surgían para resolver problemas determinados, y en ese contexto legitimar el poder sobre la comunidad. Actualmente este concepto está desestimado, ya que es mucho más amplio y deben participar más actores de la sociedad. (Astorga y Facio, 2009).

El proceso de la política pública tiene para algunos autores cinco fases (Tamayo Sáenz, 1997:2), en general son cuatro los pasos para construir una política pública ya que la formulación y elección de alternativas se ubican en una misma fase. De todos modos, como lo expresa Tamayo Sáenz, es interesante separar ambas cuestiones, ya que significan dos momentos diferentes en el proceso de la política pública como así también, permite una visión más integral del problema y sus soluciones y tiene más

instancias evaluatorias, lo que posibilitará la reformulación de la política en casos fallidos. De manera general, la construcción de una política pública sigue los siguientes pasos:

- i. Definición del problema.
- ii. Formulación de alternativas de solución al problema.
- iii. Elección de una alternativa.
- iv. La implementación de la alternativa elegida. En esta etapa es donde se diseñan programas y proyectos en base a objetivos, estrategias de acción, entre otros.
- v. Evaluación de los resultados.

El cumplimiento de cada una de las fases mencionadas da una idea de una política adecuada al contexto, con objetivos precisos y de impactos positivos en la sociedad.

En la definición del problema, fase inicial del proceso de una política pública, se debe construir el mismo en base a la naturaleza del contexto social y político; por la población objetivo (en este caso toma importancia la presencia de los pueblos originarios, quienes aparecen como destinatarios de las políticas públicas en la década del noventa); por las concepciones; y por los modelos de organización y gestión requeridos para su implementación.

En la evaluación de una política pública existe una relación con una de las características de la misma, y es la de poder ser reformulada. Dicha reformulación podrá llevarse a cabo según la evaluación. Existen diferentes tipos de evaluación (Astorga y Facio 2009:21), que permitirán verificar la formulación óptima de una política pública.

Algunas de estos tipos son:

- i. Evaluación de objetivos, permite evaluar si los objetivos han sido definidos con precisión.
- ii. Evaluación de pertinencia, sirve para vincular los objetivos propuestos con los problemas que resuelven las políticas.
- iii. Evaluación de contexto, mide las condiciones donde se ha aplicado la política.
- iv. Evaluación de efectos, mide las consecuencias provocadas por los resultados de las políticas públicas.
- v. Evaluación de satisfacción, permite observar el grado en que la población considera que su problema se ha resuelto con la aplicación de la política pública.
- vi. Otras (eficacia, proceso, insumos, entre otras.)

Un concepto vinculado a las ideas en cuanto a la participación y consulta de políticas públicas, es la propuesta de Subirats (2001: 261-262) en su trabajo Análisis de las políticas públicas. Este concepto es el de “comunidades epistémicas”, el cual hace hincapié en los grupos de personas o entidades que comparten determinada percepción acerca de los problemas públicos, y ante esto intentan trabajar en propuestas, para impulsar una política o un cambio en la normativa existente.

Lo antes mencionado podría asemejarse al proceso de las comunidades indígena de Tucumán, cuando, en conjunto con otras organizaciones sociales trabajaron en la

incorporación del artículo N° 149 de la Constitución Provincial, y aún trabajan en la instrumentación del mismo.

Al decir de Astorga y Facio (2009 op. cit: 6) una política pública no es cualquier acción pasajera de algún gobierno, que surge según circunstancias políticas y/o demandas sociales. Lo característico de una política pública es ser un conjunto de acciones intencionales o causales orientadas al interés o beneficio público, y cuyas líneas de acción se reproducen en el tiempo. Es decir son de naturaleza permanente, son estables e implican acciones sostenidas.

Cuando se hace referencia a los componentes de una política pública, pareciera que estos son las principales características que debería tener una política pública para ser eficaz. (Abdala, 2012).

Entonces, los componentes o aspectos que no deberían faltarle a una política pública son:

- i. Un contenido: La actividad pública se identifica bajo la forma de una sustancia, de un contenido. Se movilizan los recursos para generar los resultados o productos.
- ii. Un programa: el conjunto de actividades detrás de la decisión pública de un ejecutivo como los procedimientos institucionales, el programa de gobierno, articulación con algunos ejes del problema tratado.
- iii. Una orientación normativa: es la expresión de finalidades y preferencias del decisor que las asume en forma responsable.
- iv. Un factor de coerción: es de naturaleza obligatoria.
- v. Una competencia social: afectan la competencia de los administrados.

En este marco, toma importancia la participación de la comunidad en general en el proceso de políticas públicas.

Según Facio y Astorga (2009:22) existen seis fases en relación a la participación de las políticas públicas. Éstas son

- i. Información.
- ii. Consulta
- iii. Decisión.
- iv. Delegación.
- v. Asociación
- vi. Control.

La primera, alude al conocimiento general de lo que hace el Estado en relación por ejemplo a sus gastos, sus excedentes. La consulta, es cuando un gobierno crea ciertos mecanismos para poder conocer las demandas o necesidades de la población. La decisión se relaciona con actos en la toma de decisiones y se menciona al plebiscito como un ejemplo de esta fase.

La cuarta fase, de delegación, hace énfasis en que el gobierno transfiere las responsabilidades de una política pública en cuanto a su puesta en marcha.

La asociación, se refiere a cómo la sociedad civil se organiza para influir en las diferentes fases de una política pública.

Por último la fase de control, se relaciona con la evaluación, son los contrapesos existentes de los gobernados frente a los gobernantes.

3.2. Pueblos originarios.

En el presente trabajo se citan a los pueblos originarios de manera indistinta con el término comunidades indígenas, ya que en la provincia de Tucumán no hay mayores debates sobre esta terminología. Sin embargo es interesante conceptualizar sobre lo que se entiende como pueblo originario y sus variantes.

De modo general, existen muchas definiciones acerca de lo que es un “pueblo originario”. También numerosas discusiones acerca de terminologías tales como indígena, originario y pueblo o comunidad. Sin embargo, hay algunos elementos comunes que todas estas acepciones poseen y llevan a identificar a un pueblo originario.

Ampliando más estos conceptos, resulta relevante diferenciar lo étnico de lo indígena (Schkolnik y Del Popolo, 2005: 108-111); si bien en muchos casos se utilizan como sinónimos, si se bucea por los significados de estas palabras se encuentran diferencias.

Étnico, proviene del latín *ethnicus*, que es perteneciente o relativo a una nación, raza o etnia (del griego: pueblo); e indígena, originario del país que se trata. Vale decir, que originario se vincula directamente con el término indígena.

Cuando se trata del continente americano, el término originario se utiliza para identificar a los descendientes de los pueblos que habitaban las tierras antes de la llegada de los conquistadores europeos y que luego se incorporaron a una nación o Estados (Schkolnik, et. al., 2005 op. cit.).

Stavenhagen (1991, citado por Schkolnik y del Popolo, 2005:101) menciona que los pueblos indígenas son un caso especial de grupo étnico y afirma que

“se consideran en general como minorías, habida cuenta de las circunstancias históricas de su conquista e incorporación a las nuevas estructuras estatales, así como su apego a la tierra y al territorio y de su resistencia secular al genocidio, al etnocidio y la asimilación...”

A nivel internacional, se hace referencia al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el que aborda el aspecto de la “identificación” para lo cual se ponen de manifiesto diversas características (Anexo N° 14). En su artículo 1.1 inciso b, enuncia que el convenio se aplicará a “... los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas culturales y políticas o parte de ellas...”

Los elementos a los que hace referencia el Convenio 169, y que muchos organismos utilizan como dato para la identificación son:

- i. Tener estilos de vida tradicionales.
- ii. Tener cultura y manera de vivir diferentes de los otros sectores de la población nacional, por ejemplo, sus formas de vida, lenguas, costumbres.
- iii. Organización social propia y costumbres y leyes tradicionales.
- iv. Continuidad histórica de vida en una determinada región o antes de que otros la hayan “invadido” o llegado a ella.

Estos son los elementos que utiliza el Convenio 169 de la OIT para describir a qué pueblos protege. Características similares poseen los pueblos tribales.

Este convenio, como la Constitución Nacional Argentina, protege a los pueblos indígenas sin especificar a las comunidades. Se deja en claro que los pueblos indígenas tienen el derecho de organizarse en comunidades. De esto se desprendería la importancia de las organizaciones de segundo grado.

En Argentina, se considera criterio oficial de identificación, el concepto de “auto percepción”. Esto significa el auto reconocimiento de los propios pobladores indígenas. Esto se tradujo en preguntas específicas en referencia a esto en el Censo nacional de Población del año 2001 (Cervera Novo, 2010: 11).

En el estudio citado (Cervera Novo, op. cit.: 19-22.), utiliza tres criterios para abordar cuestiones productivas, ambientales y territoriales, en pueblos originarios. Esto tiene relación directa con la identificación y reconocimiento del sector indígena.

El primer criterio tiene relación con las prácticas económicas de las unidades familiares y comunitarias de las comunidades indígenas, insertas en la economía general.

El segundo, se relaciona con la estructura agraria que poseen las familias indígenas, vale decir, toma en cuenta aspectos como economía doméstica rural, producción familiar, entre otros.

El tercer y último criterio que el organismo tiene en cuenta para clasificar a los pueblos, tiene que ver con incluir todas las actividades económicas de las comunidades. Por ejemplo el turismo, las artesanías y otras.

La ley N° 23.302 (Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes) define a las comunidades indígenas de la siguiente forma

Se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad. La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación (Art. 2).

Las definiciones que solo enuncian rasgos estáticos, tienden a no considerar el contexto social e histórico de las poblaciones indígenas, lo que dificulta el análisis. Esto es

debido a que no se abordan los procesos a través de los cuales se resignifican las identidades. (Cervera Novo, op. cit).

A nivel nacional, en el año 2001 se reconocían diecinueve pueblos indígenas (Mombello, 2002:4). Éstos presentan diferencias en cuanto a actividades de subsistencia, idiomas, costumbres. Estos pueblos son

- a. Mapuche
- b. Tehuelche
- c. Ona
- d. Yagan
- e. Rankeles
- f. Huarpes
- g. Tobas
- h. Kollas
- i. Mocovi
- j. Pilagá
- k. Wichi
- l. Chulupi
- m. Myba Guaraní
- n. Chorote
- o. Tapiete
- p. Tupí Guaraní
- q. Diaguita - Calchaquí
- r. Chiriguano
- s. Chané

Actualmente están incorporados otros pueblos tales como el pueblo Lule representado por la comunidad indígena El Nogalito. La comunidad indígena Nogalito, habita en la zona montañosa del departamento Lules, en la provincia de Tucumán.

En Argentina durante la década del 90 la temática indígena empezó a tomar cierta visibilidad cuando el INAI comienza a atender necesidades concretas de estos pueblos, y a implementar programas de asistencia en relación a salud, territorio y educación (Mombello, op. cit). En concordancia con el modelo de país implementado en esta década, la participación de los pueblos indígenas en estos programas fue nula o casi nula.

Si bien el periodo de los noventa no representa el foco de análisis temporal del presente estudio, indudablemente fue un período que ha dejado marcas en las comunidades indígenas, muchas de las cuales aún hoy pueden observarse.

En este período se presentaron cambios y transformaciones profundas en la sociedad en general, referidas principalmente a elementos políticos y sociales, en donde el grupo en estudio fue afectado por los mismos, los cuales muestran algunas de las características que a continuación se presentan

- Comienzo y expansión de la globalización y sus expresiones en la economía y la política a nivel nacional.
- Aplicación ortodoxa del modelo económico neoliberal.

- Desmantelamiento de gran parte del aparato productivo agrícola existente, y sustitución por un modelo agroindustrial caracterizado por el monocultivo, la concentración de la tenencia de la tierra y la paulatina desaparición de pequeños y medianos productores.
- Reforma de la Constitución Nacional en el año 1994.
- Aumento de los índices de desocupación y aparición de nuevas categorías analíticas de pobreza.
- Crisis del modelo político y económico (diciembre 2001).

En este marco y haciendo referencia a las políticas públicas en este período, Ríos (2003) dice:

A inicios de la década de 1990 se suceden iniciativas dirigidas a generar u obtener Fondos de Inversión Social (FIS) que redefinen el compromiso y el rol del estado, haciéndolo más coherente con la concepción macroeconómica dominante. Los FIS, fueron creados con el objetivo de aliviar las consecuencias de la crisis. Este tipo de fondos se configuran como entes de asesoría y financiamiento mediadores o coordinadores de la acción de los beneficiarios y la sociedad civil, capaces de movilizar recursos internacionales y nacionales importantes en términos absolutos pero mínimos en la relación con una población objetivo creciente.

En la temática indígena de Tucumán, este punto es de relevancia ya que las mismas fueron y son beneficiarias de programas encuadrados en los FIS, tales como Pro Huerta, Programa Social Agropecuario (PSA) y PRODERNOA, entre otros, habiendo tenido resultados diversos en su funcionamiento organizacional.

Al respecto, Aparicio y Tapella (2003) dicen:

Las políticas de liberación de la economía y programas de estabilización y ajuste estructural surgidos en el marco de la globalización y expansión de la llamada economía de mercado durante la década de los 90, contribuyeron a exacerbar heterogeneidades entre e intraregiones... La globalización económica ha generado un proceso totalmente dual. Por un lado, entre 1990 y 1998, la evolución del sector rural en términos de nuevas tecnologías, incremento de la producción y la productividad y aumento de las exportaciones ha sido excepcional... Pero por otro lado, la participación del sector campesino y de pequeños productores en la economía decreció, la competencia abierta con grandes productores produjo un desarrollo desigual y la pobreza rural se incrementó.

Este escenario puso a las comunidades indígenas en una doble situación. Primero se agudizó la pobreza a nivel general y las comunidades no estuvieron exentas a lo anterior. Esto los transformó en sujetos pasivos receptores de proyectos asistencialistas. Por otro lado, hubo un intenso estado de alerta ante la manifiesta vulneración de derechos, lo que se tradujo más adelante en desconfianza ante nuevas propuestas o presencia de equipos técnicos.

Es a partir del año 2002, cuando esta situación se comienza a modificar. Esto se dio de la mano de las organizaciones indígenas que se unieron y participaron activamente por la reivindicación de sus derechos, por ser escuchadas y por ser miembros activos en espacios de debate de las cuestiones indígenas.

La organización federal del país, ha generado que los pueblos originarios se organicen de manera jurisdiccional para luchar y gozar de sus derechos (Canet, 2010: 15). Ilustran y muestran el avance de las comunidades en materia organizativa, las organizaciones territoriales comunitarias como así también las que han llegado a ser de segundo grado. Esto, sumado a la articulación con ONG's y organismos oficiales, ubican a éstas en una mejor posición para negociar cuestiones que atañen a sus intereses.

Algunos ejemplos de organizaciones de segundo grado en comunidades originarias argentinas son el Foro por la tierra en la provincia de Salta; Unión de la Nación de los Pueblos Diaguitas (UNPD, integrada por comunidades Diaguitas y Lule de Tucumán, Catamarca y La Rioja) y Qullamarka en comunidades Kollas de la provincia de Salta (Canet, op. cit: 16-18).

A nivel regional y citando a la etnia Diaguita-Calchaquí, la organización, y cuál nombre tome la misma depende de sus pautas culturales e instituciones tradicionales, vale decir las comunidades son las células organizativas de los pueblos indígenas. De esta manera, el pueblo Diaguita-Calchaquí, se organizaba en parcialidades, como ser los Quilmes, los Tafíes, que son la base de organización actual de las comunidades indígenas (Abdala, 2012).

Es de destacar los aspectos participativos generados en la provincia de Tucumán. La tarea propuesta por la ley N° 21.160 de relevamiento territorial, fue iniciada a través de asambleas abiertas informativas en cada comunidad tucumana.

En Tucumán, los equipos técnicos que trabajan con comunidades indígenas, como el Equipo Técnico Operativo (ETO) responsables de relevamientos territoriales, poseen una doble herramienta que los acerca a la cuestión del reconocimiento de los pueblos originarios.

Por un lado, se utiliza el criterio del Convenio 169, que lleva como principio el “autoreconocimiento”, y los distintos elementos que se mencionaron anteriormente.

Por otro lado, el ETO Tucumán trabaja en este tema conjuntamente con la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. Integrantes del ETO Tucumán son comuneros indígenas, lo que permite una mirada integral en la tarea de relevamiento de tierras comunitarias.

También se utiliza el RENACI como parámetro de identificación de comunidades indígenas en caso de duda.

Finalmente, las diferentes disciplinas también tienen parámetros específicos que se utilizan para identificar la existencia de pueblos indígenas en las diferentes zonas. Estos aspectos toman la figura de rescate y revalorización de elementos que aportan a la búsqueda identitaria de estos pueblos, tal es el caso de las prácticas de cultivo, la medicina tradicional utilizada por estos pueblos, la historia oral, la vigencia de ceremonias y celebraciones de estos pueblos, entre otras.

Un ejemplo del aporte de las disciplinas en la temática indígena en Tucumán, es la existencia de una “Cátedra libre de Pueblos Originarios” instaurada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

La misma está organizada por las Cátedra de Prehistoria, la Cátedra de Antropología Social y Cultural, la Fundación ANDHES (Abogados y Abogadas del Norte por los Derechos Humanos y Sociales) y grupo Fogón Andino.

En este espacio de debate y reflexión se intenta mostrar a la comunidad académica la situación por la que atraviesan los pueblos originarios de la región, revalorizar la cultura Diaguita a través de charlas sobre temas referidos a esto, y principalmente llevar la voz de los pueblos a la sociedad civil. Funciona desde el año 2010, es abierta a todo público y tiene una activa participación de las comunidades indígenas (Anexo N° 15).

3.3. Territorio.

No es casual que en la temática de los pueblos indígenas surja la cuestión del territorio como punto principal de debate. Para conocer cuál es la mirada que tienen los pueblos originarios sobre su territorio se transcriben palabras de Delfín Gerónimo, dirigente e incansable luchador indígena de Quilmes.

“Nuestro territorio: es el espacio donde los Pueblos Indígenas desarrollamos nuestra vida. Se entiende por territorio no solo a la tierra donde tenemos nuestra casa, sino los lugares de pastoreo, las aguadas, los caminos, los cementerios, los antiguos, los lugares sagrados, las apachetas, los cerros y los recursos que en ellos existen y que son necesarios para nuestra supervivencia...”

Es relevante acercar esta cosmovisión con abordajes teóricos del tema, que en muchos casos guardan estrecha relación con lo propuesto como concepción del territorio por los pueblos indígenas.

Maidana (2009), expresa:

“...territorios en el sentido de espacios vividos y circulados y por lo tanto valorados en sus aspectos no solo materiales sino también simbólicos...”

Kollman (2005: 4-5), postula

“...el territorio aparece convertido en región como resultado de prácticas espaciales. La incógnita sería entonces cómo construir el territorio como mediador espacial de toda la vida social, y esto tiene que ver con las construcciones realizadas a partir de esferas económicas, políticas y socio culturales...”

El Convenio 169 de la OIT, aborda en su artículo 13.1 y 13.2 las cuestiones referidas a la tierra y territorio. En el primer artículo se expresa

“... al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.

En el artículo 13.2 se manifiesta que la expresión del término tierras en próximos artículos, deberá incluir el concepto de territorios, que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera.

En las políticas de desarrollo, en particular en el enfoque de desarrollo rural territorial, también se define al territorio. A saber:

El territorio, como espacio simbolizado, concreto, integrado a partir de sus Propias especificidades, ocupa un lugar relevante y protagónico con respecto al nuevo orden internacional y se constituye en el nuevo actor más dentro de los procesos del desarrollo (Ríos y Ceconello, 2010: 1)

Abramovay (2006) aborda el concepto de territorio. No lo define desde su sentido estrictamente literal, sino que le otorga características y virtudes que hacen a la idea general de este concepto.

En este marco, propone:

- i. Abandonar la visión sectorial del término, y esto trae aparejado que los territorios no se definen por límites físicos, sino por la manera cómo se produce, en su interior y la interacción social.
- ii. El concepto de territorio, también permite evitar la confusión entre crecimiento económico y proceso de desarrollo, ejemplo de esto es la pobreza rural ya no como un faltante en la renta sino como un fenómeno multidimensional.
- iii. Hablar de territorio nos ubica en el análisis empírico de sus actores y organizaciones, vale decir se toman en cuenta estas variables.
- iv. Por último y sobre este concepto, incluye el uso de los recursos naturales que realizan los actores. Vale decir las relaciones sociales y ecológicas.

En este mismo marco, también define ruralidad, y la ubica como una “categoría territorial, cuyo atributo decisivo está en la organización de sus ecosistemas, en la densidad demográfica relativamente baja, en la sociabilidad de interconocimiento y en su dependencia en relación a las ciudades”.

Si bien hay similitudes en los conceptos citados, se detecta la íntima relación que establecen las comunidades con el espacio que habitan; su uso pasado y actual del mismo. Otras miradas invitan a discutir y reflexionar sobre el rol del territorio en sus múltiples aspectos y particularmente en la cuestión social.

Es en este complejo escenario en donde se aplican políticas públicas a través de implementación de planes, programas y proyectos, que vinculan directa o indirectamente a la población indígena de las zonas en cuestión. Esto genera frecuentemente conflictos que se desatan por el territorio, su uso y tenencia, y también sobre sus orígenes.

Dichos conflictos se dan a nivel interno y también con los pueblos originarios y otros ajenos a la comunidad. En este último punto, las comunidades han atravesado numerosos conflictos por temas referidos específicamente al agua, a las producciones comerciales y otros ligados a la actividad agrícola y ganadera en las diferentes regiones.

Domínguez, Lapegna y Sabatino (2006: 240-243) referencian en su trabajo acerca de las luchas por el territorio, el cambio profundo que instala el nuevo modelo agrícola en cuanto a la tenencia de la tierra y a partir de esto en los aspectos económicos y sociales.

Para esto definen

- i. Territorialización: Relaciones de dominio y apropiación del espacio, mediaciones espaciales de poder, en un sentido amplio que va desde lo concreto a lo simbólico.
- ii. Desterritorialización: Producida por el capital global, y que implica movimiento. Es un concepto que se lo plantea como polémico ya que habla de acontecimientos que dejan de responder a sus referentes territoriales y comienza a ser decidido o atravesado por otros actores.
- iii. Carácter emergente: Este concepto es tomado diferenciándolo de las “territorialidades hegemónicas”, y acercándolo a cuestiones como recuperación de prácticas históricas silenciadas, en lo que se conocen como las políticas que surgen “desde abajo”.
- iv. Campesino: Si bien no se lo define, los autores cargan este concepto de contenido simbólico ya que bajo esta figura está representada la lucha, la organización y la resistencia.

Estos autores arriban a conclusiones vinculadas con la lucha social que genera el modelo capitalista instalado en el país y que obliga a los pueblos (en este caso en cada provincia), a organizarse como grupos de resistencia y defensa de los territorios. Se plantea una profunda mirada destinada a redefinir cuestiones tales como “para quiénes producir alimento”, cómo usar los recursos naturales y la necesaria vinculación de lo urbano con lo rural. Ante esto se cuestiona al diagnóstico como tal, ya que expresan que dicho diagnóstico deberá ir más allá de lo rural logrando una visión más integral, a la altura de las interacciones sociales reales de cada territorio.

Se mencionan ejemplos de organizaciones consolidadas y generadas desde la resistencia y la lucha tales como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Red Puna en Jujuy, entre otros. En este marco se concluye también que en la actualidad esta disputa territorial instalada en Argentina no es una lucha por el territorio mismo, sino que implica confrontar por la sobrevivencia humana. Esto último eleva a un máximo valor a las cuestiones territoriales y a los movimientos socio territoriales que se generan.

Lo antes mencionado ubica al territorio como objeto de conquista, como ámbito de disputa de poder y como generador de procesos organizativos interesantes de revisar.

En el caso particular de la provincia de Tucumán las luchas indígenas se libran desde la movilización, resistencia, gestión y organización de los pueblos frente al avance que el modelo plantea. Es aún muy lejana la situación Argentina de las luchas o movimientos similares a los de Bolivia o México (Chiapas), por las que se llegó a tener funcionarios públicos indígenas (incluso un Presidente de la Nación), o generar fuertes Estados

paralelos. Tiene que ver con la organización y la concientización de una comunidad toda, de sus propios actores sociales y de los que rodean dichos pueblos.

Un caso emblemático que presenta la provincia de Tucumán es el asesinato de Javier Chocobar. El 12 octubre del 2009, se asesinó a un dirigente indígena de la Comunidad de Chuschagasta, departamento Trancas.

El crimen fue cometido por un terrateniente de la zona y dos ex policías. A este momento los tres gozan de libertad. Si bien no hubo lucha en este acto propiamente dicho, la lucha desde la organización y la denuncia llegó después, al reunirse a las 17 comunidades indígenas de Tucumán y elevar un reclamo de justicia inmediato.

En este marco, esta nueva disputa territorial instalada en Argentina, no es una lucha por el territorio mismo, sino que significa confrontar por la materialización de la existencia humana (Domínguez, et. al., op. cit.).

3.4. Desarrollo rural territorial.

Estrechamente vinculado a los conceptos de políticas públicas, pueblos originarios y territorio, se encuentra el de desarrollo.

Las políticas de desarrollo surgen alrededor de los años 40, cuando se comienza a discutir la existencia de países con mayor nivel de desarrollo que otros (Manzanal, 2009).

El término desarrollo tiene múltiples interpretaciones y su concepto ha ido modificándose con el tiempo y el devenir de la historia.

Román (2009) propone una cronología de los enfoques de desarrollo rural, a través de paradigmas coincidentes con diagnósticos de las situaciones socio-económicas imperantes, enunciando estrategias de intervención llevadas a cabo para mitigar las situaciones mencionadas.

Tabla N° 6: Enfoques de desarrollo rural

Enfoque del desarrollo rural	Paradigma/diagnóstico	Estrategia
Desarrollo Comunal (1940-1950)	Sociedad Dual: moderna y tradicional	Capacitación a líderes naturales.
Generación y transferencia tecnológica (1959-1970)	Baja productividad	Investigación y extensión.
Revolución verde (1970 en adelante)	Falta de producción. Paliar el hambre del mundo	Aumento de productividad. Alto uso de insumos.
Reforma Agraria (1960-1970)	Inequitativa distribución de la tierra.	Redistribución por parte del Estado
Desarrollo rural integrado (1970-1980)	Falta de integración de organizaciones.	Coordinación y organización del Estado, sin participación de actores.
Sistemas de producción (alrededor de 1987)	Problemática integrada y campesinado	Concepto de minifundio. Diversificación de producción.
Fondos de compensación social (1990)	Indicadores NBI. Políticas macroeconómicas.	Proyectos de alivio de pobreza. Focalización en los pobres.
Desarrollo territorial (2000)	Cambios en la relación rural-urbano.	Competitividad local para mercados globales.

Fuente: Román, M. (2009).

El desarrollo territorial, amplía el campo de acción desde lo conceptual y lo pragmático. Propone un cambio de identidad y toma como unidad de análisis al territorio y no a la familia. El concepto de desarrollo rural ya no es lo mismo que el de desarrollo agropecuario.

Desarrollo rural debe ser entendido como parte de una política territorial, de una política del desarrollo local donde se conjuga lo urbano y lo rural (Manzanal, 2005).

El concepto de desarrollo rural territorial (DRT), propone como condición en los procesos de desarrollo a la participación. Incluye nuevos pobres, e incorpora otros actores del escenario rural (Manzanal, 2009).

El DRT puede ser entendido como un

“Proceso de transformación productiva e institucional de un espacio rural determinado, con el fin de reducir la pobreza rural” (Schejtman; Berdegúe, 2004)

La definición antes mencionada tiene sus bases en dos pilares fundamentales. El primero es la transformación productiva que está relacionado a la posibilidad de que la economía del territorio se articule con o ingrese en los mercados dinámicos.

El segundo es el aspecto institucional, que se relaciona con fomentar los vínculos entre actores locales y agentes externos. Ambos puntos con el único objetivo de reducir la pobreza existente en el espacio rural.

El DRT, en sus acciones, presenta un conjunto de criterios que claramente lo diferencian a enfoques más tradicionales y que permiten un mayor acercamiento a la realidad rural (Schejtman; Berdegúe, op. cit).

El primero alude que la transformación productiva y el desarrollo institucional deben abordarse de manera simultánea, vale decir en una concreta interrelación entre ambos conceptos. No puede funcionar uno sin el otro, debido a que el programa carecería de objetivos.

El segundo criterio indica que los programas de DRT, deben tener una dimensión más amplia que la rural, esto es que para procesos de desarrollo que tiendan a disminuir la pobreza, indefectiblemente se debe incluir al medio urbano.

El tercer criterio tiene que ver con la concepción de territorio. Este enfoque como se mencionó anteriormente concibe al territorio como una “construcción social”, por lo que los programas de desarrollo deberán ajustar sus objetivos a lo que se considere como territorio.

El cuarto criterio expresa que los programas de DRT deberán considerar la heterogeneidad de los territorios, ya que por múltiples razones, los territorios son de diversos tipos, y algunos tienen mayores posibilidades de implementación de estos programas que otros.

El quinto criterio alude a que este enfoque requiere la concertación social. Es decir la participación de otros actores además de los “pobres rurales”.

El sexto criterio evoca que los programas de DRT, deberá tener en cuenta las acciones de los productores rurales para salir de la pobreza, es decir, que deberá considerar en sus propuestas, las tareas productivas (empleo agrícola) como así también el trabajo extrapredial tanto agrícola como no agrícola.

El séptimo criterio alude a que los programas de DRT deben tener una robusta “arquitectura institucional”. Esto hace referencia a vinculación entre organismos estatales, ministerios, creación de redes, y acciones del tipo colectiva. Una arquitectura institucional óptima y eficiente se relaciona con cinco puntos claves

- i. Las atribuciones y capacidades de los gobiernos locales en sus dimensiones técnicas, administrativas y políticas.
- ii. La coordinación, pero también la existencia de controles y equilibrios entre los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial, municipal).
- iii. Las redes y otras formas de asociación entre los gobiernos locales para generar organizaciones de alcance regional capaces de emprender las tareas de la transformación productiva que, por regla general, sobrepasan a las posibilidades de gobiernos municipales aislados, sobre todo en los territorios más pobres.
- iv. Las organizaciones económicas y de representación de la sociedad civil.
- v. Los espacios y mecanismos para la concertación público-privada en las escalas y ámbitos que sean pertinentes para el DRT.

El octavo y último criterio hace referencia a los tiempos en procesos de desarrollo. Se manifiesta que se deben consensuar los tiempos en relación a los cortos plazos, con los tiempos reales que requieren estos proyectos para una eficiente implementación de los mismos.

Este enfoque permite superar obstáculos existentes en programas de desarrollo, los cuales están asociados a la existencia de propuestas que no se ajustan a la necesidad concreta.

Una de las fuentes conceptuales del DRT es el concepto de desarrollo endógeno. Los orígenes de esta teoría se encuentran en teorías económicas territoriales, de desarrollo humano y de economías institucionales (Montero, 2009:1-2).

Al respecto Madoery (2007: 131) expresa:

“La teoría desarrollo endógeno es parte de una interpretación del desarrollo como creación, como algo no impuesto desde fuera de las sociedades, sino surgido de sus propias capacidades... no hay determinismo exógeno sino creación endógena. Las sociedades locales no son espectadores pasivos, sino protagonistas de su propio devenir...”

En este marco, se relaciona lo local y lo endógeno. A lo local se lo conceptualiza como algo que remite a una dimensión espacial mayor (por ejemplo, local es una ciudad respecto a una provincia). Lo endógeno hace referencia a una dirección, y en este caso “de abajo hacia arriba”, impulsando de esta manera procesos de desarrollo.

Madoery propone el concepto de proximidad, el cual supone tres aspectos

- i. El encuentro de saberes como base de construcción del conocimiento.
- ii. Articulación y vinculación entre los actores.
- iii. Coordinación de políticas ligadas a la gestión del desarrollo.

La proximidad fortalecerá procesos de aprendizaje colectivo; se valorizará conocimiento local y territorial compromiso y lazos entre actores. El carácter de endogeneidad tiene cuatro ejes fundamentales que se entrecruzan entre sí. Estos ejes tienen que ver con lo político, lo económico, lo científico y lo cultural. Lo antes mencionado está relacionado con procesos de toma de decisiones, economías regionales; hallazgos tecnológicos y construcción de identidad.

Como todos los procesos de desarrollo, este también trae aparejado un proyecto político. La política de desarrollo endógeno se sustenta en tres fundamentos teóricos (Madoery, op. cit: 136-139).

- i. La complejidad. Se parte de una visión integral del desarrollo, que permite observar lo particular en la diversidad, consensuando diferencias que pudieran presentarse en el escenario.
- ii. La diversidad. Este enfoque, reconoce la diversidad existente en los territorios. A su vez identifica dinámicas locales que permitan crear capacidades territoriales de desarrollo.
- iii. La estrategia. Este fundamento contempla la acción traducida en un proyecto político territorial. La política del desarrollo endógeno es una mirada constructiva e interpreta procesos de desarrollo en función de las capacidades propias del territorio.

Se requiere de un Estado presente, tanto nacional como regional y local, y en este contexto establecer las relaciones con el mercado en una intensa interrelación entre lo público y lo privado (Montero, 2009).

Esta visión se ajusta a los tiempos actuales, y apunta a superar los innumerables fracasos que tuvieron las propuestas de desarrollo convencional en comunidades rurales. El fenómeno de la globalización y sus consecuencias, obligan a los enfoques del desarrollo a tener una fuerte connotación territorial y a dar protagonismo a los actores locales en diversos procesos.

Si bien las conceptualizaciones expuestas mencionan a los pobladores del territorio como actores, comunidades, productores, pobres rurales, entre otros, no hay una expresión específica dirigida a pueblos indígenas o comunidades originarias. Es decir, se da por supuesto que las comunidades indígenas están insertas en el territorio, y son destinatarias de procesos de desarrollo como cualquier otro actor del escenario rural.

Es en este contexto que emerge una mirada del desarrollo en relación a los pueblos indígenas (Tolindor Napadensky, 2002: 56-57). El concepto específico es el de etnodesarrollo, definido como

“... el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones, haciendo de esta una acción culturalmente sustentable...”

(Bonfill, 1995 citado por Tolindor, 2002)

La estrategia para llevar adelante procesos de etnodesarrollo es identificar los componentes de una cultura para que los propios pueblos indígenas puedan identificar su problemática, sus necesidades más sentidas y en función de esto confeccionar sus propuestas de desarrollo. El concepto de etnodesarrollo se debate en países con elevada proporción de población indígena, tal es el caso de México, Bolivia, Ecuador y Chile.

Este concepto descansa sobre cuatro ejes: el reconocimiento de derechos; la autodeterminación de los pueblos; el acceso a recursos naturales y el respeto y valoración de factores culturales (Tolindor Napadenski, op. cit: 58).

4. Materiales y método.

La investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo. Esta metodología, no sólo permite trabajar con diversidad de fuentes y de niveles de análisis que permiten la elaboración conceptual característica del enfoque, sino también interpretar el complejo fenómeno a ser estudiado.

En el sentido amplio del concepto, la metodología cualitativa es una investigación que produce datos descriptivos, estos se obtienen de las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable; “es más que un conjunto de técnicas para recoger datos: es un modo de encarar el mundo empírico” (Rist, 1997, citado por Feyto et. al., 2008).

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante (Martínez M., 2006).

Específicamente, se abordó esta investigación desde el método de estudio de caso. Este método es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989).

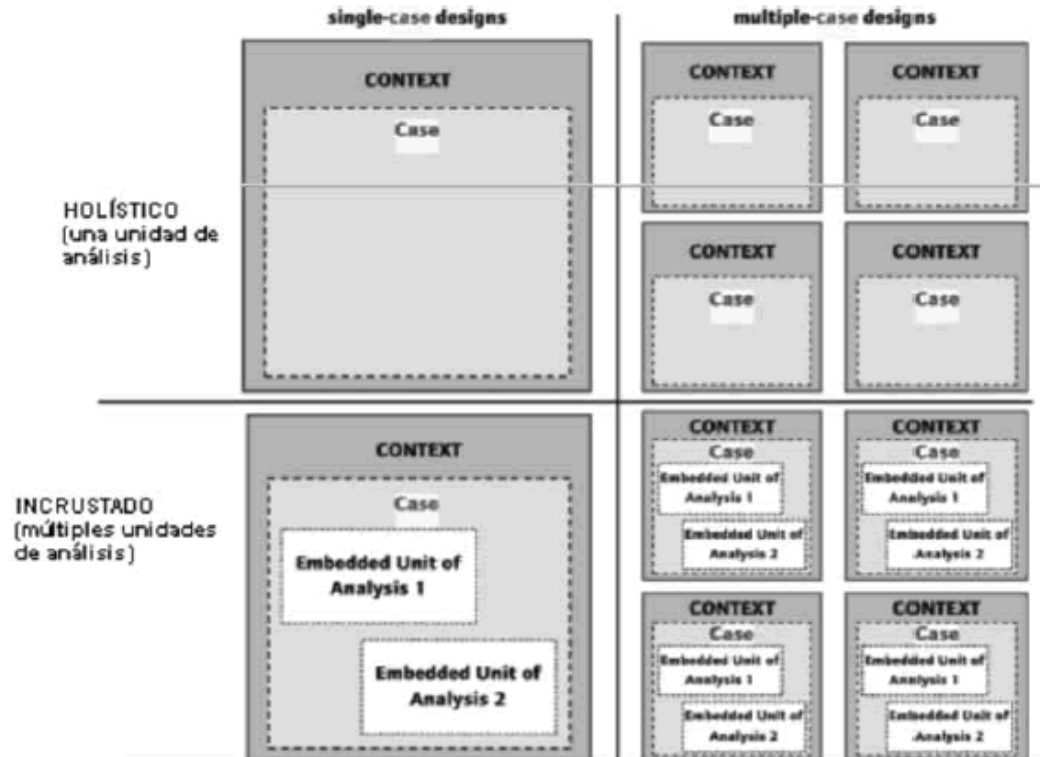
Además, en el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996).

Eisenhardt (1989) concibe al estudio de caso como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría.

Para Yin (1994: 9-10) “un estudio de caso es una pregunta empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real, sobre todo cuando los límites entre el fenómeno y contexto no son claramente evidentes. En otros términos, el estudio de caso como estrategia de investigación comprende un todo que abarca el método, con la lógica de plan que incorpora los acercamientos específicos a la colección táctica y al análisis de los datos. En este sentido, el estudio del caso no es una colección de datos o meramente una característica de diseño exclusivamente pero sí una estrategia de investigación comprensiva”.

Operacionalmente el diseño de esta investigación se encuadró en lo que Yin (1994:46) describe como múltiples casos, diseño incrustado, tal como se muestra en el siguiente eje de coordenadas (cuadrante inferior derecho).

Figura N° 1: Tipos de diseño para el estudio de casos según Yin



Fuente: Yin, R. (1994:46)

El tipo de estudio seleccionado, busca la replicación lógica de los resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la validez de la investigación. Se realiza con dos o más unidades de análisis. En este marco, Merriam (1998) manifiesta que el fenómeno investigado en los estudios de caso, forma un sistema integrado.

En cuanto a las estrategias de la investigación cualitativa en relación a los datos, las decisiones muestrales (Feyto y Pizarro, 2008), fueron tomadas considerando un universo de análisis conformado por

- i. Pueblos indígenas, asentados en las zonas del Valle Calchaquí, Valle de Tafi; Valle de Trancas y departamento Lules.
- ii. Referentes o responsables de programas estatales vinculados a proyectos de desarrollo en el ámbito de los pueblos originarios.
- iii. Profesionales o técnicos vinculados a proyectos en comunidades indígenas.
- iv. Informantes calificados.

En cuanto a la muestra que es un subconjunto de la población que reproduce de manera más exacta las características de esta, se utilizó la muestra no probabilística, la cual es dirigida y depende del criterio teórico que toma el investigador (Feyto y Pizarro, op. cit.). Esta es una estrategia en la cual escenarios particulares, personas o eventos son seleccionados deliberadamente con el fin de obtener información importante que no puede ser conseguida de otra forma.

La muestra estuvo conformada por:

- Caciques de las comunidades indígenas de Quilmes, Casas Viejas y Nogalito.
- Ex Cacique de la comunidad indígena Indio Colalao Valle de Trancas.
- Representante del Consejo de Participación Indígena (CPI).
- Secretaria de Consejo de la comunidad de Comuneros de la comunidad India Colalao-Valle de Trancas.
- Delegados de base de la comunidad India Quilmes.
- Ex Cacica de la comunidad indígena de Casas Viejas.
- Representante del Consejo de ancianos y de asuntos territoriales de Comunidad de Casas Viejas.
- Tesorera de zona Pueblo de Tolombón-Valle de Trancas.
- Destinatarios de proyectos de desarrollo.
- Dirigentes indígenas.
- Técnicos o promotores de proyectos.
- Responsable regional del INAI.
- Referentes en el Relevamiento Territorial.

La investigación constó de dos etapas diferenciadas, la primera descriptiva y la segunda, de análisis comprensivo y explicativo.

La etapa descriptiva se orientó a caracterizar las particularidades en el diseño y ejecución de las políticas que desde el Estado se dirigieron a las organizaciones indígenas en la provincia de Tucumán, para lo cual se procedió a desarrollar las siguientes fases

a. Recolección y análisis de información secundaria (documentos institucionales de programas y proyectos). El abordaje del marco legal referido a las comunidades indígenas se realizó a través del estudio de convenios internacionales, leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas (por ejemplo Constitución Nacional; Constitución de la provincia de Tucumán; Convenio 169 OIT; Ley N° 26.160; Ley N° 23.302, entre otras).

b. Entrevistas a:

b.1. Informantes calificados: aquellas personas que tuvieron o tienen algún vínculo con las comunidades indígenas ya sea de representatividad como lo son los Caciques, como así también desde espacios de toma de decisiones en relación a las políticas públicas.

b.2. Técnicos o promotores de proyectos y/o programas para comunidades originarias. Aquellas personas que tuvieron a cargo proyectos o propuestas de desarrollo en relación a los pueblos originarios.

b.3. Comuneros indígenas destinatarios de proyectos y/o programas. Hombres y mujeres de diferentes pueblos originarios que participaron, conocieron o implementaron proyectos en su comunidad.

El instrumento utilizado para la segunda fase fue la entrevista no estructurada focalizada (Ander Egg, 1983), las que fueron registradas en grabadora digital para su posterior análisis. Se realizaron repetidas lecturas de los contenidos de las entrevistas buscando

núcleos de respuestas que apareciesen como denominadores comunes, y aquellos otros núcleos que si bien pudieron no reiterarse, se identificaron como relevantes para el análisis y comprensión del proceso estudiado.

En el desarrollo de esta fase se aplicó el enfoque propuesto por la entrevista informal antropológica, en la cual tienen importancia no solamente los datos, sino lo que se puede inferir a través de ellos (Feyto y Pizarro, 2008).

Para el análisis de la información y presentación de resultados, los entrevistados fueron identificados por medio de códigos específicos (Anexo N° 16).

En la etapa de análisis comprensivo y explicativo se buscó captar la definición de la situación que efectúa el propio actor social y el significado que este da a su conducta, las cuales son claves para interpretar los hechos. El análisis buscó contemplar la totalidad de la configuración en donde se sitúa el actor y es, por lo tanto holístico (Gallart, 1993).

En el Cuadro N° 1 se resumen cuáles son los productos esperados de las dos etapas planteadas.

Cuadro N° 1. Etapas y productos de la investigación

Etapas de la investigación	Productos
Descriptiva	Describir: Comunidades indígenas seleccionadas. Políticas públicas (dimensiones socio-organizacionales y técnico-productivas) Estrategias de intervención. Logros y limitaciones.
De análisis	Comprender y explicar: efectos en lo socio-organizacional y en lo técnico-productivo.

5. Resultados.

En el Cuadro N° 2 se presenta una breve descripción de las comunidades indígenas en estudio.

Cuadro N° 2: Características generales de las comunidades indígenas

Comunidad	Zona	Año aproximado de inicio de organización	Año de otorgamiento de personería jurídica	N° de familias	N° aproximado de proyectos de desarrollo
India Quilmes	Valles Calchaquíes	1970	2001	630	5
Casas Viejas	Valle de Tafi	2002	2005	100	3
Nogalito	Lules	2002	2003	80	2
Potrero Rodeo Grande	Valle de Trancas	1990	2003	60	1
Pueblo Tolombón	Valle de Trancas-Choromoro	1988	2001	103	1
Indio Colalao	Valle de Trancas-Choromoro	2005	2011	60	0

Fuente: dirigentes indígenas y técnicos del INAI sede Tucumán.

En lo que refiere a los datos de inicio de cada organización, los mismos son estimativos. Los datos del respectivo expediente, constata la fecha en la que se inició el trámite de pedido de personería jurídica, mientras que la resolución refiere a la fecha de entrega del número de personería jurídica. La numeración fue cambiando a partir del año 2002. Resulta interesante la relación que existe entre año de otorgamiento de personería, inicio de conformación y número de proyectos implementados.

Los datos para los casos presentados son:

- i. Comunidad Indígena Nogalito expediente INAI 50133/2002 - Resolución: 006/2003.
- ii. Comunidad Indígena Pueblo de Tolombón, expediente INAI 40-00779-2000, Resolución 053/2001.
- iii. Comunidad India Quilmes, expediente 40-00596-2001, Resolución 441/2001.
- iv. Comunidad Indígena de Casas Viejas, expediente INAI 50410/2004, Resolución 126/2005.
- v. Comunidad Indio Colalao, expediente 50026/2007, Resolución 033/2011.
- vi. Comunidad Potrero de Rodeo Grande resolución 40/2003, sin expediente.

5.1. Comunidad india Quilmes.

Las comunidades indígenas que se asientan en los Valles Calchaquíes (Yokavil) son la comunidad india Quilmes y la comunidad indígena de Amaicha del Valle. Ambas pertenecen al departamento Tafi del Valle (Anexo N° 17). Dicho departamento tiene una población de alrededor de 15.035 personas (INDEC, 2010). Se asienta al oeste de la provincia, compartiendo cordones montañosos con las provincias de Salta hacia el norte y Catamarca hacia el oeste y sur. Se distancia de la capital provincial en unos 180 Km.

La comunidad india Quilmes está constituida por los siguientes pueblos o parajes, denominadas “comunidades de base”: El Paso; Los Chañares; El Carmen; Quilmes Bajo; Quilmes Centro; Rincón de Quilmes; Las Cañas; El Bañado; Anjuana; Talapazo; El Pichao; Colalao del Valle; El Arbolar y Anchillos.

5.1.1. Clima y suelos Valle Calchaquí-Quilmes.

Hacia el oeste se alzan los macizos pre-cordilleranos de las Cumbres Calchaquíes, y el sistema del Aconquija, con picos de hasta 5.500 m de altura. Las temperaturas medias son de 15°C en verano y 5°C en invierno. Las precipitaciones no superan los 200 mm anuales, concentrados casi en su totalidad en verano. Los Valles Calchaquíes presentan un recurso edáfico inestable, con texturas gruesas, gravilosas, permeabilidad excesiva, baja retención de agua, salinidad sectorizada, entre otros. Estas condiciones generan un marcado deterioro de los suelos lo que dificulta la actividad productiva. Otras causas del mencionado deterioro son: erosión hídrica y eólica; esta última determinada por intensidad y frecuencia de los vientos de la zona, hacia el norte de los Valles estos vientos llegan a conformar médanos. Otra de las causas del empobrecimiento de los suelos calchaquíes son las malas prácticas agrícolas acompañadas por acciones de incorporación de especies exóticas tanto de flora como de fauna sin control alguno. Dichas limitantes se agravan con la falta del recurso hídrico en la zona. Todo esto se traduce en una baja en los rendimientos. Fadda y Zuccardi (1985: 24) sugieren abordar el problema de la erosión eólica e hídrica proponiendo:

- i. Controlar el sobrepastoreo, especialmente de los caprinos.
- ii. Control, encauzamiento y estabilización de torrentes.
- iii. Establecer cortinas rompevientos para evitar la erosión
- iv. eólica.
- v. Fijación de dunas activas.

5.1.2. Vegetación.

La zona presenta biomas o unidades ecológicas diferenciadas de este a oeste: Fondo de Bolsón; Jumial, Algarrobal, Churcal, Cardonal, Iral. El caso del algarrobal, constituye la unidad ecológica más poderosa de la zona, principalmente algarrobo blanco, algunos ejemplares son de importante fuste aunque de mediana altura. Los ejemplares que acompañan al algarrobo blanco, son: algarrobo negro, chañar y en menor número el tala, que en general se presenta de porte arbustivo. El sotobosque está compuesto por jume arbustivo y algunas cactáceas, en determinadas zonas se observan los cardones. En toda el área se observa una elevada pérdida de agua por dos procesos: evaporación y transpiración. Esto se debe a la elevada insolación de la zona Quilmeña. La evapotranspiración es elevada durante todo el año, proceso que agrava la situación

hídrica del lugar por las bajas precipitaciones estivales. La situación antes mencionada obliga a los pobladores a requerir de sistemas de riego para llevar adelante cualquier tipo de producción agrícola. (Pelissero; Difrieri, 1981).

5.1.3. Breve reseña histórica.

La historia de la comunidad india Quilmes fue muy estudiada e investigada. La cultura Diaguita estaba en pleno desarrollo cuando en el año 1534 llegan los españoles al territorio Calchaquí (Quilmes, 2006: 10). La historia oficial habla de una desaparición total del pueblo Quilmes en el año 1666 cuando los destierran de su ciudad sagrada. Esta historia no explicaría la actualidad del pueblo Quilmes. Por ello se remitirán algunos datos que fueron escritos en el año 2006 por la propia comunidad india Quilmes. Este pueblo posee una historia cargada de luchas, resistencia, victorias y fracasos. Pertenece a la etnia Diaguita- Calchaquí.

En cuanto a la familia, se dice que los Quilmes tenían el carácter de “familia extensa” según los hallazgos del sitio arqueológico, vale decir la familia ocupaba un recinto habitacional y la misma estaría integrada por entre 20 y 30 individuos. El idioma que hablaba el pueblo Diaguita era el Kakán. La llegada de los conquistadores generó procesos de a-culturización de los pueblos por diversos métodos: catequización a mayores; pago de tributos voluntarios o a la fuerza, encomiendas, evangelización, entre otros. La lucha y resistencia de este aguerrido pueblo duró 130 años.

“...los historiadores denominaron “Guerras Calchaquíes” a las revueltas más importantes. Los principales titaquines en la resistencia de nuestro pueblos fueron Juan Calchaquí a finales del 1500 y Juan Chalimín que lideró el levantamiento de 1630...” (Quilmes, op.cit: 11)

Estas luchas se llevaban adelante de manera confederada como otros pueblos. El pueblo Acaliano de Fuerte Quemado, Hualfines, Colalaos, Amaichas y muchos otros, participaban junto a Quilmes de estos procesos de rebelión ante los conquistadores españoles (Quilmes, op. cit.:12).

Es en el año 1666, luego de la traición del falso Inca, donde los Quilmes son atrapados y vencidos, en donde se dice que primero fueron llevados a Tucumán, luego a Córdoba y finalmente a Buenos Aires. Fueron ubicados en un lugar cuyo nombre primero fue Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de Quilmes”. Este sitio fue fundado el 14 de septiembre de 1666 (Quilmes, op. cit.: 13-15). Los datos demográficos que se registran en épocas referidas a campañas militares, conquistas y otros sucesos (Trelles, 1857) muestran grupos de edades, priorizando en esto a los varones, seguramente por la importancia de estos en el tributo a pagar a la corona. Datos del padrón del pueblo denominado en ese entonces Santa Cruz de los Quilmes realizado en el año 1682, arrojan las siguientes cifras

Varones solteros: 72
Varones casados: 74
Varones viudos: 17
Mujeres solteras: 10.
Mujeres casadas: 23
Mujeres viudas: 7

El número de personas en edades infantiles es reducido, siendo mayoría el número de varones en edad activa (20 a 51 años).

En este nuevo lugar donde permanecieron muchos años, los Quilmes pudieron reproducir sus modos de organización como el Cacicazgo. Posteriormente se fundó la actual ciudad de Quilmas en el territorio bonaerense.

“No mataron a todos... nuestros abuelos cuentan que escaparon, se escondieron y regresaron por las zonas cercanas a la Ciudad Sagrada de Quilmes...” (JPD)

Es en el año 1716 que la corona española entrega la cédula real reconociendo un territorio de aproximadamente 120.000 hectáreas, las cuales corresponden a Amaicha del Valle y Quilmes. Esta cédula real también permitió el regreso de los sobrevivientes.

A continuación se expone el fragmento que da cuenta de la propiedad del territorio:

“.... bajo cuyos limites damos la posesión real, temporal y corporal al susodicho cacique, para él y su indiada sus herederos y sucesores: y ordenamos al Gran Sánchez que está siete leguas de Tucumán abajo deje venir a los nidos que se le encomendaron por el referido tiempo de diez años para que instruidos volviesen todos a sus casas como dueños legítimos de aquellas tierras para que las posean ellos y sus descendientes...” (Anexo N° 18)

Este valioso documento fue protocolizado en el año 1892, acción relevante para el reconocimiento de los derechos de las comunidades sobre su Madre Tierra. Esto permitió que los Quilmes retornen a su lugar de origen, pero volverían a tener conflictos por sus tierras con los que fueron y son los terratenientes de la zona.

En cuanto a la espiritualidad de estos pueblos, los Diaguitas eran politeístas; sol, luna, cerro, rayo y otros símbolos tenían valor sagrado y carácter de deidades. Principalmente adoraban a la Pachamama, Madre Tierra o Madre del Mundo.

La cosmovisión Diaguita tiene innumerables características entre las cuales se pueden mencionar la adoración a la Madre Tierra, litolatría, división tripartita del mundo, dualidad de las deidades, tiempo circular, animización de las cosas, concepto de caos y cosmos, adoración a la naturaleza, y un profundo sentido de equilibrio entre el hombre y su entorno (Zurita, 2004: 47-56).

5.1.4. Principales actividades.

Los Diaguitas-Calchaquíes fueron un grupo de personas sedentarias, dedicados a la agricultura de subsistencia y crianza de animales menores. Alcanzaron un importante desarrollo en las áreas artísticas a través del tejido, cerámica, tallado en piedra, cestería, madera y metalúrgica (Piossek Prebisch, 2005).

Los Quilmes fueron un grupo dedicado a la agricultura, ganadería y recolección, representado lo anteriormente dicho por el cultivo de papas, maíz, porotos ajíes, zapallos, quínoa; recolección activa de semillas de chañar y algarroba, consumo de charqui, crianza de llamas, caza de guanacos entre otros. Los cultivos se producían bajo

la forma de trabajo comunitario como la minga, es decir de manera colectiva y solidaria (Quilmes, 2006: 5).

Como en muchas otras comunidades del norte argentino, y particularmente de zona montañosa, para la producción de alimentos los pueblos se encontraban con dos importantes limitantes: escasez de agua y relieve quebrado. Es por esto que idearon sistemas de riego a través de canales y acequias y andenes o terrazas de cultivo. La actividad de siembra se realizaba con herramientas manuales como “bastón cavador”, palas y azadas de piedra. Los cultivos se realizaban en sistema de terrazas o bancales, sostenidos por verdaderos canteros de piedra que cortaban la pendiente de los terrenos.

Estos andenes o terrazas estaban rellenos con tierras fértiles y sostenidas por paredes o pircas de piedra. De esta manera se aprovechaba el espacio para cultivos y se garantizaba un eficiente aprovechamiento del agua de lluvia.

En la actualidad, algunas comunidades de base continúan realizando su actividad agrícola en terrazas como en Talapazo, y las Cañas.

Acerca del territorio, se puede decir que además del elevado valor espiritual que la tierra tenía y tiene para estos pueblos, la comunidad india Quilmes pudo lograr efficientizar el uso de sus recursos, ya que se utilizó al territorio de manera comunitaria y con fines precisos, como ser fuente de alimentación, refugio, núcleo habitacional, área de defensa y guerra y área de cultivo.

En cuanto a la agricultura, los Quilmes sembraron como todos los pueblos andinos lo hicieron, practicando lo que Choncoll (1994) llamó los pisos ecológicos, estrategia que permitía cultivar diferentes especies según lo permitiese la altitud. De esta manera, la dieta equilibrada estaba garantizada. Desde 1.500 a 1.800 m o también desde el lecho del río Santa María, hasta los 1.800 m.s.n.m., la comunidad Quilmes se dedicó a la recolección de frutos de las siguientes especies: algarroba, mistol, chañar, las cuales fueron una importante fuente de alimentación como así también recurso maderero para producir otros alimentos. Los excedentes eran almacenados en trojas o depósitos trasladables, y se utilizaba a medida que se necesitaba.

En este nivel tuvo mucha importancia la molienda, la cual se realizaba en numerosos morteros distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. No existe acuerdo si esta tarea se llevaba adelante de manera comunitaria o familiar.

También en este piso la caza de animales menores como el zorro, quirquincho, aves, entre otros, tuvo importancia.

Entre 1.800 y 2.500 m.s.n.m., se dedicaron a la agricultura intensiva de maíz, maní, poroto, zapallo y quínoa. Entre 2.500 y 3.500 m.s.n.m., cultivaban diferentes tipos de tubérculos.

Los dos pisos ecológicos o franjas dedicadas a la agricultura se realizaron a través de andenes o terrazas y tuvieron el beneficio del riego a través de un interesante sistema de canales de regadío. El sistema de riego utilizado por los Quilmes, se basó en una represa ubicada por encima de los campos de cultivo, la cual almacenaba mucha

cantidad del líquido elemento. El muro frontal de dicha represa está hecho de piedras y barro mezclado y alcanzó un grosor de 3 metros.

La distribución se realizaba a través de canales, uno que corría por la falda del cerro y el otro por el interior de los andenes. En dichos andenes el agua se distribuía a través de pequeñas aberturas ubicadas en las pircas de contención. Estas aberturas oficiaban de compuertas.

Por encima de los 3.500 m.s.n.m., domesticaban llamas, realizaban ganadería, pastoreo y caza de guanacos y vicuñas.

Las tareas agrícolas se realizaban de manera comunitaria y el fin último de esta actividad fue el autoconsumo y el intercambio con zonas vecinas.

5.1.5. La ciudad sagrada de Quilmes.

Quilmes representó una de las primeras ciudades prehispánicas en Argentina. Su población se desarrolló de manera muy importante, alcanzando un elevado nivel sociocultural, con manejo de sistemas agropastoriles y de recolección avanzados y relaciones de intercambio político-económicas de gran escala.

La ciudad sagrada de Quilmes, conocida como ruinas de Quilmas, es uno de los sitios arqueológicos más llamativos de América Latina. Representa para los pobladores la prueba intacta de su preexistencia, y tiene valor sagrado por el legado ancestral. Dicho sitio está asentado en un cordón montañoso compuesto por dos cadenas principales separada por un valle llamado Yokavil. El Valle de Yokavil es compartido por las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca.

Fue verdaderamente una ciudad donde los pobladores de Quilmes realizaban todas sus actividades. Además servía de fortaleza y resguardo para situaciones de guerras.

La ciudad sagrada de Quilmes, se ubica hacia el oeste de la provincia de Tucumán a 5 Km de la ruta nacional N° 40. Es un gran atractivo turístico, por lo cual también fue motivo de conflictos y pleitos.

5.1.5.1. El sitio, la tenencia y su recuperación.

La ciudad sagrada de Quilmes pasó por diversos episodios, hasta terminar en manos de los ancestrales dueños. En el año 1978, cuando el país y Tucumán, atravesaban uno de los peores capítulos de su historia, se define la reconstrucción de las ruinas de Quilmes, con el objetivo de fomentar el turismo en la región. Esto se llevó adelante a través de un plan denominado Plan NOA, donde participaron el entonces gobierno de facto de Tucumán, en colaboración con representantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Instituto Interdisciplinario de Tilcara (Sosa, 2007: 4-6). Se inaugura el 9 de julio de ese mismo año, muy cuestionado todo por no seguir la normativa acorde a lo referido a patrimonio cultural.

Mediante el decreto provincial N° 104/3 del 17 de enero del año 1992, la explotación del sitio sagrado fue otorgada a un particular, Sr. Héctor Cruz. Dicha concesión le fue

dada por el término de 10 años. Entre las obligaciones que establecía el pliego licitatorio, se encontraba la de construir un hotel en la zona de la “ciudad sagrada de Quilmes” y el pago de un canon mensual al Estado de la provincia de Tucumán. (Sosa, op. cit.). Otro decreto provincial, el N° 884/3, con fecha 18/05/95, dispuso la ampliación de la construcción del hotel mencionado.

Con fecha 27/05/92 y por resolución N° 07288/3 de la Secretaría de Turismo de la provincia, autoridad de contralor del contrato de concesión mencionado (Sosa, op. cit.: 20), se dispuso en rechazo del pedido de ampliación del plazo de la concesión solicitada por el Sr. Cruz (cabe aclarar que esta concesión ya se encontraba vencida y no se habían efectuado los pagos correspondientes para saldar la deuda por cánones debidos al Estado).

El decreto N° 2723/3 de fecha 23/12/2002 dispuso la rescisión del contrato de concesión. Asimismo se autorizó a la Secretaria de Turismo dictar la resolución fijando día y hora para la recuperación del complejo Ruinas de Quilmes. Ante esto la Secretaría de Turismo dictó una resolución para hacer efectiva la restitución del complejo turístico. Este acto fue llevado a cabo con el auxilio de la policía de Tucumán y la intervención del Juez de Paz de la localidad de Colalao del Valle. Hubo dos intentos de recuperación que fracasaron. Ante esto, la comunidad india Quilmes solicitó al Poder Ejecutivo de la provincia el dictado de otro decreto para que se inicie la correspondiente acción judicial de desalojo contra el particular H. Cruz. El 13 de marzo de 2006 se dispuso la inmediata resolución de la solicitud administrativa por la que se requirió el desalojo de este particular de la ciudad sagrada.

Este proceso de recuperación llevó mucho tiempo, y en él participaron la comunidad india Quilmes, grupos de otras comunidades indígenas, asesores letrados como apoyo técnico, grupos de trabajo, organizaciones, parte de la sociedad civil, el Estado al no obstaculizar, entre otros. Hubo 40 días de reclamos y resistencias, habiendo sido una de las medidas el corte de la ruta N° 40.

Una vez recuperado el sitio sagrado, la comunidad india Quilmes a través de su Consejo de Delegados, definió que los guías del sitio arqueológico serían los mismos comuneros de Quilmes. Al principio se cobraba “la voluntad” para conocer y recorrer el sitio. Con el paso del tiempo y el avance de la organización, se fijó un monto de valor para la entrada. Actualmente se cobra cinco pesos y esto incluye la explicación y orientación de un guía sobre los orígenes de los indios Quilmes y cuestiones generales de la ciudad sagrada.

Con respecto a la situación legal del predio, se está discutiendo con el Estado provincial (Ente Tucumán Turismo) cómo y quién manejará el restaurante y el hotel de la ciudad sagrada. La comunidad india Quilmes fijó varias pautas que tienden a que se respete su posición como pueblo originario en la temática.

El territorio (209 ha) fue recuperado en el mes de diciembre de 2007. Cabe destacar la importancia de este hecho en particular, catalogado por muchos como una recuperación histórica sin precedentes. El hotel permanece cerrado.

5.1.6. Organización actual de la comunidad india Quilmes.

La organización de la comunidad india Quilmes es fruto de luchas y reivindicaciones que se inician alrededor del año 1960 (Quilmes, 2006) cuando algunas familias Quilmeñas comienzan a cuestionarse el trato y la relación con los terratenientes del lugar.

Hasta ese año, las familias indígenas vivían situaciones de semiesclavitud, pagaban pastaje, obligaciones y arriendo a los señores que aducían ser dueños de todo el territorio. Es decir, los comuneros debían pagar por todo eso para que se les permitiese vivir allí, en sus propias tierras.

El primer juicio que lleva adelante la comunidad india Quilmes, es con un comunero Don Jesús Costilla por una parcela (Quilmes, op. cit.: 27). Este juicio duró diez años y la victoria fue para Quilmes. Esto marcó un antes y después en la lucha por el territorio.

La comunidad india Quilmes, es una de las comunidades más numerosas, es decir la que registra más cantidad de pobladores (en adelante comuneros) que se reconocen descendientes directos o indirectos de pueblos originarios. Este último dato no es menor ya que se está hablando de una identidad común en la organización, punto de relevancia que se abordará posteriormente.

Los productores indígenas de Quilmes, tienen diferentes actividades entre las cuales se pueden mencionar a la agricultura, ganadería y artesanía como las principales.

En cuanto a la agricultura, las zonas más bajas producen pasturas (alfalfa, avena, cebada); hortalizas varias (maíz, zapallo, verduras de hoja, etc.), y en las zonas más elevadas en altura encontramos nogales, durazneros, vid, entre otros.

Con respecto a la ganadería, los productores de Quilmes, se dedican a la actividad caprina y ovina, para aprovechamiento de carne, leche y elaboración de subproductos (por ejemplo quesos).

La artesanía ocupa también un importante lugar, donde los principales rubros que se realizan en la zona son la cerámica, tejido en telar, dulces y quesos artesanales.

A modo general el destino principal de las producciones agrícolas y pecuarias es el autoconsumo, con venta de excedentes. La artesanía es destinada a la comercialización.

La comunidad india Quilmes se asienta en una zona un tanto asilada, razón por la cual la intermediación es un hecho cotidiano, por lo que las ventas no son del todo exitosas.

Antes de abordar una caracterización de esta organización indígena, y los vínculos o relaciones que se establecen, resulta indispensable precisar algunos conceptos.

La organización, como concepto, es el ámbito concreto en que se producen las diferentes formas de intercambio e interacción social. También en una aproximación preliminar, puede decirse que mediante el término organización suele aludirse a cualquier agrupamiento humano reunido en forma relativamente estable en torno de un conjunto de finalidades y de medios proporcionados a su logro (Flood, 2009).

Algunas características o aspectos que se pueden mencionar de la organización y que la definen como tal, podrían ser que ésta asegura la solidaridad entre individuos; es un sistema determinado de relaciones; provee permanencia en el tiempo, entre otros.

En este marco, la comunidad india Quilmes es una organización que surgió hace aproximadamente 40 años, por defensa de los derechos y valores ancestrales de los pueblos originarios. Es así como en un primer momento se organizaron bajo la figura de sociedad civil, eligiendo presidente, secretarios, y otros cargos que exige la formalidad de la misma. Desde la década del 70, los mayores de la comunidad india Quilmes, como se mencionara anteriormente, iniciaron procesos de lucha y reivindicación defendiendo sus derechos sobre la tierra. Esta lucha ha sido el legado más tangible en los actuales dirigentes de la comunidad.

Desde las propias voces de la comunidad, se afirma que el pueblo Quilmes ha logrado mantener la posesión ancestral de su territorio.

En general, la economía de la comunidad india Quilmes es una economía de subsistencia. Las tierras en las zonas bajas son aptas para cultivo, pero la limitante histórica del agua continúa vigente.

Según datos de la encuesta socioeconómica realizada por el proyecto UNIR (Una Nueva Iniciativa Rural) llevada adelante en la década del noventa, surgen elementos para revisar y contrastar. Estos datos mostraron lo que cerca del 30% de la población había emigrado de los Valles, con el principal motivo de falta de trabajo (81%). Cabe destacar que estos datos reflejaban una emigración de pobladores Quilmeños en edad activa (62% entre 20 y 39 años) y 14% entre 40 y 59 años.

La comunidad india Quilmes en la actualidad está conformada por 630 familias. Es, junto con la comunidad indígena de Amaicha del Valle, las más numerosas. Posee personería jurídica nacional, requisito fundamental que el Estado exige para que la comunidad sea reconocida como tal, y a partir de ahí poder solicitar por ejemplo financiamientos.

Las comunidades de base son 14, ya mencionadas. Estos 14 pueblos, en el marco de la organización de la comunidad india Quilmes, tienen delegados de base elegidos democráticamente por los comuneros de cada pueblo. Entre todos conforman el Consejo de Delegados que conjuntamente con el Cacique toman decisiones y discuten sobre cuestiones relacionadas a la comunidad indígena en general. Cabe destacar que el Cacique de la comunidad india Quilmas, se elige cada 4 años en asamblea general de comuneros.

5.1.7. Caracterización de la cultura organizacional de la comunidad india Quilmes.

La cultura organizacional es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los grupos existentes en todas las organizaciones. Vale decir que comprende intangibles. Es la cultura como energía, es la fuerza oculta que motoriza la actividad.

En este conjunto de conceptos están representadas las normas informales y no escritas que orientan el comportamiento cotidiano de los miembros de la organización, comportamientos que pueden o no estar alineados con los objetivos de la organización.

La preferencia de los miembros no son controladas por reglas formales, sino por normas o reglas de tipo cultural por ejemplo: el diálogo (Flood, 2009).

Cada cultura organizacional es diferente por diversos motivos:

- Por lo que funcionó y lo que no funcionó.
- Por la actividad que realiza.
- Por la personalidad del fundador.
- Por su mito de origen.

Sobre la comunidad india Quilmes, y su cultura organizacional, la misma está caracterizada por aspectos que hacen a la cosmovisión de los miembros de la comunidad. En este caso la identidad cultural que posee la comunidad en cuestión, marca percepciones, creencias y valores diferenciales a otras organizaciones.

Desde sus prácticas laborales cotidianas al valor simbólico que le atribuyen a las cosas. Ejemplo de esto la Pachamama (Madre Tierra), la cual simboliza desde la cosmovisión andina más profunda la madre del tiempo y de todas las cosas. Esta valorización se replica en la actualidad, y se manifiesta a través de ceremonias a la Pachamama en las cuales se les deja ofrendas para garantizar protección, buena siembra, buena cosecha, entre otros. Además se pone en valor las prácticas conservacionistas de la mayoría de los productores indígenas que tienen la firme convicción del cuidado del recurso suelo por la sacralidad del mismo. Otro aspecto relevante es la concepción frente a los otros recursos (aire, agua) de los cuales se dice que no deben ser explotados, sino aprovechados.

Por último, en este marco se menciona las luchas y conflictos que se desatan por el territorio, no solo por la vulneración de derechos que se ejerce sobre los pueblos originarios, sino la defensa que los mismos entablan para con su tierra (Pachamama) por los valores tan arraigados.

Todo lo antes mencionado condicionará el comportamiento cotidiano de los miembros de la organización indígena, principalmente por los valores que se le asignan a las cosas como así también por la naturaleza de la organización.

5.1.8. Proyectos implementados.

Dentro del periodo en estudio, la comunidad india Quilmes fue destinataria de numerosos proyectos de desarrollo.

El más relevante fue el Proyecto DCI del cual se desprendieron varios subproyectos, tales como

- i. “Torna Vuelta”. Amaicha-Quilmes.
- ii. Maquinarias de uso compartido para la comunidad de Amaicha y Quilmes.
- iii. Agua para la comunidad de Anjuana.

- iv. Agua para la comunidad de El Paso.
- v. Entubamiento y sistemas de riego para las comunidades de Rincón de Quilmes, Quilmes Centro y Quilmes Bajo.
- vi. Fortalecimiento e identidad cultural.
- vii. Comunicación Kakán.
- viii. Casa de la comunidad india Quiles.

Fuera del Proyecto DCI, y con financiamiento de otros organismos nacionales principalmente, se implementaron en Quilmes proyectos tales como médicos comunitarios, tutores interculturales, TucumPACI, microcréditos, becas indígenas, entre otros.

En cuanto a los principales problemas identificados, los comuneros expresan lo siguiente (Comunidades Indígenas de Tucumán Pueblo Diaguita y Lule, 2006)

- i. Organización interna de las comunidades.
- ii. Manejo de los recursos naturales que están en territorio indígena.
- iii. Reconocimiento de los territorios que ancestralmente ocupan.
- iv. Aislamiento.
- v. Falta de medios de comunicación.
- vi. Falta de contenidos de la temática indígena de las escuelas.
- vii. Ausencia de formación y titularización de educadores indígenas.
- viii. Falta de un sistema de salud integrado que beneficie a todos los comuneros.
- ix. Falta de desarrollo integrado del sistema productivo-ganadero.
- x. Ausencia de seguridad jurídica en relación al Estado y a terceros.
- xi. Falta de recursos genuinos para el desarrollo institucional, social y político.
- xii. Migración de jóvenes.

5.2. Comunidades del departamento Trancas.

En la zona noroeste del departamento Trancas de la provincia de Tucumán, se ubican diferentes comunidades indígenas las cuales presentan una organización más reciente que las de otras zonas, como las asentadas en el Valle Calchaquí, por ejemplo Amaicha y Quilmes. Asimismo, resultan de interés cuando se revisan los procesos por los cuales atravesaron para llegar a consolidarse como tales, y la situación actual de las mismas.

Dichas comunidades son:

Comunidad Indígena de Chuschagasta

Comunidad Indígena Pueblo de Tolombón.

Comunidad Indígena Potrero de Rodeo Grande

Comunidad Indígena Indio Colalao

Comunidad Indígena Anfama

Comunidad Indígena Mala-Mala

Comunidad Indígena de Chasquivil. Esta última si bien pertenece por ubicación al departamento Tafi Viejo, acompañó los procesos organizativos del Valle de Trancas y en la actualidad se la incluye en este listado.

Las arriba mencionadas se reconocen pertenecientes a la etnia Diaguita y comparten algunos aspectos de la historia de los pueblos del Valle Calchaquí y Valle de Tafi.

5.2.1. Caracterización de la zona.

La cuenca Tapia-Trancas se localiza al centro norte de la provincia, limitando al este con las Sierras de Medina y al oeste con las Cumbres Calchaquíes (Fadda, Zucardi 1985: 19). La ciudad de Trancas está a una distancia de 70 Km de la capital provincial.

El departamento Trancas tiene dos distritos: Trancas y Choromoro. Tanto en uno como en otro encontramos comunidades indígenas. La superficie del departamento es de 2.862 Km², y según datos del Censo Nacional de Poblacional 2010, cuenta con 17.371 habitantes. La mayoría de éstos se concentran en la ciudad de Trancas, y en menor proporción en la localidad de San Pedro de Colalao.

La precipitación media anual es de 400 a 500 mm. La evapotranspiración anual es de 900mm. Hay un déficit hídrico permanente durante todo el año.

La temperatura media anual se encuentra entre los 18 y 19°C. La media de enero es de 21 a 22°C y la de julio es de 10°C. Las heladas se registran desde el mes de junio hasta agosto. La frecuencia es de 22 días al año (Fadda, et. al., op.cit.: 20).

En el departamento Trancas se encuentran numerosos pueblos, parajes y/o localidades con diferentes actividades socioeconómicas. Algunas de estas son: Chuscha, Choromoro, La Higuera, Ñorco, El Chorro, Rodeo Grande, Gonzalo, Rearte Tacana Chica, Tacana Grande, Hualinchay, San Pedro de Colalao, Zarate Norte, Zárate Sur, Simbolar, entre otros.

En esta zona se encuentran las comunidades indígenas de Chuschagasta, Comunidad Indígena Pueblo Tolombón, y comunidad indígena Potrero Rodeo Grande, Mala Mala y Anfama. La villa veraniega de San Pedro de Colalao alberga a la comunidad Indio Colalao la cual está conformada por diversos parajes (Anexo N° 19).

5.2.2. Clima.

El clima de Trancas es de tipo monzónico concentrando las lluvias en el verano las cuales sobrepasan los 500 mm. anuales hacia el centro del Valle. Hacia la zona oeste las precipitaciones son más abundantes llegando a los 600 mm anuales en Chuscha y La Higuera. En invierno y en correspondencia con el clima de la provincia, las lluvias son escasas. El clima de las zonas bajas de Trancas permite la producción de semillas de hortalizas, habiendo siendo uno de los principales abastecedores del país.

En cuanto a la altitud, la ciudad de Trancas está ubicada a 718 m.s.n.m., mientras que las zonas montañosas oscilan entre los 1.000 y 3.000 m.s.n.m.

5.2.3. Breve reseña histórica.

Los pueblos indígenas del Valle de Trancas y Choromoro, comparten historia con los Quilmes. Se reconocen parte integrante de la etnia Diaguita, por lo que las características particulares que tuvieron los Diaguitas, se replican en las comunidades de Trancas.

Estos pueblos participaron junto con los Quilmes en las llamadas guerras Calchaquíes

“...las rebeliones se organizaban mediante confederación de pueblos... hubo también muchos otros, Yokaviles, Hualfines, Colalaos, Tolombones, Cuschagasta, Tafies, y Caspinchangos, que se asentaban a lo largo del Valle, desde la Poma en Salta hasta el Valle de Catamarca y La Rioja...” (Quilmes, 2006: 11)

Luego de los últimos enfrentamientos, los Colalaos fueron enviados a Trancas juntos con los Chuschagasta.

5.2.4. Principales actividades y servicios.

El departamento Trancas es extenso, por lo que las actividades socioeconómicas son múltiples. Si se centra el análisis en las zonas donde habitan las comunidades indígenas, la agricultura y la ganadería menor son las predominantes. También la artesanía en cuero y tejido tiene importancia en la zona.

La actividad agrícola se caracteriza por la producción de arvejas, chauchas, maíz, zapallo, cayote, y frutales como ciruela, durazno. En la zona más baja predomina la actividad hortícola en tierras arrendadas por migrantes bolivianos asentados en Trancas hace aproximadamente 10 años. Coexisten en la misma región identidades diferentes provenientes de comunidades potosinas Aymaras, comuneros que se reconocen descendientes de Diaguitas; pobladores criollos que no pertenecen o no se reconocen pobladores indígenas, y terratenientes en conflicto con los pueblos originarios. Todo esto caracteriza de manera particular a la región y obstaculiza procesos de fortalecimiento y organización de las comunidades tucumanas.

En cuanto a la crianza de animales predominan el ganado caprino, bovino y crianza de aves de corral. Los animales se utilizan para auto consumo y venta de carne como así también de subproductos principalmente el queso y el quesillo artesanal para venta. Se utilizan equinos para tareas de carga y como medio de transporte.

Existe en la zona un alto porcentaje de subocupación, dedicándose los pobladores a changas o tareas rurales extraprediales. En menor cantidad, hay empleados de la comuna de Choromoro.

En la zona se encuentran escuelas primarias, secundarias y hasta un terciario en San Pedro de Colalao y en la ciudad de Trancas.

En cuanto a los servicios de salud que existen en el departamento Trancas, se destaca un hospital del cual dependen nueve Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicados en Choromoro, Chuscha, Benjamín Paz, Gonzalo, Hualinchay, Las Arcas, Rodeo Grande, San Pedro de Colalao y Villa Vieja (Lascano, 2010).

5.2.5. Organización actual de las comunidades del Valle de Trancas.

Las comunidades indígenas del departamento Trancas son de organización y conformación recientes.

Todas ellas tienen un Cacique elegido por asamblea cuyo mandato dura 4 años, salvo

algunas excepciones como el caso de Chuschagasta, que cambió de Cacique luego de unos 10 años.

Se realizará una breve reseña de los aspectos más relevantes de cuatro comunidades indígenas de la zona de Trancas, vinculados a sus procesos de organización.

Pueblo de Tolombón, por ser la primera comunidad en organizarse como tal; Chuschagasta, por su emblemático caso del asesinato de Don Javier Chocobar; Comunidad Indio Colalao, por estar en proceso de organización y ser la más nueva en su reivindicación como comunidad y Potrero Rodeo Grande por poseer proyectos de desarrollo ejecutados en la zona.

La primera comunidad que inició una organización del tipo asociativa, fue la comunidad indígena Pueblo de Tolombón. Esto se dio como en muchos otros pueblos, por procesos de lucha y resistencia ante los violentos desalojos de terratenientes. La zona tenía duros episodios de desalojos por parte de Crito, terrateniente del lugar, en desmedro de los pobladores ancestrales de la zona.

Se dice que las esperanzas de cambio de los comuneros se iniciaron en el año 1984, cuando se enteran que Don Cosme Morales, figura emblemática de la zona, llevaba adelante juicios contra el terrateniente, los cuales en sus fallos favorecieron a Morales.

Don Cosme Morales, quien fuera el abuelo del actual Cacique de la comunidad de Tolombón, Don Rufino Morales, defendió su territorio y ganó juicios contra terratenientes del lugar, lo que lo legitimó como dueño ancestral de su tierra.

A partir de ahí, y durante la década del noventa, los comuneros de la zona de Tolombón comienzan a recibir capacitaciones de programas del Estado y de otros dirigentes indígenas y a discutir acerca de la problemática de la tierra, y de la identidad.

Pueblo de Tolombón tuvo sus inicios en el año 1994. Durante esos años la mencionada comunidad alojaba a otros pueblos que hoy son comunidades independientes tal como Potrero Rodeo Grande y Chasquivil (1998).

En el año 2003 la comunidad indígena Pueblo de Tolombón atraviesa un hecho que marcará la historia de este pueblo, sobre todo en cuanto a la protección de sus recursos naturales.

“... el conflicto se dio en febrero de 2003, en la localidad de Gonzalo, perteneciente a la comunidad indígena Tolombón... el terrateniente de la zona buscaba a través de la ley de implantación de bosques cultivados N° 25.080, talar 600 hectáreas para plantar eucaliptus, para esto debería deforestar bosque autóctono de la comunidad indígena...” (Lascano, 2009)

Este bosque reunía numerosas especies animales y vegetales como ser pavas del monte, quirquinchos, oso hormiguero, corzuela, aves; nogales criollos, talas, piquillín, cochucho, tusca, entre otros. Además, la comunidad reconocía en este bosque importantes aspectos culturales, ya que allí se realizaban ceremonias y ofrendas.

Frente a la posibilidad de perder los recursos naturales, la comunidad indígena de Tolombón se organizó e hizo frente al terrateniente. Realizó denuncias ante la Dirección de Recursos Naturales de la provincia donde los funcionarios le dieron la razón a la comunidad, y se solicitó un amparo ambiental, frenándose la tala. El terrateniente de la zona debía pagar multas y reforestar las siete hectáreas que había empezado a desmontar, aunque nada de esto se llevó a cabo, debido a que, según informan los pobladores del lugar, el terrateniente tenía importantes vínculos con el poder político del momento.

Esta acción fue acompañada por organizaciones ecologistas, juristas indígenas y dirigentes de otras comunidades que se solidarizaron con el caso. Esta “victoria” fortaleció a la comunidad indígena Pueblo de Tolombón.

“...es el primer caso en que una comunidad indígena frena una tala, esto creo jurisprudencia. Hoy la comunidad indígena es guardiana de estos recursos” (García Salemi, 2009)

Ante este proceso de resistencia y reivindicación de la comunidad indígena, los comuneros dejan de pagar al terrateniente el arriendo y el pastaje en sus tierras. Si bien este es un aspecto que fortaleció a la comunidad, por otro lado se iniciaron violentos conflictos por la cuestión territorial en la zona.

Actualmente la comunidad indígena Pueblo de Tolombón está conformada por las siguientes comunidades de base: Gonzalo, Rearte, Tacana Chica, Tacana Grande, y Hualinchay.

Por conflictos internos esta comunidad se retiró de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND).

La comunidad indígena Potrero de Rodeo Grande, perteneció a la Comunidad Tolombón hasta el año 2001, donde se comienzan a organizar como una comunidad independiente.

La denominación Potrero Rodeo Grande según enuncian los pobladores del lugar, es errónea, ya que Rodeo Grande es todo el territorio y se denomina potrero a la zona del pueblo de esta localidad.

Esta comunidad en la actualidad cuenta con cien familias de las cuales alrededor de 60 se autoreconocen descendientes de indígenas. La mayoría de las familias que no se reconocen parte de la comunidad, poseen títulos de propiedad individual de sus tierras.

Esto explicaría la no necesidad de recuperación del territorio de aquellos pobladores que obtuvieron su título y la necesidad de los comuneros indígenas de regularizar su situación territorial.

En cuanto a gestión y participación comunitaria, esta comunidad se destaca ya que la misma fue administradora de un proyecto denominado Gran Torna en el cual se otorgaban créditos semillas, animales, herramientas y materiales para artesanías a los comuneros, los cuales debían devolver en dinero, servicios o semillas generando de esta manera un fondo rotatorio que podría solventar futuros pedidos. Este proyecto tuvo

gran alcance, beneficiando a las comunidades de Trancas como así también las de Tafi. Un importante resultado que tuvo este proyecto es que el fondo rotatorio generado a partir de la implementación del mismo, alrededor del año 2009, continúa activo en la actualidad (Sánchez, 2013).

La comunidad indígena Chuschagasta se conforma en el año 2000. Se ubica a aproximadamente 60 Km de la capital provincial. Hacia el suroeste se encuentra el Chorro y Ñorco, pertenecientes a la comunidad indígena. Todo el territorio es de una superficie aproximada de 45.000 ha (Fogón Andino, 2009).

Al decir de Demetrio Balderrama, ex Cacique de la comunidad de Chuschagasta, la lucha por el territorio se inicia alrededor de los años 70. Es en 1970 donde la comunidad de Chuschagasta deja de pagar pastaje a los terratenientes. Este pastaje era un pago por la alimentación de los animales, y si no había dinero, los comuneros pagaban con animales o trabajo.

Según Balderrama, llegaron a la zona de los Chuschagasta dos familias de terratenientes con las cuales tuvieron numerosos conflictos. El primero fue Colombres, quien llega a la zona en el año 1835, cuando se casa con la hija de Alurralde, último encomendero de la zona. El segundo es Amín, que llega a la zona alrededor de 1959. Con esta familia es la que la comunidad hasta el día de hoy tiene conflictos.

Se destaca como uno de los conflictos de mayor envergadura en la zona al asesinato del dirigente indígena Javier Chocobar por parte tres hombres, Gómez, Valdivieso y Amín, dos ex policías y un empleado legislativo. Este crimen aún está impune y espera juicio oral y público en Tribunales de la provincia de Tucumán.

Como en muchos otros pueblos, la organización y conformación de la comunidad indígena llega después de un suceso de lucha y reivindicación. El caso de los Chuschagasta, surge después de resistir el cercado y clausura al único camino de acceso a la comunidad indígena. Los terratenientes de la zona, pusieron candado y un cartel de “propiedad privada” en el camino que lleva al Chorro y Ñorco. Por numerosas denuncias y gestiones de los dirigentes ante tribunales, organismos de derechos humanos y demás, es que se llega a fiscalía y se logra sacar el candado por la fuerza pública. A partir de allí y luego de superar las insistencias de clausura de los terratenientes, el camino de acceso se libera y la comunidad se consolida como tal (Fogón Andino, op. cit.).

La comunidad Indio Colalao es la comunidad más nueva de las del Valle de Trancas. Se reivindica en el 2006, no a partir de reforma de la Constitución Provincial donde se incorpora el artículo N° 149, sino por una iniciativa de dos copleras de la zona quienes convocaron a un joven dirigente que posteriormente fue el Cacique de la comunidad durante los años 2006 a 2010 y según se informa, hubo colaboración en los trámites de gente allegada, del grupo de copleros, para iniciar los papeles y ahí se obtuvo ayuda de personas de la capital provincial. Este grupo trabajó mancomunadamente para confeccionar el estatuto. Las personas que apoyaban el proyecto de la comunidad indígena en terreno llevó adelante las tareas de relevamiento donde se registraba quiénes eran descendientes de los indios Colalao y quiénes se reconocían como tales para poder ingresar a la comunidad (Cruz, 2012).

La comunidad Indio Colalao está formada actualmente por 250 familias, distribuidas en diferentes parajes: Simbolar, San José, Zarate Norte y Zárate Sur.

En la zona de Riarte existen conflictos en el territorio que desencadenaron hechos conocidos de violencia en los cuales intervinieron funcionarios públicos, Caciques, policías, organizaciones, letrados y otras personas, solidarizándose o no con esta causa.

Hacia el interior de la comunidad, estos hechos desataron conflictos de representatividad de la comunidad, la cual se encuentra actualmente con dos figuras de Caciques que fueron elegidos por diferentes grupos de comuneros.

5.2.6. Proyectos implementados en la zona.

Por ser comunidades de reciente conformación, los proyectos fueron escasos. En la comunidad Indio Colalao como se mencionó, aún no se han ejecutado proyectos de desarrollo o de apoyo a la organización.

Sin embargo se pueden mencionar proyectos tales como Gran Torna, proyecto de tejidos, comunicación Kakán y otros señalados anteriormente.

5.2.7. Problemática identificada.

Los problemas que tienen los pueblos del Valle de Trancas, no difieren mucho de los de otras comunidades indígenas.

Estas comunidades enfrentan gravísimos casos de vulneración de derechos. El ejemplo que ilustra esto es el asesinato de Don Javier Chocobar. Es decir no cesan los conflictos territoriales con terceros no indígenas en toda la zona.

Por otro lado, y por cuestiones aún no manifiestas pero que se piensa que son por conflictos y diferencias entre partes, algunas comunidades de esta zona dejaron de participar de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita.

También se observan conflictos de representatividad. La comunidad Indio Colalao actualmente tiene en puja la figura de dos Caciques.

En el caso particular de los jóvenes, también se identifica migración hacia los centros urbanos en busca de trabajo.

A nivel productivo, las comunidades del Valle de Trancas presentan escasez de terrenos para cultivos, comercialización afectada por distancias y aislamiento, y en las zonas más altas, la limitante del agua se hace presente.

5.3. Comunidad indígena Casas Viejas.

La comunidad indígena de Casas Viejas se ubica en el departamento de Tafi del Valle. Se localiza al oeste de la provincia entre las cumbres Calchaquíes y las del Aconquija, ocupando una extensión de aproximadamente 10.000 ha, lo que corresponde al 0,45% de la superficie provincial (Fadda; Zucardi, 1985:21).

5.3.1. Características de la zona.

En relación al relieve, el mismo está constituido por conos de deyección y terrazas fluviales, encontrándose igualmente algunos sedimentos eólicos retransportados. Presenta pendientes complejas y fuertes al pie de los cordones montañosos, más suaves y simples en el fondo del valle (Fadda; Zucardi, op. cit.).

El valle es recorrido por el río del Infiernillo y sus afluentes más importantes lo constituyen los ríos Blanco, de La Ovejería y del Rincón, que tienen el carácter de torrentes (Anexo N° 20).

El clima es de tipo semiárido templado. La precipitación anual es de 412 mm. La evapotranspiración anual es de 500 a 600 mm. El número de meses con deficiencia de agua es de 9, extendiéndose desde abril a diciembre. La temperatura media anual es de 13,2°C. La media de enero es de 18,6°C y la de julio de 8,1°C. Las heladas se producen entre el mes de marzo y septiembre con una frecuencia de 44 días al año (Fadda; Zucardi, op. cit.: 21-23).

Respecto a los suelos, existen sectores con elevada pedregosidad, lo cual dificulta el uso del mismo.

5.3.2. Breve reseña histórica.

En cuanto a la historia de la comunidad indígena de Casas Viejas, la documentación escrita es por ahora escasa, pero se sabe que comparten tiempos y eventos similares a los vividos por el pueblo Quilmes. La parcialidad indígena de la zona llevaba el nombre de Tafies, y pertenecieron, y actualmente se reconocen, descendientes del pueblo Diaguita.

5.3.3. Principales actividades.

Las principales actividades que realizan los comuneros de Casas Viejas son de tipo agrícola-ganadero de subsistencia. Se dedican al ganado vacuno para aprovechamiento de leche y producción artesanal de quesos y quesillos. Las razas de la mayoría de las vacas son criollas, incorporando algunas familias vacunos de raza Jersey en el marco de un proyecto de desarrollo. En esta actividad se practica la trashumancia; los animales migran por alimento a los cerros y en verano bajan al llano.

En cuanto a los cultivos, algunos productores siembran maíz y zapallos. Cultivos más recientes son las pasturas, tal es el caso de la avena implantada en el marco de la implementación de un proyecto de mejoramiento vacuno. También se observan frutales como manzanos y ciruelos.

En la zona funciona una pequeña fábrica artesanal de dulces, propiedad de un productor indígena entrevistado en el presente trabajo.

Es una zona apta para los cultivos hortícolas, como la papa y frutilla pero solo los grandes productores de la zona realizan esta actividad.

Los productores de Casas Viejas tienen una fuerte limitante que es el agua. Con este tema hubo problemas por obras de riego instaladas para los grandes productores, sin consulta previa a la comunidad indígena lo que generó un importante conflicto en la zona. Con gestiones del INAI Regional, esto pudo estabilizarse, y en la actualidad la comunidad indígena tiene proyectos de agua para su futura implementación.

5.3.4. Organización actual de la comunidad.

La organización actual de la comunidad indígena de Casas Viejas es a través de Cacicazgo elegido por asamblea cada cuatro años, existiendo un cuerpo de delegados y consejo de ancianos.

En la actualidad tiene una participación activa en la UPNDT, como así también en todo lo que acontece en relación a la cuestión indígena.

Un dato importante que posee esta comunidad es que es una de las pocas en Tucumán que ha tenido a una mujer en la figura de Cacique. Es interesante revisar esto por la cuestión de género que se ve dificultada en muchos casos en estos pueblos.

Esta comunidad fue elegida para la administración e implementación del proyecto PACI (Programa de Acompañamiento a Comunidades Indígenas).

Esta tarea se ve reflejada en los informes y preinformes del PACI. A continuación se detallan las actividades y acciones cumplimentadas:

- Aceptar el desafío de la responsabilidad como institución ejecutora, habiendo sido elegida por el resto de las comunidades, debiendo manejar fondos, aunque estaba incluida, pero en su gran mayoría para otras comunidades cuando aun no había ejecutado ningún proyecto para su propia comunidad.
- Trabajar desde la formulación del proyecto.
- Cumplimentar los requisitos jurídicos y administrativos que le permitieron ser la organización administradora de los fondos.
- El aprendizaje de realizar por primera vez las cuestiones burocráticas y administrativas (cuenta bancaria, regularización ante la AFIP, documentación institucional).
- Iniciar como organización su relación con el estado nacional, firmando por primera vez un convenio con el INAI.
- Organizar el manejo de los fondos, debiendo adelantar dinero al resto de las comunidades apostando a que las mismas rindan los gastos.

5.3.5. Problemática identificada.

Esta comunidad tiene limitantes en cuanto a la producción, por su topografía, relieve y clima (Fadda, et. al.: 22). Es una zona con amenaza de erosión de suelo y sobrepastoreo.

En cuanto a la cuestión indígena las problemáticas identificadas son las comunes al resto: conflictos en la cuestión territorial con el gobierno provincial y con terceros.

Los proyectos implementados en la zona ya fueron mencionados anteriormente.

5.4. Comunidad indígena Nogalito.

La comunidad de Nogalito se encuentra asentada en el departamento Lules, en un paraje denominado Nogalito, a 80 Km. aproximadamente de la capital provincial (Anexo N° 21).

El pueblo Lule se reconoce preexistente al Estado argentino, como todos los pueblos originarios de Tucumán. Esta preexistencia, según informan los dirigentes de Nogalito

“La demostramos con la permanente posesión territorial desde los tiempos inmemoriales, además está respaldada por documentos que reconocen nuestros derechos territoriales...” (CCN)

Actualmente la comunidad de Nogalito está conformada por 80 familias.

Con respecto a los servicios con los que cuenta la zona donde se asienta la comunidad El Nogalito se menciona una escuela primaria. Hay problemas de distancia para el acceso a la educación de los niños.

En cuanto al tema salud, la atención se ve afectada por distancias y acceso. Existe en la zona un Centro de Atención Primaria de la Salud.

5.4.1. Breve reseña histórica.

En particular antecedentes escritos sobre la historia de la comunidad de Nogalito aún no se conocen. Esta comunidad hace poco tiempo tuvo su proceso de relevamiento territorial, y la información que se recaba en estos procedimientos es confidencial hasta tanto las carpetas técnicas pasan un proceso de aprobación y debate. Una vez que esto ocurre la información ya es pública.

La información a los efectos de la presente investigación fue solicitada al equipo técnico del ETO, quienes sugirieron elevar el pedido a las autoridades comunitarias.

Se solicitó al Cacique de la comunidad el acceso a dicha información y acordó en compartirla, pero al momento esa información aún no está disponible.

5.4.2. Organización actual de la comunidad.

La comunidad indígena de Nogalito se organiza con el modo tradicional de Cacicazgo. Tiene un Cacique elegido por asamblea por única vez y cuyo mandato es vitalicio. La comunidad tiene secretarios y tesorero. La zona de influencia de la comunidad de Nogalito es Nogalito y Potrero de las Tablas, donde por cuestiones de distancia no hay demasiada interacción.

En relación a proyectos implementados, los responsables de los mismos son elegidos democráticamente y su mandato dura lo que el proyecto demande. La comunidad de Nogalito participa activamente de la UNPDT.

5.4.3. Principales actividades.

Las actividades que llevan adelante las familias comuneras de Nogalito, son principalmente la agricultura, en particular la producción de hortalizas. Los productores indígenas realizan cultivos tales como: maíz, arveja, chaucha, zapallos y en algunos casos lechuga y papa.

La comercialización se realizaba a través de un intermediario, superando este sistema durante los años 2007-2008, periodo donde se implementó el proyecto Producción de hortalizas y semillas rescatando prácticas ancestrales de cultivo, en donde los productores pudieron organizarse para vender directamente su producción de arvejas en el mercado local. Según informan los entrevistados, esta situación finalizó cuando finalizó el proyecto.

Otras actividades que realizan son la cría de animales en pequeña escala, y artesanías. Como ya se mencionó anteriormente también se implementó el programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, donde participa un grupo de jóvenes indígenas.

En cuanto a los proyectos implementados en la zona se pueden mencionar un proyecto agrícola, proyecto de acceso a la justicia, agua de bebida y casa comunitaria indígena.

5.4.4. Problemática identificada.

La comunidad indígena de Nogalito a nivel interno se encuentra dividida y esto perjudica acciones conjuntas que se podrían tomar en defensa de los derechos del pueblo.

Además, esta comunidad tiene conflictos por cuestiones territoriales con terceros, de los cuales uno es un sacerdote, y otros son empresarios. Este dato no es menor ya que la cuestión religiosa entró en la comunidad pero de manera muy conflictiva y agudizando diferencias entre los propios comuneros.

Otra situación problemática es que las familias viven muy distantes unas de otras con lo que los encuentros muchas veces se ven afectados.

Cuestiones de acceso y comunicación también se convierten en problemas a la hora de vender productos, trasladar elementos, fletes para obra, entre otros.

5.5. Análisis de entrevistas.

El análisis de las entrevistas se organizó a partir de tres ejes:

- i. Proyectos priorizados.
- ii. Efectos en los aspectos socio-organizacionales.
- iii. Efecto en los aspectos económico-productivos.

En cuanto a la primera línea de abordaje (proyectos priorizados), los resultados se enuncian en la Tabla N° 7

Tabla N° 7: Proyectos priorizados

Entrevistado	Proyecto/s priorizado/s	Organismo que financia
JCQ	1. Sistemas de agua 2. Pozos 3. Artesanos	Proyecto DCI-Banco Mundial (BM)-Ministerio Desarrollo Social de Nación.(MDS)
LCQ	1. DCI 2. Los dos pozos de agua 3. Toma	DCI-BM-MDS
SCV	1. Vacas 2. Agua para riego	INAI PROSAP
NCV	1. Vacas para quesos	INAI
SCN	1. Casa de la comunidad 2. Agua potable 3. Agricultura	INAI
BPT	1. Gran Toma 2. Hilado	INAI Comuna Choromoro
DDQ	1. Agua Quilmes 2. Pozo del Paso 3. Comunicación Kakán	DCI-BM-MDS
CCN	1. Agua potable 2. Casa comunitaria 3. Mejoramiento de vivienda	INAI Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)
CCV	1. Vacas 2. Agua para consumo 3. Microcréditos	INAI MDS
JRI	1. Agua 2. Casa de la comunidad 3. Toma	DCI-MDS
CCQ	1. Casa de la comunidad 2. Pozos de agua 3. Canalizaciones	DCI-MDS
VLR	1. Proyecto reforma de la constitución. 2. Relevamiento territorial 3. Toma vuelta	DCI-MDS Estado Nacional a través de la ley 26160.
DIN	1. Construcción de represas 2. Estructuras de techos	INAI
TLD	1. Estudio de títulos	DCI-MDS
TCV	1. Mejoramiento genético en bovinos en Casas Viejas	INAI
JPQ	1. Fortalecimiento institucional. Fotografías	INAI-Universidad Nacional de Tucumán (UNT)
MRM	1. Microcréditos	MDS

La Tabla precedente surge de las respuestas de todas las categorías de entrevistados (informantes calificados, técnicos o promotores de proyectos y comuneros/as).

Para los **técnicos o promotores de proyectos**, la priorización fue la siguiente:

Estudio de títulos; cuyos destinatarios fueron los miembros de la comunidad india Quilmes. El proyecto proponía un estudio histórico y jurídico de los títulos de propiedad de la zona.

Mejoramiento de los Bovinos autóctonos por incorporación de una raza de aptitud lechera, implementado en la comunidad indígena de Casas Viejas. Se buscaba la mejora en la calidad de leche para la elaboración de quesos y quesillos, a partir de la incorporación genética de la raza Jersey.

Fortalecimiento institucional y fotografía, para la comunidad india Quilmes. Se realizaba un rescate de la historia del pueblo Quilmes, a través de recopilación bibliográfica, rescate de relatos y registros fotográficos de la zona.

Microcréditos. Este proyecto es administrado por la comunidad india Quilmes, y los destinatarios de dichos créditos son todas las comunidades (Anexo N° 22).

Proyecto DCI (Desarrollo de comunidades indígenas). Comunidad India Quilmes y comunidad Indígena de Amaicha del Valle.

Gran Torna. Proyecto implementado por la comunidad indígena de Potrero Rodeo Grande, cuyos beneficiarios fueron las comunidades del Valle de Tafi y comunidades del Valle de Trancas. Consiste en replicar la experiencia del proyecto Torna con más destinatarios. Es un fondo rotatorio para semillas, herramientas y animales que se devuelve solidariamente.

Acceso a la justicia. Destinatarios: comunidades indígenas del Valle de Trancas. Este proyecto acerca la cuestión jurídica y legal hacia los pueblos originarios, realizando talleres de capacitación con abogados especialistas en el tema.

Radios VHF. Todas las comunidades indígenas fueron destinatarias de este proyecto. Se instalaron equipos de radio en cada comunidad.

Para los **informantes calificados** surgen como prioritarios los proyectos asociados al acceso y uso del recurso agua para distintas comunidades, algunos de los cuales son:

Agua para la comunidad de Quilmes. Proyecto de entubamiento de agua en Rincón de Quilmes, Quilmes Centro y Quilmes Bajo. Financiado por el Proyecto DCI.

También se destacan los pozos de agua subterránea **Pozo de agua comunidad de El Paso y Anjuana**, dos comunidades de base pertenecientes a la comunidad india Quilmes, implementado a través del Proyecto DCI.

Agua para riego y agua para consumo, proyecto destinado para la comunidad indígena Casas Viejas. Al momento de la redacción del presente trabajo éste es un proyecto no finalizado.

Construcción y mejoramiento de represas, citado como prioridad por un técnico del INAI a nivel nacional cuyos principales destinatarios son las comunidades de la zona

del Chaco Salteño. Si bien no hay relación entre esas comunidades y las citadas en el presente estudio, esta priorización muestra una necesidad compartida como lo es el recurso del agua.

En segundo término aparecen los proyectos de las conocidas salas de usos múltiples

Casa de la CIQ. Casa construida con fondos del proyecto DCI. En la actualidad es sede de reuniones y acopia la producción artesanal de la zona, con fines comerciales. Los principales destinatarios son los comuneros de la Comunidad India Quilmes.

Casa Comunitaria Indígena. Comunidad indígena Nogalito. Proyecto aún en ejecución.

Aparecen luego proyectos de radio como el de **Comunicación Kakán**, que incluyen radios VHF para todas las comunidades indígenas.

Como proyectos netamente productivos, aparece nuevamente el **proyecto de mejoramiento bovino** para la comunidad indígena de Casas Viejas.

Proyecto Torna Amaicha-Quilmes. Proyecto de créditos en insumos para agricultores y artesanos con devolución solidaria a través de un fondo rotatorio. Fondos provenientes del Proyecto DCI.

También aparecen como importantes los **proyectos de animales** en algunas comunidades del Valle de Trancas y proyectos de tejido.

Finalmente y de marcada importancia, algunos informantes calificados expresan como importantes los proyectos de fortalecimiento como ser relevamiento territorial y participación comunitaria (proyecto para la reforma de la Constitución Provincial llevado adelante por la Unión de la Nación de los Pueblos Diaguitas y numerosas organizaciones de la sociedad civil).

Los **pobladores indígenas** de las distintas comunidades bajo estudio, priorizan de manera general proyectos de carácter productivo. Asimismo manifiestan en primer lugar de importancia a los **proyectos de agua**, ya sea para consumo o riego como el Proyecto de Agua de Quilmes; Pozos de El Paso y de Anjuana, pertenecientes a la comunidad india Quilmas y varios proyectos de riego.

En segundo orden de prioridad aparece el proyecto de **mejoramiento bovino** de la comunidad indígena de Casas Viejas. Le sigue el proyecto **Torna Amaicha-Quilmes** y en la misma línea el proyecto **Gran Torna** de las comunidades de Valle de Tafi y Valle de Trancas.

Además se les da importancia a los proyectos de artesanías implementados en Amaicha y Quilmes a través del Proyecto DCI, y con menor frecuencia aparecen enunciados proyectos de hilado y tejedurías en la zona de Trancas y de casas comunitarias.

Es interesante mencionar, que en la voz de los pobladores indígenas, hombres y mujeres, los proyectos priorizados guardan estrecha relación con cuestiones de índole productivas. Sobre esto se reflexionará en capítulo posterior.

5.6. Efectos en los aspectos socio-organizacionales.

En cuanto a los efectos en los aspectos socio-organizacionales los resultados se presentan organizados en tres ejes:

- a. Cambio en la organización de productores a partir de implementación de proyectos.
- b. Participación de las mujeres en los proyectos.
- c. Participación de los jóvenes en los proyectos.

a. Cambio en la organización de productores a partir de implementación de proyectos.

A nivel general, los entrevistados expresan que la organización de las comunidades se vio fortalecida a partir de la implementación y ejecución de estos proyectos. Un concreto ejemplo de esto es la conformación en el año 2005 de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita que nuclea a prácticamente todas las comunidades indígenas tucumanas.

En relación a lo antes mencionado, desde el ámbito socio-organizativo en el año 2005 se crea la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), como una instancia de representación de las comunidades indígenas de Salta, Tucumán y Catamarca. No existen antecedentes en la zona de este tipo de organizaciones. Esta institución apunta a fortalecer las organizaciones, unificando las problemáticas y solidarizarse con las diferentes comunidades. Las acciones se van adecuando a las demandas de las comunidades que participan de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (UNPDT).

La UNPDT está integrada por las siguientes comunidades

Casas Viejas
Mala-Mala
Indio Colalao
Solco Yampa
Quilmes
El Mollar
La Angostura
Anfama
Chuschagasta
Amaicha
Valle de Tafi
Potrero Rodeo Grande
Chasquivil

Cada una de las comunidades indígenas que se agrupan en la UNPDT, participan en la voz de sus Caciques y un delegado por comunidad. El mandato de las autoridades de la UNPDT se define en el seno de cada comunidad integrante.

Un punto relevante a considerar es el proceso de toma de decisiones. En la UNPDT se realizan por consenso. Esto último es sustantivo ya que esta modalidad se opone a la

acostumbrada en las comunidades indígenas, en donde las mismas se toman por decisión de Cacique o por votación en los consejos delegados.

La organización en Tucumán en el año 2012 alcanzó la personería de organizaciones N° 521 otorgada por el RENOPI. Está en discusión aún si esto último es de importancia política como una cuestión de reivindicación y reconocimiento o si es un acto jurídico que reviste cierta importancia.

Los objetivos que se propone esta institución según sus manifiestos son: “...*unificar esfuerzos de las distintas comunidades en su trabajo por la revalorización cultural, la organización, el crecimiento socioeconómico, el acceso a los servicios básicos y fundamentalmente la defensa de nuestros espacios territoriales y bienes naturales y culturales.*”

En función de estos objetivos, la UNPDT viene realizando reuniones conjuntamente con organismos del Estado provincial y nacional, con referentes indígenas como ser los representantes del CPI, referentes del área salud y otros, con el fin de poner en discusión las demandas más sentidas de los pueblos originarios que integran dicha institución.

A nivel particular, y especificando en cada grupo de entrevistados se obtienen los resultados que a continuación se presentan

Los **promotores y técnicos** de proyectos expresan que el fortalecimiento de la organización a partir de un proyecto, depende de los integrantes de cada comunidad. Esta visión subjetiva se ejemplifica en que un proyecto pueda trascender los aspectos políticos, tal es el caso del proyecto de mejoramiento bovino en la comunidad indígena de Casas Viejas, el cual se pudo sostener durante dos gestiones de cacicazgo.

Según informa quien fuera responsable del mencionado proyecto, los Caciques de ambas gestiones han apoyado todas las decisiones, han acompañado la compra de insumos y han asistido y apoyado las capacitaciones realizadas en el marco del proyecto. En todo este proceso la cuestión organizacional de la comunidad, según los entrevistados, se vio fortalecida por ser ellos los que han ejecutado su propio proyecto y han llevado adelante tareas de gestión y administración como ser constantes rendiciones de cuentas.

Además se menciona que en la temática indígena, entiéndase por esto luchas reivindicativas, gestión y obtención de recursos, implementación de proyectos, entre otros, la comunidad india Quilmes y la de Amaicha fueron pioneras y eso las fortaleció. Continúa informando este entrevistado, que todo este camino permitió que también estas comunidades indígenas hayan podido acompañar procesos organizativos de otras comunidades. En este contexto vuelve a surgir como importante la UNPD, donde hubo contacto con las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Salta.

Estas acciones de vínculos solidarios las llevaban adelante únicamente los Caciques. Ahora la tarea es compartida en la organización (UNPD).

Por otro lado, uno de los entrevistados menciona que la implementación de proyectos de desarrollo alteró la organización de las comunidades originarias. Afirma que la

implementación de proyectos en las comunidades indígenas sacó a la luz cuestiones que se relacionan con el territorio. Esto generó dos posturas encontradas: una a la que el entrevistado llama “principistas”, que hace referencia a un grupo de personas que por la sola existencia de los derechos indígenas quieren inmediata aplicación (“... *vamos por todo*”); y otra que observa la situación real por la que atraviesan las comunidades originarias, y van buscando logros y reivindicaciones por parte (... *paso a paso*”).

En el caso particular de la comunidad india Quilmes, se expresa que al ser una comunidad demasiado grande, existen muchas miradas acerca del valor que se le da al territorio, y esto generaría conflictos. Existen pujas de poder y conflictos generados hacia el interior de las comunidades, como así también con terceros y con el Estado.

Algunos casos concretos que ilustran el antes mencionado, tienen a la comunidad india Quilmes de protagonista. Conflictos entre la comunidad y empresarios vitivinícolas que pretenden instalar bodegas en la zona, conflictos entre comunidad y particulares, como así también crisis de poder entre dirigentes indígenas... todo esto además repercute en la vinculación del Estado provincial y los pueblos originarios.

Otra de las respuestas, tiene que ver específicamente con el efecto en la cuestión organizativa a partir de la implementación por parte de la comunidad india Quilmes del proyecto de microcréditos. Según informa el entrevistado, no hubo procesos organizativos importantes, en tanto el 90 % de los créditos otorgados son para emprendimientos de tipo individual.

Lo que destaca como importante es que los pocos grupos que se han formado a partir de microcréditos se han podido insertar en las políticas de economía social propuestas por el MDS. Tal es el caso de Marcas Colectivas. Se define a la marca colectiva como un signo distintivo común para identificar productos elaborados y/o servicios prestados por agrupamientos de emprendedores de la Economía Social (MDS, 2013). Representa los valores del trabajo asociativo, identidades locales, métodos productivos comunes y estándares compartidos para cada uno de los productos.

Según se informa oficialmente, el principal objetivo de esta propuesta es fortalecer la producción y la comercialización de los emprendimientos otorgándoles valor agregado y mayor visibilidad, además de garantizar su calidad. Los grupos son apoyados por equipos del área jurídica que orientan la cuestión formal y legal de la figura de marcas colectivas. Además, se realizan capacitaciones sobre comercio justo, valor agregado entre otros temas. En este marco, las comunidades indígenas beneficiadas por microcréditos, tuvieron la posibilidad de participar de ferias en distintos lugares del país donde pueden mostrar sus productos (Cinquegrani, 2012).

Siguiendo la presentación de resultados en cuanto a los efectos de los aspectos socio-organizacionales, **los comuneros indígenas** destinatarios de programas expresan

“...el saber las necesidades que tiene cada comunidad, genera organización, ya que las familias que más tienen les dan a las que menos tienen, entonces así todos nos beneficiamos y eso hace que la comunidad esté siempre así, organizada...” (BPT).

En esta misma línea, otro entrevistado expresa que la implementación de proyectos en las comunidades genera organización y prácticas en administración y gestión de

recursos. Esto último se considera altamente positivo para los referentes indígenas, ya que se adquiere destreza en estas prácticas. Cita al proyecto Gran Torna para ilustrar lo antes mencionado, ya que fue el primer proyecto de gran envergadura ejecutado en la zona y la comunidad encargada de su implementación (Potrero Rodeo Grande) se fortaleció a partir de su puesta en marcha

Otras expresiones avanzan hacia determinar rubros de actividades en los cuales los comuneros se organizan de manera diferente.

“... mire... hay distintas áreas, en el tema de los artesanos ellos están más unidos y se agrupan para vender, pero en el tema agrícola no, cada uno se ha ido por su lado, el que hace pimiento lo hace y vende como puede, el que hace comino también...”.
(LCQ).

Este mismo entrevistado, deja entrever que en su comunidad de base los productores son desunidos y afirma que si se algunos se uniesen sería posible un camino más seguro.

Se destaca que en la comunidad de base de El Paso perteneciente a la comunidad india Quilmes, el proyecto de pozo de agua allí ejecutado ha generado un buen impacto

“... estos tipos lo están sosteniendo allá en El Paso, por la necesidad de salvar el pozo se han unido y ahí se nota, hay mucha superficie cultiva ahí...” (LCQ).

También se dice que a partir de los proyectos, las comunidades están más organizadas, porque la gente empezó a trabajar mejor, y eso fue bien visto, por otras familias comuneras que luego se sumaron.

Otro comunero manifiesta que en general su comunidad trabaja toda junta, pero la implementación de los proyectos les ha permitido una mayor proyección y vinculación con otros importantes actores de la zona

“... estamos todos siempre juntos y tenemos que trabajar así...justamente ayer estuvimos hablando con el INTA y el intendente y quiere que nos unamos para hacer un frigorífico en Tañi ya que entre Tañi y las Casas viejas tenemos muchas cabezas de ganado vacuno...” (SCV).

En menor número se expresa que no hubo cambios significativos en la organización, que la comunidad se organiza según las tareas que tiene (por ejemplo turnos de riego, servicios de arado, etc.). Otras opiniones menos concentradas expresan no saber acerca de esto.

b. Participación de las mujeres en los proyectos.

La pregunta fue realizada tanto a los técnicos y promotores de proyectos como a los comuneros/as indígenas. Este dato es importante ya que en el apartado correspondiente a la discusión de este trabajo, se podrá reflexionar sobre las diferentes concepciones que se tienen en relación al género.

Según afirman los promotores y/o técnicos entrevistados, la participación de las mujeres es importante en la gesta e implementación de proyectos de desarrollo. En particular, los resultados son los siguientes

- Se pone de manifiesto que al ser la mujer la que realiza numerosas tareas durante la implementación de proyectos, debería estar presente en la toma de decisiones, y actualmente no lo está en un 100%.
- En algunas comunidades, se informa que “la participación en las reuniones es escasa”, y asisten cuando deben representar al jefe de hogar.
- “La participación de las mujeres está cambiando”; el entrevistado expresa que con el tiempo hubo mayor apertura en las comunidades indígenas para las cuestiones de género. Un ejemplo de lo antes mencionado es que en la actualidad ocupan cargos de delgadas de base y Caciques.
- También se expresa que las mujeres por su lucha diaria “son figuras claves en la implementación de proyectos”.
- En el caso particular del proyecto microcréditos, se menciona que las “mujeres son activas tomadoras de créditos”. Si bien se mencionó anteriormente que hay alrededor de un 10% de proyectos grupales, éstos son conformados por mujeres.
- Se relaciona mucho a la mujer con proyectos de artesanías, en general de tejidos y de producción de dulces. Al parecer en esos rubros es donde la mujer parece aportar conocimientos.
- Otra opinión le otorga a la mujer la función de facilitadora en relación a los proyectos. Es decir la mujer pone la casa para que funcione allí la oficina del proyecto, o presta su casa para la instalación de las radios.
- Por otro lado, se opina que las mujeres tal vez están ausentes en las tareas previas a la implementación de proyectos, pero durante los proyectos son siempre las activas.

Un testimonio que ilustra lo antes mencionado lo da un entrevistado de Casas Viejas

“...en el tema de las vacas... las mujeres no han estado en la organización, pero en la práctica es la mujer la que saca la leche, hace los quesos y los vende... o sea sobresale la mujer” (NCV)

Expresiones tales como “*las mujeres somos más metetes que los hombres, siempre sobresalimos, las mujeres son más que los hombres siempre...*” (JCQ) manifiestan una clara presencia de las mujeres en la cuestión del desarrollo.

Otras opiniones ubican a la mujer en un lugar distinto a lo antes mencionado

“las mujeres también están participando, digamos que necesitamos la presencia de las mujeres para varios aspectos, hacer comida, hacer lo típico de las mujeres...” (SCN)

c. Participación de los jóvenes en los proyectos.

En la Tabla N° 8 se presenta una síntesis de los resultados de las entrevistas rescatando opiniones vinculadas a la participación de los jóvenes en las comunidades.

Tabla N° 8: Síntesis de entrevistas sobre participación de los jóvenes

Entrevistado	¿Cómo es la participación de los jóvenes en los proyectos?	¿Por qué?
TLD	No recuerda	-
TCV	Nula, no han participado	Porque no eran beneficiarios directos, eran sus padres.
JPQ	Antes era más activa	Se estaba en plena organización de la comunidad
MRM	Baja	No cancelan sus créditos. Migran.
DCP	En algunos temas participan	En tareas agrícolas, porque trabajan en lechuga.
JCQ	En ciertas tareas	Porque la familia trabaja el campo toda junta.
LCQ	Muy poco	O por los padres o por la tontera de la juventud
SCV	Deberían participar pero se van	No sé, el futuro es de ellos...
NCV	Algunos participan	En tareas pesadas con las vacas nos ayudan, tienen el vigor de ser jóvenes y nos ayudan
SCN	Si en programa jóvenes por más y mejor trabajo	Porque están beneficiándose
BPT	Muy poco	Tienen vergüenza
LIC	Baja	Tienen vergüenza de su identidad

En este apartado, las respuestas en general son similares. Los entrevistados coinciden que la participación de los jóvenes en la formulación e implementación de proyectos es por lo general escasa.

En el caso del proyecto sobre microcréditos, un entrevistado manifiesta que sí han accedido los jóvenes a los créditos, pero no los cancelan, o demoran en la paga o abandonan la tarea por irse en busca de trabajo hacia otros lugares.

También se hace mención que cuando se trata de proyectos que tocan temas sensibles, los jóvenes no participan. Los jóvenes colaboran en tareas que demandan fuerza, como lo es el arreo de animales y ofertas de productos. Estas dos últimas cuestiones son acciones que si bien están relacionadas con el proyecto, no los involucran en él de forma directa.

Además se pone de manifiesto que en algunas comunidades, los jóvenes tienen problemas de identidad, sienten vergüenza de pertenecer o reconocerse originarios y esto los aleja de las cuestiones generales de la organización.

También se escuchan expresiones de anhelo ante la ausencia de los jóvenes en los trabajos agrícolas

“...ellos tendrían que hacer las cosas, ese es el futuro de ellos, porque si hoy en día tienen solo séptimo u octavo grado no van a hacer nada, no va a haber trabajo...”
(SCV).

Sin embargo y en particular en Trancas, se menciona que los jóvenes participaron en tareas agrícolas, es decir, durante la ejecución del proyecto Gran Torna, en Tañi.

En el caso particular de la comunidad indígena Nogalito, se expresa que a partir de la implementación del programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, el cual está beneficiando alrededor de veinte jóvenes, los mismos están colaborando con la comunidad; y están generando el hecho de que otros jóvenes se acerquen a participar.

5.7. Efectos en los aspectos económico-productivos.

Los resultados obtenidos se presentarán segmentando los mismos en aspectos productivos y aspectos económicos para permitir un mejor análisis.

En los aspectos productivos los datos que se presentan surgen de los siguientes ejes

- a. Comentarios y datos generales de interés.
- b. Incremento de rendimiento a partir de la implementación de proyectos.
- c. Cambio o reemplazo de especies vegetales por la existencia del proyecto.
- d. Mejora en la tecnología a partir del proyecto.

En los aspectos económicos se tomaron en cuenta comentarios generales y ventas efectivizadas a partir de la implementación de los diferentes proyectos.

5.7.1. Aspectos productivos.

En el caso particular del proyecto denominado Mejoramiento de los Bovinos autóctonos por incorporación de una raza de aptitud lechera, formulado e implementado en la comunidad indígena de Casas Viejas, muestran algunas respuestas que ilustran la cuestión productiva.

Las 22 familias beneficiarias del proyecto llevaron adelante muchas acciones que se vinculan directamente con la cuestión productiva

- i. Los pobladores realizaron las siguientes actividades: manejo de maquinaria, fertilización de suelo, siembra e implantación de pasturas; manejo de los cultivos; manejo de ganado vacuno.
- ii. Se realizaron capacitaciones sobre diversos temas, entre ellos buenas prácticas en la preparación de quesos y sanidad animal.
- iii. La comunidad adquirió semillas, segadora para alfalfa, moladora desgranadora y 30 vacas Jersey.
- iv. Se implantaron 12 ha de pasturas.
- v. Se volvieron sembrar cucurbitáceas y maíz, que era una práctica olvidada.
- vi. Una cuestión muy interesante es que la nueva raza, produce aproximadamente 10 veces más leche que la vaca criolla. Esto no solo es un importante dato productivo sino que se vincula directamente con la cuestión económica.

“los rendimientos...si aumentaron totalmente porque una vaca es como que da 10 veces más que la vaca criolla. Allí hay muchas vacas que no se cruzan con otras vacas que no sean de su raza o sea la misma raza, es una “raza degenerada” como dice el ingeniero entonces cada una de esas vaquitas dan medio litro o un litro, muy poquito...” (NCV)

En la comunidad indígena Nogalito, en la cuestión productiva se referencia al proyecto Producción de hortalizas y semillas, rescatando técnicas ancestrales de cultivo. El proyecto tomó el nombre de Producción de hortalizas y obtención de semillas utilizando técnicas ancestrales de cultivos. Una síntesis del proyecto se presenta a continuación

“...El Proyecto, tiene como objetivo principal, afianzar los lazos solidarios y construir la organización entre comuneros, mediante el trabajo comunitario que exige la tarea propuesta de autoproducción de alimentos. La actividad propuesta, se basa fundamentalmente en la producción de hortalizas en pequeña escala, en un marco familiar, con dos destinos concretos y uno futuro:

- Autoconsumo.*
- Producción de semillas y acopio comunitario de las mismas, generando de esta forma un rescate de simientes locales y no locales, apuntando a la sostenibilidad del proyecto.*
- A futuro se contempla la posibilidad de comercialización de productos, en forma comunitaria.*

Las familias beneficiarias, poseen alrededor de 3 hectáreas productivas (con posibilidades de expansión), de las cuales destinarán: 1 para la producción de semillas, 2 para autoconsumo.

Para cumplir con las metas planteadas, la Comunidad realizará asambleas y reuniones de discusión para definir los siguientes aspectos:

- Organización de tareas previas.*
- Designación de responsable del proyecto.*
- Confección de reglamento interno para establecer pautas de organización.*
- Organización de tareas comunitarias: Acondicionamiento de galpón; confección de invernadero; fabricación de conservas; organización de acopio de producción; cosecha; tareas de cosecha de semillas; venta; capacitaciones; entre otras.*

Básicamente el objetivo general que se propuso fue producir hortalizas, aplicando técnicas ancestrales de cultivo, para el autoconsumo y la venta. En forma paralela fomentar la autoproducción de alimentos, realizando comunitariamente producción e intercambio de semillas entre comuneros. Este proceso será acompañado por capacitaciones específicas” (INAI, 2007).

Como efecto en la dimensión productiva, se menciona que se incrementó la superficie de cultivo, aunque las especies no se modificaron y sigue siendo la arveja el principal cultivo de la zona. Además, el proyecto trajo herramientas de tipo manual, lo cual es importante y necesario ya que Nogalito es una comunidad donde la maquinaria grande no puede ingresar por el tipo de paisaje montañoso.

“... en cierta forma no sé si llamarlo tecnología porque el trabajo que se hace allá es a mano; arado de mano, arado tirado por bueyes... es zona montañosa y no se puede arar de otra forma. Lo que ha mejorado digamos es la compra de herramientas...”
(SCN)

En este proyecto se preveían dos cuestiones comunitarias. La primera era destinar unas hectáreas para uso comunitario con el fin de producir semillas para la comunidad, y la segunda, comprar una yunta de bueyes para llevar delante de manera organizada la tarea de arado.

Ninguna de las dos se pudo realizar; el tema del espacio comunitario no fue priorizado ni organizado, y con respecto a la yunta de bueyes, se dijo que solo una familia no tenía animales y se les iba a prestar, por lo tanto se destinaría ese monto para otras prioridades.

También se pone de manifiesto que la gente pudo sembrar en sus tierras ya que el proyecto les otorgó las simientes para ello

“... si han logrado aumentar la superficie de cultivo... y no es lo mismo comprar la materia prima que el Estado, a través del Derecho y convenios den y hagan proyectos...”(SCN)

En la comunidad india Quilmes, existen diversas opiniones en cuanto a lo productivo. Las mismas se expresan de manera general, y no particularizando en algún proyecto.

Según las opiniones de los entrevistados, el proyecto que más impactó en las comunidades de base de Amaicha y en este caso particular de Quilmes es el proyecto Torna.

El fondo inicial del proyecto Torna fue de \$ 54.000 destinado a un fondo rotatorio que se continuó sosteniendo durante varios años. Se manifiesta que fue el proyecto Torna el que permitió la implementación del proyecto microcréditos en el año 2008 y hoy, según expresan los responsables, ya van cerca de los 2 millones de pesos de créditos otorgados.

“...con el proyecto de Torna vuelta el primer efecto es que hay un montón de gente que estaba fuera del sistema productivo y que se incorpora al sistema productivo, eso implicó una mejora en la condición socio económica por decirlo así, de esas familias; se han reintroducido semillas que estaban perdidas en el Valle Calchaquí, de maíz, las semillas de trigo peruano...” (JRI)

Se dice que se observó mayor producción en aquellas comunidades de base que pudieron resolver la limitante del agua. Tal es el caso de El Paso, paraje donde se implementó un proyecto de perforación de pozo para aprovechamiento de aguas profundas, y a partir de su uso, los productores comenzaron a sembrar pasturas. La especie más sembrada en el marco de proyectos productivos en Quilmes es la alfalfa.

También se menciona que en comunidades de base donde se implementaron proyectos, aumentaron los rendimientos pero esto fue mientras duró el proyecto, luego se dejó de producir.

“... pero cuánto dura el alfalfa, tres o cuatro años, bueno, en ese periodo se ha visto un avance y es como que ha vuelto a caer, como que ha vuelto a caer, se acabó la semilla y no se sembró más. Eso es lo que pasó.” (LCQ)

La comunidad de Quilmes, tuvo un proyecto de maquinarias implementado para Amaicha y para Quilmes. Uno de los entrevistados manifiesta que si bien esto es un aporte a la tecnología, no está bien administrado y esto genera conflictos internos a la comunidad

“si... se mejoró la tecnología con la maquinaria, pero hay un tema administrativo, y la comunidad no está controlando eso... no sabemos qué rinde y no la estamos usando...” (LCQ).

En cuanto a proyectos que son productivos pero tienen fuerte índole cultural, como el caso Torna Vuelta Amaicha-Quilmes, se valorizan aspectos tales como el rescate de técnicas y prácticas ancestrales; recuperación de semillas olvidadas; revalorización del intercambio y reciprocidad entre comuneros.

En cuanto a aspectos netamente productivos, se destaca la importancia de las capacitaciones en temas productivos, ya que de esta manera también se puede ingresar en el circuito de comercialización produciendo cultivos de calidad y rentable. Tal es el caso del pimiento para pimentón y el nogal.

Finalizando con la comunidad india Quilmes, se manifiesta en una de las entrevistas que las propuestas de desarrollo productivo pueden ser innumerables y muy necesarias, pero ante estas alternativas de desarrollo, las comunidades se enfrentan a dos cuestiones importantes

- i. El agua como elemento fundamental en la cuestión agrícola faltante en todo el Valle Calchaquí.
- ii. Para proyectos de desarrollo se requiere dinero, otorgado en general como créditos u otros financiamientos. En este punto surgen los problemas jurídicos de la tenencia de tierra.

“... ellos lo plantearon: nosotros podemos tener mucha motivación para hacer cualquier tipo de desarrollo estratégico de nuestra comunidad pero siempre nos enfrentamos con dos conflictos, uno que es la barrera natural y física que es el agua...y segundo el problema jurídico de quién es la tierra, quién es dueño...” (TLD)

Por todo esto, según manifiesta un entrevistado, los programas de desarrollo deben estar acompañados por documentación que legitimen las tierras y de esta manera se eviten rechazos, demoras y otros conflictos. Ejemplo de esto es la existencia de la cédula real, documento que sirvió para que se puedan implementar muchos proyectos en la comunidad de Amaicha y Quilmes.

En este marco y en relación al agua como factor limitante de la zona, los entrevistados mencionan como un recurso necesario para el éxito en la implementación de proyectos.

“Los cambios en la parte productiva se ven en las parcelas de las familias que pudieron acceder al agua...” (JCQ)

En la zona de Trancas, los proyectos fueron óptimos productivamente en las zonas donde existe disponibilidad de tierra y agua. En el caso del proyecto Gran Torna, la producción aumentó en la zona de Valle de Tafi.

El proyecto Gran Torna es una réplica del proyecto Torna Amaicha Quilmes, pero con los destinatarios del mismo son las comunidades indígenas del Valle de Trancas y Valle de Tafi. También existe un fondo rotatorio, a través del cual se le otorga créditos en semillas, herramientas y elementos para artesanías los cuales realizan una solidaria devolución retroalimentando dicho crédito para nuevos emprendedora. La comunidad que administró este fue la comunidad indígena Potrero Rodeo Grande.

5.7.2. Aspectos económicos.

Para abordar el efecto desde la dimensión económica, se tomó en cuenta la variable ventas, exploradas durante las entrevistas.

“¿cambiaron las ventas a partir del proyecto?; ¿aumentaron?; ¿disminuyeron?”

En la comunidad de Casas Viejas se manifiesta que las familias están iniciando la venta a pequeña escala de sus quesos, producto del proyecto de mejoramiento de ganado vacuno.

“estamos hablando de 2 o 3 quesos por día, allá arriba son 90 pesos de entrada a la familia, y es un dinero interesante con un costo bastante bajo...” (TCV)

Además, el proyecto tiene la posibilidad de efectuar el engorde de las crías (novillos), para poder aprovechar la carne para su venta.

La trashumancia también se menciona como una práctica que favorecerá la economía de las familias. En la zona de los valles los animales efectúan trashumancia. En invierno en los cerros y en verano bajan al llano. Es justamente en verano donde sacan mayor cantidad de leche y hay turismo para la venta. Esto es un factor clave a tener en cuenta para la organización y a partir de eso mejora en las economías de las familias.

Para poder cuantificar el alcance de la mejora genética realizada en el marco del mencionado proyecto, se deberá esperar descendencia y se podrán obtener crías más productivas, en carne y leche

“... también tienen los animales de ellos, y cuando vengan las crías de los toros más lecheros ese animalito cruza va a ser totalmente productivo, va a tener fácil cinco litros más de leche, tirando un cálculo que te representa medio queso por día... y eso tiene impacto...” (TCV)

Otros entrevistados de la comunidad indígena de Casas Viejas, manifiestan que si bien las familias beneficiarias del proyecto de vacunos producen quesos, actualmente las ventas no son importantes, pero se cree que con el tiempo las familias podrán destacarse en calidad del producto y mejorar sus ingresos.

En cuanto al proyecto sobre microcréditos, los datos son generales. El número de beneficiarios del proyecto es de 450 personas en todos los rubros. Según expresa un entrevistado, los efectos económicos inmediatos se observan en los proyectos comerciales, ya que pueden cancelar más rápido sus cuotas.

Los proyectos de naturaleza agrícola, por los tiempos que tiene el cultivo, se demoran un poco más, y están sujetos también a las cuestiones climáticas.

A modo general existe una mora en la cancelación de deudas de un 20 a 25%.

También se afirma que difícilmente existan mejoras económicas mientras la cuestión territorial no se resuelva, como así también la problemática del agua.

“... los efectos son distintos según las actividades. Donde más rápido se ve el efecto es en los comerciales en donde el emprendedor al tener un ritmo de giro del dinero puede cancelar más rápido y comienza a pensar en créditos mayores... En cuanto a lo productivo... depende del clima, y de las fluctuaciones de precios... eso nos hace repensar los montos de los créditos...” (MRM).

En la comunidad de Tolombón, si bien hay venta por disponer de semillas, aún existe la figura del intermediario, personaje que compra a precios muy bajos la producción de los comuneros y la revende en el mercado local. Esto se da generalmente en zonas de difícil acceso y donde los productores no disponen de otro medio de transporte.

Particularmente en la cuestión agrícola en el marco del proyecto Gran Torna, una de las actividades que se realiza en el Valle de Tañi y que genera ingresos es la verdura de hoja.

“... en el Valle de Tañi, la producción aumentó, las verduras y la capacidad de trabajo. En Trancas se vio lo mismo pero con animales... y bueno, el Gran Torna le dio una mano para vivir de eso...” (DCP)

En la comunidad india Quilmes, base de Anjuana durante la ejecución de los proyectos sí hubo ventas de pasturas y de las semillas que se producían. En la actualidad, a cinco años de la implementación del proyecto, se compra semilla en el mercado y las ventas han caído

“...en ese momento hubo mejoras en las ventas, se cosechó semillas, no sé por qué no lo siguen haciendo, han cosechado semillas de cebada y trigo pero hoy volvieron a donde estaban compran en el mercado...” (LCQ)

Los entrevistados en Quilmes manifiestan que las ventas han mejorado solo en aquellas parcelas que pudieron instalar sistemas de riego. En este contexto, si bien existió en Quilmes un importante proyecto de entubamiento de agua, que consistió en dirigir el agua de la toma del río, ubicada en la montaña, hacia cada parcela de las familias comuneras, algunos productores aún no tienen el sistema instalado.

En el caso particular de la vid, la misma pudo venderse conforme a la situación particular de cada uno de los productores

“...por ejemplo en mi casa no tengo riego en todos los rastros pero si en las viñas, y ahí se ha mejorado mucho la venta, porque nosotros hemos puesto agüita por goteo y ha mejorado bastante...” (JCQ)

La comunidad de base de El Paso tiene una particular situación en cuanto a la economía de las familias. Esto se debe al efectivo uso del sistema de pozo de agua que allí fue construido.

“...Hay zonas como en el caso del Paso donde se siembran pasturas, se bajan los animales del cerro jóvenes y se les da la terminación hoy actualmente. Un animal que hoy se vende a 1700 pesos, 1900 pesos más de 2000 pesos el animal, ese animal en el año 2003 era muy difícil venderlo por falta de kilaje, por presentación, por un montón de cuestiones, y normalmente los precios por aquellos años eran de 300 pesos..”. (JRI)

En la comunidad de Nogalito, los productores pudieron organizarse para llevar su producción hacia el mercado local y vender todos juntos. De esta manera se evitó el intermediario y se mejoraron los precios de las diferentes hortalizas que se producen en la zona (arveja, chaucha, zapallos, entre otras). Esto se logró mientras el proyecto estuvo activo (2007-2008)

“... si mejoraron las ventas mientras ha durado el proyecto. Se han mejorado mucho las ventas porque se traía al mercado y no teníamos que caer en las manos de los que van a comprar a esas zonas, que te pagan dos pesos y ellos se hacen la plata con la gente de allá” (SCN)

5.8. El Estado como actor clave en los procesos.

En cuanto a las manifestaciones relevadas en relación al Estado como figura clave en los procesos organizacionales y de fortalecimiento de las comunidades, se lo abordó desde tres dimensiones

- a. Rol del Estado en materia de pueblos originarios.
- b. Aspectos positivos y negativos del Estado en esta temática durante el periodo 2000-2010.
- c. Propuestas de políticas públicas futuras.

En relación al primer punto es necesario destacar desde qué rol se lo piensa al Estado. En este marco y en base a la pregunta “¿cuál debería ser el rol del Estado en materia de pueblos originarios?” se expresan diversas opiniones donde se pueden diferenciar tres roles para su posterior análisis. Éstos son políticas públicas; derecho y territorio. Lo antes mencionado sin duda gira en torno a la idea de “la presencia del Estado en la cuestión indígena”.

El primer rol que se le atribuye al Estado es en relación a las políticas públicas ya sea como institución responsable de las mismas como así también como generador de políticas específicas y concretas. Algunas afirmaciones de los informantes calificados así lo expresan

“...el rol del Estado deberá ser el de generar sostener y fomentar las políticas públicas...”

“... que escuche los pedidos de las comunidades...”

“... que haya presencia del Estado en cuestiones básicas como ser cuestiones de agua...”

“...generar proyectos más largos...”

“... que se tome en cuenta la problemática de las comunidades indígenas como ser la vivienda...”

“Tomar en cuenta el tema Educación...”

“...el Estado debe estar más presente... tener más participación...”

Además de lo que se escucha o entiende como una demanda que se le hace al Estado en relación a las políticas públicas, también se reconoce una apertura en los últimos años y se expresa que es necesario afianzar la apertura existente y continuar con el acompañamiento que el Estado hace a las comunidades indígenas como por ejemplo con algunas leyes como la ley N° 26.160 (Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras).

El segundo rol que aparece en las opiniones volcadas por los informantes calificados es el del Estado como gestor de derechos, ya sea garante de los mismos, dador de derechos y/o, hacedor de ellos.

Con base a lo anteriormente mencionado aparecen acepciones tales como

“...el rol del Estado debería ser el de hacer efectivo los derechos de los pueblos originarios...; que el Estado provincial y nacional haga cumplir los derechos indígenas...”

“...el rol debe ser el de protector de las Comunidades indígenas...”

“el Estado debe ser garante de Derechos para los Pueblos Indígenas...”

En el año 2004, y como un hecho de apertura concreta del Estado, se da la creación del Consejo de Participación Indígena (CPI) que se proponía en la ley 23.302. Dicha ley en su artículo quinto establece que dentro del INAI se deberá conformar el Consejo de Coordinación, el mismo deberá estar constituido por representantes de los Ministerios Nacionales, representantes de las provincias que adhieran a la ley “y representantes elegidos por las comunidades aborígenes cuyo número, requisitos y procedimientos electivos determinará la reglamentación...”. En el caso de Tucumán su adhesión es la ley N° 5778.

En este marco, el INAI, a través de la resolución N° 151/2004 y su modificatoria N°301/2004, alentó la formación del Consejo de Participación Indígena (CPI) para, de alguna manera, garantizar la representatividad de los pueblos originarios.

Las funciones del CPI, según se enuncia desde material de difusión del INAI son (INAI 2006: 10-12)

- a) Asegurar la participación indígena en el Consejo de Coordinación y determinar los mecanismos de designación de sus representantes.
- b) Funciones señaladas en el artículo 7° del decreto 155/89 reglamentario de la ley 23302. Dicho decreto enuncia las funciones del consejo de coordinación indígena, órgano propuesto por la mencionada ley pero que se tradujo en el CPI.

Las funciones son¹:

ARTÍCULO 7.- El Consejo de Coordinación tendrá las siguientes funciones:

- a) Realizar los estudios necesarios acerca de la situación de las comunidades indígenas e individualizar los problemas que las afectan.
- b) Proponer al Presidente un orden de prioridades para la solución de los problemas que hayan identificado, los medios y acciones para que ellos sean resueltos y objetivos y programas de actividades para el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS a mediano y largo plazo.
- c) Estudiar planes de adjudicación y cuando corresponda expropiación de tierras con los alcances de la Ley N. 23.302 y elaborar proyectos de explotación a través de las comisiones ad-hoc y la participación de las comunidades específicas a fin de elevarlos al Presidente.
- d) Analizar, aprobar o proponer modificaciones al programa de actividades y presupuesto.
- e) Tomar conocimiento y aprobar el análisis de la situación de las comunidades indígenas del país, el informe de las actividades del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS y la evaluación de sus resultados. Aprobar la gestión económico-financiera previamente a su elevación al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL.
- f) Estudiar los mecanismos a sugerir a las comunidades indígenas para que puedan elegir a sus representantes conforme a lo establecido en el artículo 3, inciso II) como asimismo los procedimientos para que las comunidades logren una organización formal a los fines previstos en la Ley N. 23.302 y la presente reglamentación.
- g) Supervisar y dictaminar sobre el funcionamiento del REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS acerca del cual informarán al Presidente.
- h) Dictaminar acerca de los programas de adjudicación de tierras que se efectúen.
- i) Dictaminar sobre cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración.

La principal idea que enuncia el INAI de este Consejo de Participación Indígena es garantizar la intervención de las comunidades indígenas en el diseño de las políticas públicas y de esta manera adecuar las políticas a las demandas reales que tienen los pueblos originarios.

Para la conformación del CPI, se llevaron adelante numerosas asambleas, cerca de cuarenta, a lo largo de todo el país con el fin de informar, abrir el diálogo y elegir los

¹ Fuente: <http://www.digesto.catamarca.gov.ar/cod/Leyes19/5138/a1mod.html>

representantes de dicho consejo. Esta representación cuenta con un titular y un suplente por provincia y por pueblo.

Posterior a estas asambleas, se llevaron a cabo reuniones por región (NOA, NEA y centro Patagonia) en conjunto con los representantes electos del CPI, con el objetivo de discutir, decidir y evaluar las funciones de los delegados.

A un año de la promulgación del decreto, se eligieron democráticamente los representantes del Consejo de Participación Indígena. CPI.

Para el caso de Tucumán, el CPI está conformado por un representante titular y uno suplente por el Pueblo Diaguita y un titular y uno suplente por el Pueblo Lule.

Es importante resaltar que el CPI Tucumán, tienen una destacada presencia en las cuestiones de índole comunitarias ya sea de gestión como de acción. Estos representantes, cumplen funciones de articulación con otros organismos como así también llevan las voces por las diferentes comunidades indígenas.

En los casos de desalojos, los representantes del CPI cumplieron y cumplen un rol fundamental en cuanto a acompañamiento, denuncias y difusión de estos hechos.

Muy vinculado al tema de los derechos está la cuestión territorial enunciada como en permanente conflicto. Este será el tercer rol que los informantes calificados, otorgan al Estado. Algunas de las opiniones que los mismos expresan en relación al territorio se enuncian a continuación

“Acciones y actos concretos para la recuperación de tierras...”

“...Que el Estado ayude a las comunidades...”

“... el Estado debe tener un mayor diálogo con las comunidades...”

En cuanto al segundo punto de análisis en relación al Estado, se hace foco en lo que se consideran acciones o puntos positivos y negativos que el Estado en la figura de los distintos poderes, las instituciones y otros organismos llevaron adelante en el período en estudio. En este marco, los entrevistados expresan lo que sintéticamente se presenta en la Tabla N° 9

Tabla N° 9: Síntesis de aspectos positivos y negativos vinculados al rol del Estado

ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS NEGATIVOS
Marco jurídico existente.	Clientelismo político. El Estado se hace visible en época de elecciones.
Leyes nacionales de reparación histórica, ejemplos, ley N° 26.160, Ley del 12 de octubre como día de reflexión	Lentitud en aplicación de derechos
	No toma el rol que debería tener en cuanto a la tierra, y a nivel provincial continúan los desalojos.
Todo a nivel nacional y principalmente hay mayor accesibilidad.	Minas a cielo abierto.
Permite que la gente vive mejor	Centralización del ministerio de desarrollo social (política de escritorio)
El Estado escucha a través de inversiones.	Falta de atención especial con respecto a proyectos.
Existencia de Relaciones de las comunidades indígenas con el Estado	El Estado no aborda integralmente ciertos problemas claves para las comunidades indígenas como ser el de territorio
Respuestas rápidas en ciertas demandas puntuales de los Pueblos Originarios	Graves violaciones a los DDHH de los pueblos.
Acuerdos de co-manejo por ejemplo en Patagonia	No hay compromiso de organizaciones indígenas en la lucha.
A nivel provincial la existencia de defensoría del pueblo, secretaría DDHH, recuperación ciudad sagrada.	Tiempos, son muy largos y se pierden proyectos.
Mayor participación en los aspectos comunitarios	A nivel provincial no se avanza desde la reforma de la CP del 2006.

A modo general se puede observar que aspectos positivos y negativos en torno al Estado se relacionan. En cuanto a lo positivo, existe un claro marco legal que tiene que ver con reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos originarios, pero lo negativo deja entrever las falencias de la no aplicación de las leyes existentes. Esto último se traduce en los graves conflictos por los que aún atraviesan los pueblos originarios. Estos aspectos serán retomados en el capítulo de discusión de resultados.

El tercer punto de análisis acerca del Estado en materia de pueblos originarios, son las propuestas que los entrevistados hacen en relación a políticas públicas que mejorarían o se adecuarían de forma más eficiente a la temática de comunidades indígenas, algunas de las cuales a continuación se presentan

- i. Aplicación de derechos, que se cumplan las leyes existentes.
- ii. Políticas en relación a la cultura.
- iii. Políticas en relación a educación (algo más amplio que Educación Intercultural Bilingüe EIB).
- iv. Propuestas abarcativas. Priorizar las necesidades más sentidas de la comunidad.
- v. Derecho a la consulta.
- vi. Entrega de títulos comunitarios de tierra.

- vii. Proyectos vía directa, es decir desde el Ministerio de Desarrollo Social hacia las comunidades indígenas, sin intermediarios.
- viii. Vinculación entre organismos del Estado y las diferentes comunidades indígenas.
- ix. Continuar con las políticas actuales. Por ejemplo Centro de Referencia (CDR).
- x. Que las comunidades originarias sean iguales a otros grupos, con iguales derechos.
- xi. Terminación y aplicación de leyes existentes, por ejemplo ley N° 23302.
- xii. Trabajar en los distintos niveles nacional, provincial y comunal.
- xiii. Procesos interculturales en las comunidades indígenas.
- xiv. Involucrar más actores de la sociedad.
- xv. Agua potable.
- xvi. Planes para combatir la desnutrición en las comunidades ejemplo: comunidades Wichis de la provincia de Salta)
- xvii. Ante la existencia de políticas públicas se propone mayor participación en los diversos programas ya en funcionamiento.
- xviii. Proyectos de viviendas en la zona de la comunidad Indio Colalao, Valle de Choromoro.
- xix. Promoción de talleres para rescatar conocimientos ancestrales de los pobladores.
- xx. Confección de material de lectura con los conocimientos ancestrales de la zona para los niños de las escuelas de los valles.
- xxi. Fomentar la realización de los estudios de títulos.
- xxii. Acompañar la lucha jurídica de un territorio y que esta aporte a la lucha integral de una Comunidad Indígena.
- xxiii. Los proyectos deben surgir a partir de la consolidación de las comunidades indígenas.
- xxiv. Generar estrategias desde diferentes planos, no solamente acciones.
- xxv. En microcréditos se debe tomar en cuenta la cancelación de deudas con producción, aspecto no contemplado por el programa.
- xxvi. Mejorar cuestiones de comercialización, por ejemplo en turismo o artesanías, ventas a través de internet y posnet.
- xxvii. Programas de vivienda a través de la modalidad de microcréditos.
- xxviii. Proyectos que permitan avanzar en tecnología.
- xxix. Promover las denominaciones de origen para los productos elaborados en las comunidades indígenas.
- xxx. Promover las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
- xxxi. Abordar la problemática del agua.
- xxxii. Para los proyectos de “quesos” generar queserías comunitarias.

La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, llevó en el año 2011 al Poder Ejecutivo Provincial tres propuestas, ante las cuales el entonces Gobernador de la provincia José Jorge Alperovich se comprometió a tratar derivando las mismas a algunas dependencias del Estado.

Dichas propuestas son

- i. Generar un organismo provincial que trabaje la temática indígena en general.
- ii. Que se transfieran tierras fiscales a las comunidades indígenas.

- iii. Que exista un reconocimiento sobre lo que ya está escrito por ejemplo los Derechos de los Pueblos Originarios.

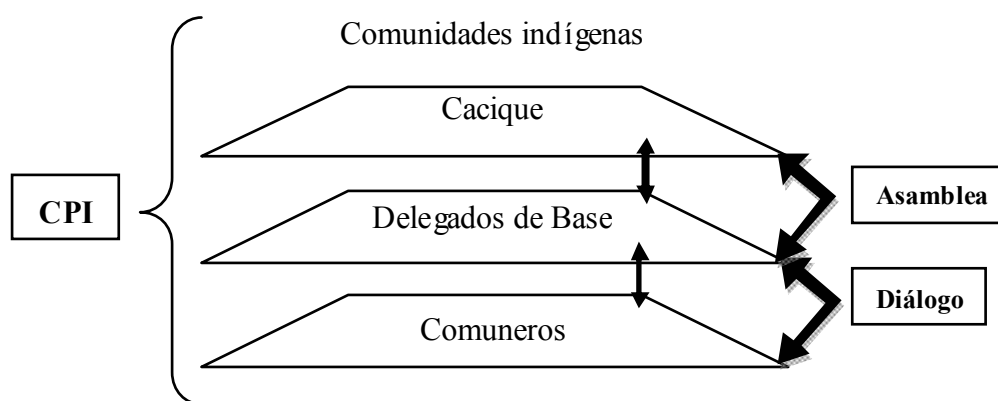
Cabe destacar que al momento del desarrollo de este estudio no hay respuesta ante el mencionado petitorio.

6. Discusión.

Los resultados obtenidos reflejan un escenario complejo donde existen diversos actores con su problemática particular y que en la mayoría de los casos poseen objetivos diferentes. Sin embargo estos actores interactúan entre si y en muchos casos se necesitan unos de otros.

En cuanto a las organizaciones indígenas, la dinámica de relaciones puede ser representada de la siguiente manera

Figura N° 2: Dinámica de relaciones

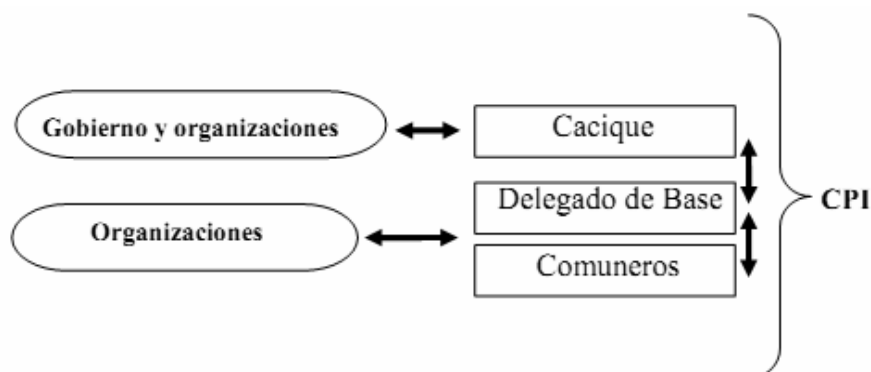


Fuente: elaboración propia

Los comuneros dialogan con sus representantes, los delegados de cada base que conforma la comunidad toda. Estos a su vez, llevan la voz de sus representados al Cacique a través de las reuniones de consejo de delegados. Las asambleas se realizan con toda la comunidad. En este marco, el CPI aparece como una figura de representación clave para las comunidades en general, y también tienen presencia en particular.

A su vez, los vínculos entre comunidades indígenas y Estado se puede representar como

Figura N° 3: Diagrama de vínculos entre comunidades y Estado



Fuente: elaboración propia

El Estado necesita a los pueblos indígenas por ser potenciales votantes; las comunidades indígenas necesitan del Estado para la obtención de recursos; las organizaciones participan activamente de todos los procesos de las comunidades indígenas por ser su objeto de estudio o el fin de su organización; los empresarios necesitan tanto del Estado como de las comunidades para llevar adelante sus emprendimientos en territorios en pugna y así sucesivamente.

En este marco, la discusión se centra en dos ejes

- i. La implementación de proyectos, los efectos que éstos producen y la relación de que entablan las comunidades indígenas con la política pública.
- ii. El Estado y su relación con las comunidades indígenas

En cuanto al primer eje, y el financiamiento de proyectos, en las entrevistas realizadas a las comunidades indígenas, se percibe en ciertos casos, una confusión en la figura del Estado y otros organismos que dependen del mismo y que financian proyectos, por ejemplo

“...desde el gobierno... eh... no recuerdo qué financiaron pero desde el INAI si, varios proyectos fueron...” (BCT)

Durante el periodo en estudio (2000-2010), el Estado Nacional se hace presente en la temática indígena a través de programas y proyectos de diversos rubros. Proyectos de desarrollo agrícola, ganadero; proyectos de fortalecimiento cultural; proyectos educativos, entre otros.

En cuanto a la priorización de proyectos, **las comunidades indígenas** eligen a los proyectos de desarrollo. Esto puede deberse a que los mismos intentan resolver situaciones ante una limitante, que resueltas, significarían una mejora en los ingresos o en la actividad productiva. Un ejemplo de esto es el caso del agua en la zona de los Valles Calchaquíes tucumanos.

Es así como las comunidades indígenas priorizan a los proyectos de canalización de agua; perforación de pozos para el aprovechamiento de aguas profundas; y proyectos de riego y agua de consumo.

Muy ligado a los proyectos de agua, aparecen los proyectos productivos, donde el objetivo general es mejorar la calidad de vida de la población, a través del apoyo a los productores con créditos en semillas, servicio de maquinaria y herramientas. Es el caso del proyecto Torna Vuelta para Amaicha-Quilmes, y años después el proyecto Gran Torna para las comunidades del Valle de Tafí y Valle de Trancas.

El Proyecto DCI aparece en las voces de las comunidades indígenas, particularmente en Quilmes como el proyecto “primero”, el cual generó la implementación de múltiples proyectos y además obligó a las comunidades a reunirse para debatir y organizarse. Se lo caracteriza como un proyecto de gran envergadura.

Además según expresan algunos entrevistados, el Proyecto DCI permitió la formación de los dirigentes en tareas de gestión y administración.

Cabe destacar que la formulación, implementación y ejecución de proyectos de desarrollo en las zonas donde habitan comunidades indígenas, sin un acompañamiento permanente o apoyatura en la cuestión organizacional no garantiza que dicho proyecto se sostenga a través del tiempo.

Un ejemplo que ilustra lo antes mencionado y que se expresa en las palabras de comuneros de Quilmes, son los dos pozos de agua ejecutados por el Proyecto DCI (Desarrollo de Comunidades Indígenas) en la comunidad de base de Anjuana y en la comunidad de base de El Paso. En Anjuana el pozo de aguas subterráneas está sin uso, por diversos motivos que expresan los comuneros como ser falta de recursos, agua de mala calidad, fallas de la empresa constructora, mala elección del lugar, pero no existe una autocrítica hacia la organización interna de la comunidad de base de Anjuana; no se expresa que las 22 familias beneficiarias entraron en conflicto interno por la designación del sitio donde sería construido el pozo, y por falta de organización interna para el funcionamiento del mismo, tal como ocurrió con la construcción de un canal que mejoraría el recorrido del agua, desde el DCI se garantizó el material pero la mano de obra que debía ser comunitaria no se llevó a cabo.

Por otro lado, el pozo de agua de la comunidad de base de El Paso que se construyó en la misma época, y con igual financiamiento está en pleno funcionamiento, mejorando los productores comuneros sus cultivos, rendimientos y ventas en la zona.

La priorización que hacen los técnicos y promotores se relaciona directamente con aquellos proyectos de los cuales fueron parte, ya sea en el área de dirección como así también de formulación e implementación. Esto resulta interesante ya que los mismos conocen de manera acabada los proyectos que mencionan como relevantes en las entrevistas.

Los informantes calificados, expresan en coincidencia con las comunidades indígenas que los proyectos de mayor impacto son aquellos que tienen que ver con la provisión de agua, ya sea para bebida como así también para riego. También ubican la cuestión del recurso hídrico como una de las limitantes principales para procesos de desarrollo, por lo que se fomenta la formulación de los mismos.

Se menciona como relevante al PACI (Programa de Acompañamiento a Comunidades Indígenas), cuyo objetivo es que cada comunidad pueda discutir y realizar un diagnóstico para de esta manera priorizar problemas y escribir futuros proyectos. El financiamiento recibido era para traslados, computadoras, elementos de logística, refrigerios y otras cuestiones que garanticen que las reuniones y/o encuentros se lleven a cabo.

El resultado del PACI son los diagnósticos y varias carpetas técnicas que hoy las comunidades utilizan para presentar ante organismos a los fines de solucionar las problemáticas identificadas. Esta propuesta es interesante ya que estaría representando un primer paso que cualquier organización tendría que atravesar para clarificar el panorama de situación de su zona.

Según los informes de avance del PACI se identifican obstáculos tales como demoras y tiempos dispares en las diversas comunidades para priorizar sus problemas. Este punto debería ser revisado ya que las demoras hacia adentro de la comunidad, se traducen

lógicamente en demoras burocráticas en organismos decisores de financiamientos. Esto repercute directamente en la población generando desconfianza y debilitamiento de la organización.

Según la palabra de los informantes, esta metodología y dinámica se intentará seguir aplicándola en otras provincias como Catamarca, ya que los resultados fueron óptimos en cuanto a identificación participativa de necesidades.

Se entiende que las comunidades han manifestado sus demandas sentidas y los informantes calificados han respondido coherentemente ante dichas necesidades, apoyando y fomentando la formulación de proyectos acordes a la realidad de estos pueblos.

A su vez, es interesante destacar que también aparecen como importantes aquellos proyectos de fortalecimiento y rescate identitario. Tal es el caso de la recuperación de la ciudad sagrada de Quilmes, la ley N° 26.160 que trajo aparejado el relevamiento territorial y participación comunitaria. En este sentido, también expresan los informantes calificados que los proyectos de salas de usos múltiples o casas comunitarias son importantes. Esto es debido a la necesidad que los informantes observan que las comunidades indígenas tienen de democratizar sus espacios a través de asambleas, reuniones y otros debates.

Finalmente, se destaca la importancia que se le da a la comunicación entre comunidades ya sea a través de proyectos de radio, como así también al fomento y promoción de la UNPD.

En cuanto a los efectos en los aspectos económicos-productivos, a nivel general y a partir de las entrevistas, se pone de manifiesto que tanto las cuestiones productivas como las económicas en las comunidades indígenas se modificaron a partir de la implementación de proyectos. Si se debe explicitar cómo se ha modificado la cuestión económica-productiva, se hace necesario diferenciar a las comunidades indígenas y a los proyectos que allí se han ejecutado.

En el caso de la comunidad indígena de Casas Viejas, se cita como relevante al proyecto Mejoramiento de los bovinos autóctonos por incorporación de una raza de aptitud lechera. Es un proyecto que tiene la característica de tener elementos tangibles por la existencia de las vacas Jersey, lo que permite a los productores apropiarse rápidamente del mismo. Dicho proyecto fue considerado por los entrevistados como de alto impacto en la zona, y de un efecto positivo desde el punto de vista productivo.

Según los entrevistados relacionados a este proyecto; la cuestión productiva, ha tenido un importante alcance debido a incrementos de los rendimientos de leche a partir de la incorporación de vacas de raza lechera (Jersey); aumento de superficie cultivada de pasturas y hortalizas; adquisición y uso de maquinaria e implementos nuevos; recuperación y fertilización del suelo. Asimismo las capacitaciones han dejado capacidad instalada.

En la cuestión económica, los beneficiarios del proyecto podrán vender la carne del ternero. En relación a los quesos, si bien las ventas comenzaron a gestarse, la producción es aún baja, y se requieren mejoras en cuanto a la calidad del producto y

organización. De todas maneras, los entrevistados manifiestan que es muy pronto para evaluar el alcance del mencionado proyecto.

A su vez, existe una proyección a futuro leída en las entrevistas, que es la construcción de una quesería comunitaria, lo que permitiría una mejora en la calidad de la producción quesera.

En el caso de la comunidad indígena de Nogalito, y en relación a la cuestión económica y productiva, se menciona el único proyecto ejecutado en este rubro que, es el proyecto denominado por los entrevistados como “agrícola”. El nombre del proyecto es Producción de hortalizas y semillas rescatando técnicas ancestrales de cultivo.

Este proyecto mejoró las condiciones productivas de las familias participantes, las cuales adquirieron herramientas y semillas de buena calidad. Un aspecto interesante fue el fondo rotatorio que se preveía en el proyecto, el cual dejó de funcionar una vez culminado el proyecto.

Con respecto, al conocimiento hortícola, los comuneros de Nogalito ya lo tenían adquirido debido a que se dedican al cultivo de arvejas desde hace mucho tiempo.

Lo interesante de este proyecto es que permitió una excelente mejora en las ventas, ya que los pobladores pudieron vender su producción directamente en el mercado local (Mercofrut). Sin embargo, este auge solo duró mientras permaneció en ejecución el proyecto, lo mismo ocurrió con las semillas.

Causante de esto, podrían ser cuestiones de representatividad y de organización interna de la comunidad en general. Otro motivo podría deberse a que este proyecto fue el primero en implementarse en la comunidad indígena, por lo que las cuestiones de gestión, administración y organización no estaban tan pulidas como en otros pueblos. Habrá que realizar un seguimiento de estos aspectos en los próximos proyectos ejecutados.

De todas formas, se deja entrever que los proyectos a ejecutarse y/o ejecutados en la comunidad, muchas veces pierden importancia a la par de los graves conflictos de territorio que se suceden en la zona.

En cuanto a las comunidades indígenas del Valle de Trancas, las respuestas de los entrevistados son coincidentes con la realidad por la que atraviesan las mismas. Esta realidad alude a que las comunidades del Valle de Trancas son de organización y conformación bastante reciente, por lo que no hay un elevado número de proyectos implementados en la zona. Para una mejor lectura de los resultados se puntualizarán ejemplos de comunidades indígenas de la zona.

Por ejemplo, la comunidad indígena Indio Colalao aún no tiene proyectos de desarrollo ejecutados en la zona; sí poseen ideas de proyectos y algunas discusiones acerca de priorización de rubros y otros temas pero aún no han conseguido el financiamiento de ningún proyecto.

Entrevistados de la comunidad indígena Pueblo de Tolombón manifiestan que en la zona de Gonzalo no hay suficiente tierra para cultivo, pero sí en las zonas bajas donde

se pudo implementar el proyecto denominado por ellos “de semillas” pero que en realidad se trata del proyecto Gran Torna.

No se incrementó la tecnología, no se modificaron en su totalidad las especies cultivadas, por lo que efectos en la cuestión productiva parece no ser demasiado importantes.

La misma suerte corren las ventas debido a que en la zona de Trancas y Choromoro, por cuestiones de acceso, distancias y recursos, los pocos productores entregan su cosecha al intermediario, quien no paga lo que realmente vale sus productos.

La comunidad indígena de Potrero de Rodeo Grande, cita como relevante al proyecto Gran Torna, implementado en la zona. Cabe destacar que al igual que Nogalito es el único proyecto del rubro agropecuario ejecutado.

Algunos entrevistados manifiestan que a partir de la implementación del proyecto, los productores caprinos de la zona mejoraron su situación, pero destacan que principalmente estos proyectos mejoran a la comunidad de manera general ya que significa un entrenamiento en la gestión de recursos. Siguiendo esta línea, y en la voz del comunero de Potrero de Rodeo Grande, se observa que proyectos de fortalecimiento e identidad tienen un mayor impacto en la zona.

En relación a las ventas aún se ven dificultadas por cuestiones de acceso y comunicación.

Con respecto a la otras comunidades del Valle de Trancas (comunidad indígena de Chuschagasta; Chasquivil, Hualinchay, y Mala-Mala), no hay datos que muestren efectos en la situación productiva y económica de dichas comunidades.

En resumen, las comunidades del Valle de Trancas, aún no tienen un gran impacto en su cuestión productiva ya que los proyectos de desarrollo aún son escasos, y las evaluaciones también lo son. De todos modos las organizaciones avanzan en sus priorización de necesidades, muchas de las cuales se aproximan a la cuestión de la mejora económico-productiva de la zona.

La comunidad india Quilmes, es por lejos, la comunidad indígena donde más proyectos se han implementado. Como se mencionó anteriormente, es el Proyecto DCI el que marca un antes y un después en el desarrollo de la zona.

Los proyectos propuestos en el DCI van más allá de la obtención de ganancias inmediatas. Esto es porque desde la UML Diaguita-Calchaquí se escucharon las demandas más sentidas de los comuneros indígenas. El primer proyecto fue el Torna Vuelta, cuyo efecto fue visiblemente notable en la zona.

Posterior a este proyecto, se priorizaron otros de diferente índole haciendo hincapié en aquellos que mejorarían la situación hídrica de la zona, con la seguridad de que a partir de esto las cuestiones agrícolas y pecuarias mejorarían.

Para la lectura de estos resultados se tomarán algunos proyectos como el Torna Vuelta, y algunos proyectos de agua. El programa de microcréditos será citado en los aspectos

socio-organizacionales de las comunidades, por tener un visible mayor impacto en este rubro que en lo productivo.

En el caso del proyecto Torna Vuelta, el efecto en la parte productiva fue importante, debido a que el número de destinatarios se incrementó rápidamente y las familias pudieron adquirir semillas, herramientas y servicios de arado devolviendo esto de diversas maneras a un fondo rotatorio que retroalimentaría estos procesos.

Las semillas incorporadas fueron cebada blanca y negra, avena, trigo peruano, maíz amarillo socorro, maíz diente de caballo, pimiento para pimentón y alfalfa. Las herramientas fueron de tipo manual, tales como palas de punta, azadas, rastrillos, entre otros.

Es importante destacar que el Torna fue un proyecto modelo de tipo individual, el cual inspiró al Gran Torna.

Si bien la superficie de cultivo aumentó, la limitante constante era y es el agua de riego. Algunos entrevistados Quilmeños, manifiestan avances y logros en la parte productiva solo fueron posibles en aquellas parcelas que pudieron acceder al riego. Si bien se diseñaron y ejecutaron numerosos proyectos de agua en la zona, por cuestiones de organización interna, muchos de estos proyectos quedaron truncos. Tal es el caso de Anjuana y la finalización del entubamiento de Quilmes.

En el caso de Anjuana, un entrevistado habla de la desilusión generada por sus pares a partir del abandono del proyecto Torna como así también el del pozo de agua. Menciona que durante cuatro o cinco años, la comunidad de Anjuana, sembró y vendió sus propias semillas, generando excedentes.

Todo esto fue próspero mientras duró el proyecto, luego la gente fue abandonando la tarea y sembrando en menor cantidad. Actualmente ya no produce sus propias semillas, sino que las compra en mercados, lo que atenta contra la economía familiar.

Lo antes mencionado, hace pensar una vez más en cuestiones organizativas y conflictivas hacia el interior de las comunidades. La comunidad de base Anjuana siempre tuvo conflictos de poderes y disparidades entre sus integrantes, lo que hace suponer que esto haya incidido en el sostenimiento de los proyectos en cuestión.

También se menciona como proyecto exitoso por su impacto en la economía familiar y en el avance agrícola, al pozo de la comunidad de base de El Paso, perteneciente a la comunidad india Quilmes.

Cabe destacar que en esta comunidad de base, no hay mayores conflictos internos, y si los hubiere se dialoga e intenta buscar el consenso. No es menor mencionar que allí residen el Cacique Don Chaile y el dirigente Delfín Gerónimo, con un altísimo grado de representatividad y respeto hacia el interior de Quilmes.

Por último es interesante mencionar que algunos datos muestran la grave situación por la que atraviesan estos pueblos indígenas en relación a los proyectos de desarrollo. Esto hace referencia a que las propuestas de desarrollo caen en saco roto por lo siguiente: primero la gravísima limitante hídricas aún vigente en la zona y que requiere altísimas

inversiones en sistemas de riego y bebida. Lo segundo alude a algo aún más complicado de solucionar que son las cuestiones territoriales de la zona. Es sabido que para la implementación de proyectos de desarrollo se requieren fuertes inversiones, las mismas también necesitan figuras legales que acrediten la pertenencia de las tierras, aspecto que aún hoy las comunidades litigan y luchan. Asimismo, los conflictos territoriales inciden directamente cuando se piensan proyectos de desarrollo.

Casos que ilustran lo antes mencionado fue el caso del pozo de Anjuana que una vez perforado y en estado probatorio, los terratenientes del lugar pretendieron desalojar a la gente del terreno donde el pozo estaba ubicado. Además, presentaron denuncias ante la Dirección de Irrigación de la provincia de Tucumán para impedir el uso y explotación del mismo, aspectos que luego de gestiones y tiempo se solucionaron.

Otro caso, fue cuando el Proyecto DCI formuló el proyecto de la Casa de la comunidad india Quilmes. Al principio hubo conflictos internos por el lugar que ocuparía la casa. Esto generó juicios entre comuneros. Posteriormente este proyecto fue aprobado y financiado a nivel nacional e internacional y también hubo conflictos con el gobierno provincial.

El mencionado asesinato de Don Javier Chocobar, dirigente de la comunidad indígena de Chuschagasta también es un ejemplo de conflictos desatados a partir de la posible utilización del territorio; lo son también los violentos desalojos dirigidos a la comunidad de base de Colalao del Valle, y así innumerables casos que hablan a las claras de importantes cuestiones no resueltas en torno a la tenencia de la tierra, en complicidad con la política de turno.

Vale decir que a la hora de evaluar y analizar efectos en cuestiones económico-productivas a partir de la implementación de proyectos, entran en juego numerosos aspectos como el de los tiempos, la organización interna, el acompañamiento, los conflictos territoriales y muchos otros que obligan a tener una mirada holística del tema desarrollo en pueblos indígenas.

En referencia a los efectos en los aspectos socio-organizacionales en pueblos indígenas, del análisis de los resultados se puede observar a nivel general que la implementación de proyectos en los pueblos indígenas, generaron cambios en la organización de las comunidades. Estas modificaciones tuvieron que ver con fortalecimientos, responsabilidades diferenciadas, conflictos internos, nuevas organizaciones de mayor representatividad, entre otros.

En relación a las nuevas organizaciones, el punto más relevante en el aspecto socio-organizativo es indudablemente la creación en el año 2005 de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UNPD).

Esta organización indígena de segundo grado, cuya personería jurídica fue otorgada en el año 2012, es única en la provincia y en la región del noroeste, y significa un espacio de representatividad y de debate importante, no solamente para las comunidades que forman parte de la UNPDT, sino para los organismos oficiales y la comunidad en general, con los cuales la UNPD está articulando en la actualidad.

Los entrevistados sugieren que esta institución se fue gestando por la existencia de proyectos que permitían espacios de discusión y reflexión entre los diferentes miembros de las comunidades, como así también a partir de luchas y procesos de reivindicación de derechos. Con el tiempo se fue consolidando más y siendo reconocida nacionalmente.

Pese a que también la UNPD tuvo conflictos entre sus miembros y con organizaciones que colaboraban con la institución, pudo salir de ese lugar de resistencia y defensiva que muchos integrantes pretendían hacer de la organización.

Es así, como la UNPDT, es hoy un espacio de debate y consenso que tiene visibilidad y decisión en cuestiones que atañan a la cuestión indígena en Tucumán.

Otro punto es el que manifiestan algunos técnicos de proyecto en relación a la pauta de análisis de los efectos socio organizativos de las comunidades. Se manifiesta que el fortalecimiento de la organización, entendida como la unión de los productores, dependerá de quienes conformen la comunidad en cuestión, ya que existen ejemplos donde los proyectos implementados unieron a los comuneros como así también los separaron.

Si bien esto podría resultar cierto ya que en grupos humanos de trabajo las individualidades despiertan conflictos, se prefiere pensar que la totalidad de proyectos de desarrollo deberá trascender las cuestiones personales y subjetivas y ajustarse concretamente a mitigar la dificultad para lo cual fue formulado, y tomar carácter comunitario y no individual.

En este marco toma relevancia la importancia que las autoridades comunitarias le dan a cada proyecto. Es muy importante que dichas autoridades acompañen procesos de organización en torno a los proyectos, ya que es un aporte al fortalecimiento general de la comunidad.

Un rasgo de importancia en la cuestión socio-organizacional está relacionado al manejo de recursos. La comunidad india Quilmes fue elegida para la administración del proyecto de microcréditos, y acompañada por un equipo técnico lleva adelante capacitaciones, selección de beneficiarios, otorgamiento de créditos, seguimiento de los emprendimientos, cobranzas, y todo lo que atañe a la actividad de administración y gestión del programa.

Este punto no es menor ya que es la única comunidad indígena del país que es ejecutora de microcréditos. Esta responsabilidad es otorgada por la práctica y experiencia que tiene Quilmes en procesos de administración de recursos. Se destaca que durante el Proyecto DCI, fue la comunidad india Quilmes quien administraba y repartía los fondos para Amaicha y para sí misma.

Es de destacar que si bien la lucha del pueblo Quilmes lo ha posicionado en estos espacios de decisión, también es un importante reconocimiento que un gobierno realiza con una comunidad indígena.

Continuando con la lectura de resultados, se observa que algunos entrevistados afirman que la implementación de proyectos repercutió negativamente hacia el interior de las

comunidades. Esto pudo deberse a que surgieron peleas y ambiciones de poder entre dirigentes, como así también resistencia y descreimiento entre las bases. Los entrevistados hacen referencia a Quilmes. Es lógico pensar que en una comunidad marcada por luchas históricas en cuanto a tenencia de tierra, los conflictos no demorarían en aparecer cuando un proyecto de desarrollo convertía un paisaje improductivo en tierras productivas y con disponibilidad de agua. Esto ocurrió particularmente en la comunidad india Quilmes con empresarios, particulares no indígenas y comuneros indígenas. Estos últimos no entraron en conflictos por el territorio, sino se dividieron por no aunar criterios en cuanto a la lucha que se desataba por estas cuestiones.

Lo antes mencionado es sin duda un punto débil de las organizaciones indígenas que juegan en contra frente a terceros con un poder político diferenciado.

Por todo esto, en la actualidad Quilmes atraviesa un proceso de crisis en torno a lo antes mencionado. Hubo intentos de destitución de autoridades, y conflictos internos. Sin embargo el caos sirvió esta vez para despertar la participación de los comuneros Quilmeños quienes reunidos en asamblea general, conjuntamente con dirigentes del UNPD; organizaciones y abogados llegaron a acuerdos y se puso fin a los conflictos.

Los comuneros indígenas manifiestan que los proyectos han permitido conocer qué es realmente lo que necesita cada comunidad y a partir de ahí solidarice entre todos. Este punto es interesante ya que no solo se está afianzando las cuestiones referidas a la organización, sino también se están rescatando valores ancestrales de los pueblos.

La existencia de proyectos genera la necesidad de articular con otros actores de la zona, para buscar ampliar el panorama de producción o campo de acción. Tal es el caso de vinculaciones que han establecido las comunidades indígenas con gobiernos locales, INTA, y otros.

Esto se asemeja a procesos de desarrollo territorial, donde se insta a la participación de todos los agentes locales para lograr acciones mayores y objetivos más eficientes.

Además han sido y son importantes porque permite la formación de recursos humanos en cuestiones administrativas. Esto dependerá de la organización de la cual se esté hablando debido a que algunas comunidades tienen problemas de representatividad, lo que se traduce en la no formación de promotores territoriales, la no delegación de tareas o la ausencia de semilleros de futuros dirigentes.

Otras voces de los productores indígenas expresan que la necesidad los ha unido, tal es el caso de los artesanos que se han aglutinado para mejorar las ventas, o los productores de El Paso que se han unido para producir, por la necesidad de pagar la hora de agua, y así sucesivamente.

Esto es coincidente con la realidad, principalmente por la ubicación de los pueblos indígenas. La geografía de estas comunidades dificulta procesos de activa comercialización o instalación de mercados que faciliten ubicar la producción artesanal o agrícola de los comuneros.

Ejemplos de estas situaciones hay muchos. Existe en la zona de los Valles Calchaquíes una cooperativa que recibía la producción de los productores, y les pagaba montos bajísimos y no lo hacía en tiempo y forma. Debido a esto, muchos productores preferirían tirar su producción ya que no alcanzaban a cubrir los costos. Otro ejemplo es lo que ocurría con la producción netamente artesanal; terceros desconocidos acudían a las casas de los artesanos y compraban a precios mínimos productos que seguramente venderían al exterior y tendrían un excelente precio.

Un punto interesante de revisar es la cuestión individual de los proyectos. Al parecer, y según los resultados obtenidos, la condición “individual” de los proyectos de desarrollo garantiza el alcance exitoso de los resultados propuestos en los proyectos en cuestión. Los aspectos comunitarios requieren procesos que a veces dificultan el cumplimiento de actividades u objetivos que se proponen en la letra de los proyectos.

Algunos ejemplos son:

- En el caso de microcréditos, el 90% de los créditos son de tipo individual; en el proyecto Torna Vuelta cada productor retiraba sus semillas y las devolvía en cada campaña; en Casas Viejas con el proyecto de mejoramiento bovino, cada familia tiene su vaca y le garantiza techo y comida, en la comunidad indígena de Nogalito las propuestas comunitarias de los proyectos no se lograron cumplimentar.
- El caso de los pozos de agua en Quilmes son proyectos de fuerte raigambre comunitaria, en una base está funcionando de manera óptima (El Paso) y en otra el pozo está en desuso (Anjuana).

Lejos de cuestionar las causas o motivos de cuestiones culturales visiblemente perdidas en estos pueblos, la individualidad es un punto interesante de discutir, ya que tal vez los proyectos no tengan que idealizar a las comunidades, sino más bien ser un aporte concreto hacia la viabilidad del mismo.

Además se consideran como necesarios los procesos de fortalecimiento previos en las comunidades en las que se van a implementar proyectos de índole comunitario.

Finalizando el análisis general de los aspectos socio-organizacionales, sería interesante debatir qué se entiende por organización, ya que hay respuestas que no sugieren ningún cambio en la organización, como otras que hablan de la unión, otras que desconocen acerca de esto y otras opiniones que enumeran tareas que requieren organización (por ejemplo riego, siembra). Sin embargo la multiplicidad de opiniones en este ítem, enriquece el presente trabajo.

El segundo punto de análisis en relación a la cuestión socio-organizacional es la participación de las mujeres en proyectos de desarrollo.

De manera general, los entrevistados afirman que las mujeres tienen un papel importante en los proyectos, señalando que antes esto no ocurría.

La mujer actualmente participa en la gesta de proyectos, como así también en la conformación de grupos de microcréditos, asiste a capacitaciones y reuniones y ocupan cargos de poder, ya sea como delegadas de base hasta Cacicas.

Pese a estos avances en materia de género, el rol de la mujer está en contante creación y recreación. En algunos casos, cuesta otorgarles un lugar importante como ser la toma de decisiones que requieren estos proyectos. Puede deberse a que hacia adentro de las comunidades la participación de la mujer no es tema de debate, vale decir que las comunidades no revisan en sus evaluaciones cuestiones de género.

Si bien los proyectos tienen enfoque de género en su mayoría, la idiosincrasia de algunas comunidades ubican a la mujer en roles secundarios en relación a los que toma el hombre o jefe de familia.

En esto también tienen responsabilidad los equipos técnicos que intervienen en territorio, los cuales deberán capacitarse y ajustar sus propuestas acorde a la situación de cada comunidad, sin negar o invisibilizar a las mujeres en esta realidad.

En relación al último punto que es la participación de los jóvenes en proyectos de desarrollo, las respuestas son bastante desalentadoras.

Prácticamente la totalidad de los entrevistados ha manifestado lo siguiente en relación a los jóvenes

- i. Escasa participación en la generalidad de los proyectos.
- ii. Ausencia en capacitaciones.
- iii. Ausencia en reuniones.
- iv. Vergüenza en relación a su identidad indígena presente en su cotidianeidad.
- v. Problemas para reconocer sus raíces Diaguitas.
- vi. Cuando participan, no cumplen ni respetan acuerdos.
- vii. Alejamiento de las actividades propuestas desde la comunidad.
- viii. Migración.

Otras opiniones, las menos, manifiestan que los jóvenes han participado en producción hortícola en Valle de Tafi en el marco del proyecto Gran Torna, y que en Nogalito son beneficiarios del programa jóvenes por más y mejor trabajo.

Esto deja entrever que tal vez sean los proyectos a corto plazo o de respuestas inmediatas los que convoquen a los jóvenes a sumarse. En este contexto, el mencionado programa no requiere que se autoreconozcan indígenas para recibir la beca, lo cual puede ser algo positivo para el joven al que le cuesta asumir su identidad.

La problemática de los jóvenes no deja de ser un punto importante de revisar y solucionar, principalmente por la necesidad que tienen los mayores de dejar su legado en las comunidades indígenas tucumanas.

En cuanto al otro campo de análisis, el Estado y su relación con la temática indígena, los tres puntos a analizar tienen una estrecha vinculación.

Estos puntos son: efectos positivos y negativos del Estado en torno a la temática indígena; el rol del Estado en la temática en cuestión y propuestas de políticas públicas.

Antes esto, los informantes calificados expresan que si bien el marco jurídico existente es altamente positivo, lo negativo que se manifiesta es en su mayoría cuestiones que se desencadenan por el no cumplimiento del “positivo marco legal”.

A modo general las respuestas indican más aspectos positivos a nivel nacional, que a nivel provincial (Tucumán).

Se mencionan algunas leyes relevantes en la temática como ser: la ley N° 26.160 y su prórroga que prohíbe los desalojos hasta tanto se lleve a cabo un profundo relevamiento territorial con informes que determinarán cuáles tierras son indígenas y cuáles no.

Otra ley es la del “12 de octubre”, que convierte al día en un día de reflexión y respeto a la diversidad cultural. También se menciona como relevante acuerdos para el manejo de reservas que existe en la Patagonia entre Estado y comunidades Mapuches.

A nivel provincial se destaca la existencia de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos, entidades que atienden la problemática indígena.

También se expresa que lo positivo que tiene el Estado es que apoya proyectos a nivel Nacional con inversiones, y esto según manifiestan los entrevistados es una manera de escuchar y reconocer a los pueblos. Lo negativo de esto es que al depender estas inversiones en la mayoría de los casos del Ministerio de Desarrollo Social, existe una centralización del mismo que muchas veces provoca políticas no ajustadas a las realidades de los pueblos indígenas. Siguiendo esta línea, se expresa como negativo también los tiempos burocráticos que tienen los organismos que financian proyectos

En casos muy puntuales hay respuestas rápidas a demandas concretas de los pueblos, promovida por lazos previos existentes. Ejemplo, la ciudad de Quilmes Buenos Aires, tiene un convenio de hermandad con Quilmes Tucumán.

Ante la existencia de un claro marco legal que protege los derechos fundamentales de los pueblos originarios, aún persisten los conflictos de territorio y sobre este complejo escenario se crean políticas públicas que protegen a las comunidades indígenas. Por lo que existe una contradicción entre lo “dicho y lo hecho”.

Por ejemplo, la ley N° 26.160 y su prórroga, que prohíben los desalojos, no es aún una herramienta de protección para los pueblos originarios. Fue a partir de su creación en el año 2006, que los desalojos se incrementaron y se hicieron visiblemente violentos.

Estas y otras graves violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas son expresadas por los informantes calificados en el presente trabajo. Sin embargo lo alarmante es que no se aplican las leyes que protegerían a estos pueblos.

En cuanto al rol del Estado en materia de pueblos indígenas, a grandes rasgos, y de las voces de los informantes calificados, se manifiesta un complejo escenario

- i. Existe un Estado (y hacia el interior del mismo también con diferencias entre Nación y Provincia) con intencionalidad de hacerse presente.
- ii. Están las comunidades indígenas demandantes.

- iii. Problemas de representatividad y organización hacia el interior de las comunidades.
- iv. La contradicción de las políticas públicas existentes.
- v. Los tres poderes del Estado no acuerdan entre sí una mirada general y única hacia los pueblos indígenas, por lo que no hay coherencia en las acciones que se proponen.

Todo este panorama, se encuentra agravado por problemas de territorio que se traducen en los ya mencionados desalojos violentos por parte de terceros o del propio Estado provincial.

En este marco surge un rol del Estado como garante de derechos, y como el único que puede hacer cumplir los mismos.

Principalmente los Caciques de las comunidades en estudio, marcan una diferencia entre el poder político provincial y el poder político nacional. Se refiere a éste último como sigue:

*“...El Nacional, es un buen Estado, protector y promotor de los derechos indígenas”
que no es escuchado por las provincias... (CCQ)*

Esta mirada subjetiva que los dirigentes tienen del poder político Nacional, podría deberse a que los conflictos y causas que tienen los pueblos, son en su mayoría con el gobierno provincial, y es el Gobierno Nacional aquel que en la figura del INAI o CDR, apoya a las comunidades indígenas.

En cuanto al rol del Estado en relación a los proyectos, los informantes expresan que temas como la educación, el agua y la vivienda deberían estar en agenda. Por otro lado se manifiesta que el Estado debería estar más presente, dialogar más y permitir mayor participación de las comunidades indígenas en diversos temas.

Como un aspecto destacado que el Estado a través de la ley N° 23.302, ha impulsado, es la conformación del CPI ya descripto anteriormente.

Este Consejo es un importante nexo entre organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales, autoridades comunitarias y bases indígenas en todo lo que atañe a la problemática de los pueblos originarios.

Algunos entrevistados, fueron delegados del CPI, y resaltaron la importancia del espacio como un reconocimiento y reivindicación política de los pueblos originarios. Se lo toma como un elemento más a la tan buscada visibilización de los pueblos originarios. Todo esto está muy relacionado a la participación de las comunidades en espacios de toma de decisiones.

Otras voces cuestionaron al CPI, por haber sido *“un invento para sacarnos de encima”* (DDQ), y evitar que los dirigentes propongan espacios en co-manejo, en instituciones de mayor importancia como el INAI.

Pese a estas opiniones encontradas, se considera al CPI como un órgano de representación de las comunidades indígenas, y dependerá del uso que hagan los

pueblos de consejo para ir ocupando espacios de decisión en cúpulas como la del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros.

Por ahora este consejo, como se dijo anteriormente tiene una importantísima llegada a las comunidades de base de los pueblos indígenas, y esto garantiza de alguna forma que las voces de todos sean escuchadas en otros ámbitos.

Por último las ideas que los informantes entrevistados proponen para políticas públicas en materia de pueblos originarios, son de un importante valor. Esto se debe a que cada uno de estos entrevistados conoce la realidad de las comunidades indígenas tucumanas, estuvieron vinculados a ellas o a sus proyectos; algunos son los máximos representantes de las comunidades, o sea sus Caciques, por lo que las opiniones de los mismos son ciertamente calificadas en el tema.

A modo general, los informantes calificados piden como primera medida que haya un efectivo cumplimiento de las leyes existentes, de manera que se le de fin a los incesantes conflictos territoriales de las comunidades.

Si bien no es una propuesta concreta de política pública, se pone de manifiesto que sin la aplicación de los derechos existentes, difícilmente se pueda planificar nuevas propuestas relacionadas al desarrollo. Se destaca en esto el “derecho a la consulta”, un ejemplo de esto, es que los gobiernos deban consultar a los pueblos originarios en caso de realizar algún emprendimiento en territorios indígenas.

Es interesante revisar cómo los poderes que conforman el Estado, entiéndase en esto el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial no siguen una misma línea de pensamiento en relación a la temática indígena. Si bien son poderes independientes, la realidad muestra una marcada incoherencia entre lo “dicho y lo hecho”, es decir se crean leyes protectoras de los derechos de los pueblos originarios y a la vez, se liberan juicios a favor o en contra de comunidades indígenas. Siempre el tema de discusión y puja será el territorio.

En este marco una propuesta concreta es la de profundizar y promover la realización de los estudios de títulos en todas las comunidades. De todas maneras, los entrevistados realizan un aporte en cuanto a políticas públicas concretas de las cuales se sugiere se desprenderán programas y/o proyectos.

Algo que se destaca en esto es que las políticas deberían ser abarcativas y ajustadas a las necesidades más sentidas de las comunidades. Las políticas que mencionan son políticas en relación al agua potable, programas de mitigación a la desnutrición en las comunidades indígenas; programas de vivienda; programas que mejoren la comercialización de productos artesanales y turismo; políticas en relación a la educación que abarque más que el actual programa de EIB. Vinculado a esto se manifiesta que debería existir bibliografía acorde a la vida de las comunidades indígenas, como por ejemplo rescate de historia oral de abuelos, plantas autóctonas, historia de la llegada de los españoles, talleres de rescate de la identidad, buenas prácticas agrícolas, entre otros.

En cuanto a la cuestión administrativa de programas y proyectos, algunos entrevistados expresan que sería óptimo la no existencia de intermediarios entre las comunidades indígenas y el ministerio de desarrollo social.

Se intuye que la anterior opinión tal vez sea producto de alguna demora en cuanto a trámites que posee la provincia en este tema, como así también el desconocimiento de la importancia de tener un órgano regional como el INAI en Tucumán.

Por otro lado, algunos informantes manifiestan que se deben continuar con las políticas actuales, por ejemplo la existencia del CDR, e involucrarse más en los programas existentes.

También se propone que el Estado debe acompañar la lucha jurídica de los territorios, y que esto sirva para una lucha más amplia hacia el interior de las comunidades indígenas.

Una propuesta sumamente interesante es la que la UNPDT sugirió al poder Ejecutivo la cual contaba con la conformación de un organismo que aborde únicamente la temática de los pueblos originarios. Si bien hasta la fecha no hay respuestas por parte del gobierno, y no se sabe cuándo la habrá, la idea es un claro avance político de las organizaciones indígenas en materia de políticas públicas.

Todas estas opiniones se vinculan mucho con la función de los entrevistados en relación a las comunidades indígenas. Por ejemplo algunos de los Caciques manifiestan propuestas en relación a las necesidades sentidas de su comunidad, por ejemplo agua, vivienda, etc. Otros informantes como referentes institucionales, prefieren proponer cuestiones relacionadas a derecho. Igualmente no dejan de ser miradas subjetivas del tema.

Los conflictos y desventajas por la que atraviesan estos pueblos, reflejan una profunda discriminación e intolerancia hacia estos grupos. En Tucumán, no está superada la diferencia étnica aún, no hay objetividad en los juicios, ni fomento al consenso y construcción desde la diferencia. Tal vez esto ocurra, porque no se dimensiona la cuestión indígena, o se la desconoce. Esto también ocurre a nivel país y en otros países con presencia indígena.

Este capítulo intenta visibilizar la situación por la que atraviesan las comunidades indígenas tucumanas, su relación con el Estado, y en este contexto las interrelaciones que se dan entre las partes.

En este escenario, se formulan y ejecutan proyectos y/o programas hacia comunidades indígenas. Las políticas públicas, si bien son un tema muy complejo por el grupo en cuestión del que se trata y sus relaciones, también es muy rico en cuanto a información y reflexiones que podrán ser útiles a futuro.

Estos proyectos tienen diversos impactos en los pueblos indígenas y dejan en algunos casos marcas imborrables en el camino hacia la organización de las comunidades.

7. Conclusiones.

El presente trabajo intentó observar los efectos que producen las políticas públicas aplicadas a comunidades originarias de Tucumán en los aspectos económico-productivos y socio-organizacionales. Las conclusiones no son absolutas, y permiten indagar o reflexionar acerca de la cuestión indígena en torno a su relación con el Estado, los equipos técnicos y hacia el interior de los propios pueblos originarios.

Elemento central son las políticas públicas destinadas al sector y sus efectos, lo cual remite directamente a la hipótesis de esta investigación, que plantea

Las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas de la provincia de Tucumán en el período estudiado, habrían tenido efectos positivos en los aspectos socio-organizacionales, pero éstas no habrían alcanzado significativamente los ámbitos vinculados a lo técnico productivo ni a los ingresos de las familias.

De la contrastación de la hipótesis inicial con los resultados obtenidos surge que ésta se cumple parcialmente, por cuanto de la discusión de los resultados surge que como consecuencia de los programas aplicados no solo se lograron avances generalizados en los procesos organizativos sino que mediante éstos y el apoyo técnico sí se habrían logrado avances en los ámbitos técnico productivos y consecuentemente en los ingresos de las familias.

Considerando el conocimiento previo del territorio y sus actores que se creyó tener al comenzar la investigación y plantear la hipótesis, se hace necesario interpretar el origen de este sesgo: ¿porqué se pensó inicialmente que los programas no habían arrojado resultados productivos dignos de consideración?. La respuesta más obvia pudo ser “porque mirando desde afuera no se observaban”.

Esto no debería extrañar, cuando en las primeras páginas de este trabajo y como parte de la justificación del mismo se señala la “invisibilización” de la cuestión indígena en nuestro medio. Y esta invisibilización llegó a afectar la percepción de los resultados productivos desde la mirada de la investigadora, pese a la proximidad de ésta en la temática. Fue necesaria la mirada “desde adentro”, desde los propios actores, relevada a través de métodos cualitativos, para que estos efectos fueran perceptibles.

A partir de la investigación se puede concluir que tanto aspectos productivos como organizativos, se encuentran íntimamente relacionados. Uno de los puntos fundamentales para el éxito de los programas es la organización de las comunidades indígenas. En este marco, los equipos técnicos también juegan un papel fundamental en los procesos de implementación de proyectos de desarrollos.

A su vez la problemática del territorio continúa siendo un aspecto no resuelto en las comunidades indígenas, que interfiere y obstaculiza procesos de organización e implementación de proyectos de diferente índole.

En este escenario, se hace necesaria una fuerte presencia del Estado, y no solo del Instituto que atiende la cuestión indígena, sino también de otros organismos estatales, con el fin de alcanzar acuerdos y articulaciones coherentes hacia el interior del Estado mismo en relación a la temática de los pueblos originarios.

En cuanto al periodo abordado, se puede concluir que durante los años 2000-2010 y en adelante, hubo muchos sucesos o acciones interesantes de revisar en materia de pueblos originarios.

El Estado y otros organismos de financiamiento fueron dejando atrás la figura de programas de “asistencia”, para comenzar a pensar en un abordaje territorial. A su vez, al existir una “política de integración” en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, las comunidades originarias son usuarias de planes y programas que no solo tienen como destinatarios exclusivos a pueblos indígenas, sino que son parte de la población destinataria general.

Un ejemplo de lo antes mencionado, es la existencia de los Centros de Referencia (CDR) entidad que reúne a todos los programas del MDS y además es la sede del INAI, por lo que la comunicación entre comunidades y responsables de los programas es constante.

Sin embargo, a nivel provincial esto aún es incipiente. Según lo indagado en el presente trabajo, aún son relativamente escasos los programas provinciales que permiten a las comunidades indígenas ser beneficiarias de sus políticas sociales.

De todas maneras, algunos representantes de organismos nacionales, realizan acciones de gestión con gobiernos locales a fin de articular tareas conjuntas. Esto sigue dependiendo de las particularidades de cada equipo y no de una política concreta de Estado. Un ejemplo que ilustra lo antes mencionado, es que en el proyecto de agua para la comunidad de Quilmes, la UML Diaguita-Calchaquí articuló con la Subsecretaría de Empleo para conseguir Planes de Empleo Comunitario (PEC) y de esta manera concluir la obra de canalización y entubamiento del sistema de riego.

Otro aspecto importante del periodo en estudio, fue que las comunidades indígenas fueron reconocidas por el Estado Nacional durante el mencionado periodo, otorgándoles la personería jurídica nacional. Este punto no deja de ser polémico en cuanto a la necesidad de una figura “legal” para el reconocimiento étnico, pero es en la actualidad el instrumento que les permite a las comunidades indígenas acceder a planes y programas. Esto puede ser parte de otro debate, en el que se discuta si es realmente necesario comprobar existencia a través de la obtención de una personería jurídica... si esto fuese así, la vigencia de prácticas ancestrales, el parámetro lingüístico y el autoreconocimiento serían elementos complementarios; ¿o qué lugar ocuparían en la conformación de una comunidad indígena?.

En cuanto a los efectos en aspectos económicos-productivos se debe diferenciar las comunidades indígenas en estudio, ya que las experiencias en procesos de desarrollo e implementación de proyectos fueron diferentes en cada una.

Se hace referencia a algunos proyectos de relevancia en las comunidades indígenas en cuanto a su alcance.

Existen procesos que se acercarían tangencialmente al concepto de desarrollo local, en proyectos ejecutados en la comunidad india Quilmes a partir del Proyecto DCI. Bajo este criterio, un dato que no es menor es que los subproyectos ejecutados en el marco del Proyecto DCI, respondieron a la priorización efectuada por las propias comunidades

indígenas destinatarias del mismo, entiéndase Quilmes y Amaicha. Es decir este proceso se inicia bajo el enfoque de “lo participativo”.

Además, guardan alguna relación con el concepto de Desarrollo Rural Territorial. Al decir de Schejtman y Berdegú (2004), el DRT se sostiene sobre la base de la transformación productiva y desarrollo institucional; según la investigación, existen en Quilmes proyectos que pudieron alcanzar estos aspectos con algunas limitantes.

Uno de esos proyectos es el de Agua para la comunidad de El Paso, donde se perforó un pozo para el aprovechamiento de aguas profundas. Actualmente este pozo está siendo utilizado por los comuneros que participaron desde el inicio del proyecto, y posteriormente se sumaron otros.

Dicho proyecto transformó el paisaje de la zona, las parcelas están cubiertas y con pasturas implantadas. Además se podría considerar que la superficie de cultivo aumentó y las parcelas están siendo regadas a través del agua del pozo. Se produce alfalfa y pimiento para pimentón.

El aspecto referido a la venta de la producción, sería la limitante que no permite alcanzar la semejanza con el concepto de DRT, y se limita estrictamente a lo local. La venta del pimiento para pimentón se realiza a un intermediario vecino, que es una cooperativa y la alfalfa no se enfarda sino que se hace ingresar a los animales a pastar, cobrándose bajo la figura de “noche de pastaje”.

En cuanto al eje desarrollo institucional se puede decir que este proyecto permitió a la comunidad india Quilmes, en su base de El Paso vincularse con los siguientes actores:

- i. INTA.
- ii. Cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán.
- iii. Cooperativa “Santa María”.
- iv. Dirección de Irrigación de la provincia de Tucumán.
- v. Profesionales del área temática en cuestión.
- vi. Equipo del INAI Regional Tucumán.

Otro proyecto citado por los entrevistados como relevante en la comunidad india Quilmes, es el denominado subproyecto Torna Amaicha-Quilmes, el cual tuvo un importante alcance hacia el interior de la comunidad.

No solamente fue uno de los primeros proyectos implementados en la zona a través del DCI, sino que superó las expectativas en cuanto al número de beneficiarios, el cual se incrementó durante el primer año de implementación. Además, el fondo rotatorio pudo mantenerse por aproximadamente nueve años (datos obtenidos por entrevistados durante el año 2012), y funcionar tal como se había previsto: un fondo solidario que garantice el acceso de nuevos emprendedores.

Esto no solo alcanza al área agrícola de la zona, sino también al rubro artesanal ya que este grupo también fue parte de los destinatarios de subproyecto Torna.

En este marco se ponen en tensión dos cuestiones: lo comunitario y lo individual, ya que el proyecto es de rescate de valores comunitarios (torna, intercambios solidarios y ayuda mutua) pero de implementación netamente individual. Esto abre el debate en torno a qué es una comunidad, o que hay alrededor de este término o es simplemente idealización del concepto.

Analizar el caso a caso de algunos beneficiarios del proyecto Torna, nos permite dimensionar el alcance de este subproyecto. Esto último tiene características personales, es decir depende de cómo cada productor o artesano haya avanzando o no a partir de este subproyecto.

En torno a esto también está la idea de continuidad, ya que muchos destinatarios del Torna acompañaron este proceso mientras el equipo del DCI estuvo en terreno. Una vez culminado el proyecto en el año 2008, según expresaron algunos entrevistados, no todos los productores continuaron con su actividad.

Pese a esto, otro dato que ilustra el alcance de dicho proyecto, es la existencia de microcréditos, que surge en el 2008, tomando la experiencia del proyecto Torna y adjudicándole importantes responsabilidades a Quilmes en la gestión y administración de recursos, créditos en este caso.

En relación a los dos proyectos mencionados surge también en el marco del proyecto DCI el subproyecto de maquinarias agrícolas de uso compartido, el cual proponía la compra de las siguientes máquinas e implementos: dos tractores; un vibrocultivador, una rastra de discos, un tanque y un carro acoplado. Los tractores se pensaron para uso de la comunidad de Quilmes y la comunidad de Amaicha, las maquinarias e implementos complementarían los equipos que poseía en ese momento y posee la comunidad indígena de Amaicha del Valle.

Se acompañó el proceso de ejecución del proyecto, confeccionando reglamentos de uso de forma participativa, talleres para calcular costos de servicio, gestiones para el tema de service y combustible y prácticas en el manejo y uso de las maquinarias agrícolas. Esto último fue un punto muy interesante ya que los aspirantes a tractoristas pasaron por un ciclo de clases teórico-prácticas a cargo de docentes de la Cátedra de Maquinarias Agrícolas de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Una vez finalizado el curso de capacitación se eligieron los tractoristas para Quilmes y Amaicha.

El obstáculo que tuvo el mencionado proyecto, es que la anterior dirigencia de la comunidad indígena de Amaicha del Valle tenía el acceso al galpón donde se alojaba el parque de máquinas y por conflictos internos y de representación nunca se pudo hacer uso de sus maquinarias, por lo que ambas comunidades se vieron afectadas.

Este ejemplo ilustra las cuestiones organizativas que obstaculizan la implementación efectiva de proyectos. Pese a que en ese momento el equipo técnico de la UML Diaguíta-Calchaquí intentó intervenir y mediar ante estos conflictos, las acciones fueron en vano, razón por la cual el subproyecto no pudo cumplimentar todos sus objetivos.

Esto si bien parece anecdótico refleja situaciones en algunos casos frecuentes en ciertas comunidades. Esto además corrobora la afirmación anterior de que los efectos económico-productivos dependen de la organización de las comunidades.

Otro proyecto relevante fue el implementado en la comunidad indígena de Casas Viejas, denominado Mejoramiento de los bovinos autóctonos por incorporación de una raza de aptitud lechera, el cual tuvo un significativo impacto en las alrededor de veinte familias destinatarias.

Si se intenta realizar una comparación de este proceso con los de desarrollo territorial, se podría decir que aún se está lejos. Por un lado, existe transformación productiva ya que se sembraron especies que habían dejado de cultivarse (avena, maíz, zapallo) y se hizo un salto sustantivo en cuanto a la mejora genética por el ganado vacuno raza Jersey. Éste se adaptó de manera óptima a la zona de Casas Viejas.

En el aspecto de vínculos entre los diferentes actores, si bien se están llevando adelante conexiones y conversaciones con autoridades comunales e INTA, aún falta que el producto, que en este caso es el queso y quesillo ingrese al mercado dinámico y pueda competir con otros quesos.

Lo interesante de este proyecto es que el efecto multiplicador fue casi inmediato y existen muchos comuneros dispuestos a ingresar a la propuesta, si en caso se reinicia. Además desde la dirección del proyecto, y desde los destinatarios, se dejaron sentadas propuestas que permitirán la continuidad del proyecto y las mejoras necesarias para que el producto mejore su calidad. Algunas de estas propuestas son:

- Participar de ferias donde se pueda ofrecer el producto, por ejemplo el Festival del Queso el cual se realiza en la ciudad vecina de Tafi del Valle.
- Construir pequeñas queserías de uso comunitario.
- Trabajar sobre una denominación de origen o marca colectiva que permita la identificación de los quesos de la comunidad indígena de Casas Viejas.
- Aprovechar la trashumancia, y preparar quesos y venderlos en verano, estación que coincide con temporada alta de turismo.

En el caso de las comunidades del Valle de Trancas, el único proyecto hasta el momento de índole productivo es el Gran Torna, y aun sus resultados no han sido cuantificados o evaluados por sus dirigentes y las respectivas comunidades beneficiarias. La limitante de la tierra en algunas comunidades de base (por ejemplo Gonzalo); la limitante del agua y las distancias, determinan que aún no que se generen procesos importantes de desarrollo. En este marco, la producción aún se la entrega a intermediarios.

El mayor impacto que se le da a este proyecto es desde el aspecto organizativo, ya que permitió a la comunidad indígena de Potrero de Rodeo Grande llevar adelante la implementación de dicho proyecto y esto si deja capacidad instalada, en cuanto a gestión y administración de recursos en la comunidad.

La comunidad de Nogalito no tiene aún procesos de desarrollos local, por ende no los tiene a nivel territorial. Se destaca que durante la implementación del proyecto de hortalizas, los productores pudieron dejar atrás a la figura del intermediario y lograron

organizarse para vender la cosecha de arvejas. Sin embargo, de las voces de los entrevistados, esto solo duró lo que duró la implementación del proyecto.

Sería interesante revisar la historia de cada comunidad de base y los motivos particularmente organizativos, por los cuales se utilizó de diferente manera la tecnología.

Es de destacar que en todas las comunidades que se presentan en esta investigación, la implementación de proyectos generó algunos movimientos. Las capacitaciones técnicas, el ejercicio de ejecutar un proyecto, y poner en funcionamiento la logística que esto implica, la adquisición de insumos y herramientas, la disponibilidad de recursos materiales como humanos, todo dejó capacidad instalada en cada base donde se ejecutaron proyectos.

En mayor o menos medida impactaron en las comunidades, para bien o para mal la implementación de los proyectos y sus repercusiones hacia adentro es un juicio que cada comunidad deberá realizar en un futuro y encontrar respuestas a las debilidades que se presentaron en este camino.

En referencia a los efectos socio-organizativos generados a partir de la implementación de los proyectos, se puede concluir que los mismos son tangibles y otorgan visibilidad a la cuestión indígena.

Sin efectuar ningún juicio de estos efectos, se puede decir que los mismos son importantes, y abren interrogantes acerca del fortalecimiento de las organizaciones, como ser

- i. Qué tipo de fortalecimiento se pretende.
- ii. Cuál es el papel que juegan los actores del territorio en este complejo escenario.
- iii. Qué intereses hay puestos en juego en las cuestiones de desarrollo.
- iv. Cómo repercuten hacia el adentro de cada comunidad estos proyectos.
- v. La confianza, el dinero...

La implementación de proyectos de desarrollo en las comunidades, ha generado procesos organizativos diversos, tales como unión entre artesanos, división entre productores, vinculación con otros agentes de la zona, conformación de grupos de trabajo, entre otros.

El punto más relevante en la cuestión organizativa es sin duda la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPNDT), esta organización de segundo grado significa un avance político en las cuestiones organizativas de las comunidades originarias. Es un espacio de debate, de democratización y principalmente de visibilización de la problemática indígena.

Además resulta interesante como en la actualidad el ejercicio de la democracia toma importancia en todos los espacios, incluso en las comunidades originarias donde el verticalismo era una característica presente en estos pueblos.

Este espacio de representatividad marca un antes y un después en el interior de las comunidades que la conforman, no solamente por razones exitosas, sino también

porque la UPNDT desató conflictos, discusiones irreconciliables entre pares, que llevó a la temporal desvinculación de grupos de abogados asesores, quiebres entre referentes, retiros de algunas comunidades de la organización y así múltiples sucesos que se generan en un contexto de debate y pujas de poder. Porque además de ser un órgano representativo, la UPND es un espacio de decisión y poder, por lo cual sería predecible que se desaten cuestiones conflictivas.

Otro punto de interés es que en la actualidad la mayoría de las organizaciones no generan estrategias para retener a sus jóvenes, y la migración de los mismos de su lugar de origen, pone en alerta la futura organización de las comunidades indígenas.

Los jóvenes pueden tener muchas razones para migrar, eso tal vez no sea el punto de debate, pero debe tener muchas otras razones para querer permanecer en su lugar. Para esto, su territorio deberá ofrecer recursos, vínculos entre el ámbito rural y urbano y otras alternativas que garanticen un espacio de trabajo futuro para los jóvenes. Además sería interesante propiciar espacios de debate para los jóvenes, aprovechando las políticas existentes muchas de las cuales tienen como destinatarios a los jóvenes, ejemplos: PLAN AHÍ, Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, tutores interculturales, Argentina Trabaja, entre otros.

A nivel de propuestas, el abordaje para con los jóvenes indígenas deberá realizarse con equipos interdisciplinarios de trabajo que puedan técnicamente captar la demanda de los mismos y despertar interés en esta población, como así también posibilitar la voz de estos jóvenes.

En la cuestión de género se debe seguir fomentando este enfoque en todos los proyectos de desarrollo, considerando las funciones productivas y reproductivas de las mujeres indígenas, para propiciar reales proyectos donde las relaciones entre hombre y mujeres se equilibren. Tal vez ninguna comunidad se plantee por ahora estas cuestiones, pero será entonces que los proyectos de desarrollo deberán procurar el lugar a la mujer en todas las acciones que se planifiquen y capacitar a los equipos técnicos en este enfoque.

Marco legal, políticas públicas y Estado juegan un rol fundamental en la temática indígena vinculada a sus procesos de desarrollo rural.

En un contexto ideal, lo que orienta a la política pública es la Constitución Nacional y la democracia. La política pública debe ser lo suficientemente amplia para que las minorías se encuentren integradas en las propuestas, esto es lo que permite el sistema democrático.

El Estado deberá ser el garante de los derechos de los pueblos indígenas, y hacer cumplir las leyes existentes. Con respecto al marco legal que atañe a la problemática indígena, muchas leyes nacionales y provinciales se fueron obteniendo a través de luchas reivindicativas, gestiones y demás acciones muchos derechos que protegen a los pueblos originarios.

En cuanto a la relación entre los pueblos originarios y las leyes, los actores que participan en procesos de elaboración de diagnósticos, formulación de propuestas, proyectos de ley y afines, consideran todos estos como logros, reivindicaciones, obtención y legitimación de derechos.

Sin embargo, tiempo después esta idea se desvanece ante sucesos de desalojos y se retorna a la protesta y a los petitorios pertinentes.

A nivel general existe un marco jurídico de clara protección a los derechos de los pueblos indígenas. En la situación actual de los pueblos indígenas, no hacen falta nuevas leyes, sino instrumentar y hacer cumplir las existentes.

El Estado, deberá acordar entre las distintas partes que lo conforma una acción coherente frente a esta problemática.

Además, la política pública no puede ir en contra de la ley, por ejemplo de la Constitución Nacional Argentina. Esto requiere acuerdos entre las partes que intervienen en los procesos de las políticas públicas, y en esto el Estado toma un rol principal. Sin embargo de manera general, se tiende a considerar al Estado como un todo homogéneo, eso es darle una connotación simplista al mismo. El Estado, en todos los contextos y en este en particular, tiene diferentes niveles que a su vez difieren entre si. Tal es el caso de Estado Nacional, el Provincial y el Municipal. El sistema federal y la división de poderes que posee la organización política de Argentina dificultan la convivencia de los mismos.

Acá es donde podemos comenzar a diferenciar las políticas públicas entre políticas de gobierno y políticas de estado, una división entre dos extremos (que obviamente nunca son puros) en el cual el primero es una política exclusiva del PE y el extremo opuesto es una política de la sociedad toda (tres poderes, todos los niveles y con consenso social). En el medio hay una infinidad de combinaciones posibles (Abdala, 2012).

Los poderes que conforman el Estado, entiéndase en esto el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial no siguen una misma línea de pensamiento en relación a la temática indígena. Si bien son poderes independientes, la realidad muestra una marcada incoherencia entre lo “dicho y lo hecho”, es decir se crean leyes protectoras de los derechos de los pueblos originarios y a la vez, se liberan juicios a favor o en contra de comunidades indígenas. Siempre el tema de discusión y puja será el territorio.

El Estado debe tener un rol activo en este tema e intervenir para solucionar los conflictos del territorio, sin esto resuelto, no se están cumpliendo los derechos, ni se podrían generar políticas públicas adecuadas que signifiquen un avance en materia de pueblos originarios.

En cuanto a lo antes mencionado, la relación que tiene la comunidad india Quilmes, y el Estado, principalmente el provincial, es de una interesante complejidad. Si bien el Estado aparece en la figura de un actor más en la realidad de la comunidad india Quilmes, no es un actor sin importancia ya que el Estado provincial acciona con la comunidad indígena, a favor o en contra de la misma, y viceversa. Ejemplos de esto son

- i. Juicios que lleva adelante la comunidad india Quilmes contra el Estado provincial por muchos casos uno de ellos más emblemático es el caso Ciudad Sagrada de Quilmes (conocida también como Ruinas de Quilmes).
- ii. Órdenes de desalojo, emitidas por el poder judicial, y llevadas a cabo la mayoría de las veces en forma violenta, por el poder policial, jueces de paz, y/o particulares, tal es el caso de la comunidad de base de Colalao del Valle, en 2009.

Los dos ejemplos antes mencionados tienen que ver con las relaciones de enfrentamiento que se establecen entre la comunidad india Quilmes, y el Estado de la provincia de Tucumán, en la figura de los distintos poderes.

Acciones que ejemplifican relaciones o vínculos favorables entre el Estado y la comunidad india Quilmes, son la generación de mesas de concertación que el Estado promueve e incluye en éstas a dirigentes indígenas de Quilmes para discutir diferentes temáticas, lo mismo ocurre cuando los dirigentes indígenas generan espacio y piden la participación de representantes del Estado en los mismos; programas del Estado donde los pueblos originarios son destinatarios; convenios generados entre la comunidad Quilmes y entidades estatales, entre otros.

Otro ejemplo de vínculos entre Estado y comunidad, fue el conflicto desatado en Casas Viejas por un proyecto llevado adelante por un organismo provincial que según informaron los dirigentes dejó sin agua a la comunidad, esto generó procesos de discusión y posteriores acuerdos en el tema. A su vez esta comunidad recibe mucho apoyo a nivel nacional en relación al rescate patrimonial y derechos humanos.

Esto deja ver una compleja relación entre estos actores (comunidad indígena y Estado), que hace necesario revisar procesos de mediación y real compromiso entre ambos.

Continuando con los vínculos entre actores en el territorio, surge el clientelismo, como problemática mencionada en el presente trabajo por algunos entrevistados. Este aspecto obstaculiza y pone freno a procesos de legítimo desarrollo. Es el clientelismo una práctica arraigada en Argentina como en muchísimos otros países.

El clientelismo en su sentido más profundo establece relaciones entre individuos que tienen condiciones de poder desiguales (patrón y empleado, gobernante y gobernado), y lo que lo agrava más es que las condiciones económicas y sociales también son desiguales.

En este marco, el espíritu de generar cuestiones de desarrollo en territorios con relaciones clientelares, es prácticamente imposible ya que lo principal que no se cumple es la participación real de la población local, y las articulaciones institucionales se pueden dar pero desde la lógica clientelar y esto desdibuja legítimos vínculos en pos de objetivos comunes o similares de actores de un mismo territorio.

En el norte de Argentina muchos procesos de desarrollo local-territorial se ven detenidos por el clientelismo. Erradicar esta práctica implica un verdadero desafío, obliga a revisar cuestiones políticas-partidarias acentuadas en las zonas más empobrecidas de los territorios que tienen que ver con indicadores como el de

necesidades básicas insatisfechas, niveles de educación, compromiso, vínculos solidarios, entre otros.

En cuanto a las políticas públicas que demandan o sugieren los entrevistados, se puede concluir que algunas se cumplen y otras no.

Esto es algo paulatino, donde serán los propios actores quienes deban tomar acciones concretas para que las demandas sentidas sean escuchadas. Algunos ejemplos se presentan en la Tabla N° 10.

Tabla N° 10: Políticas públicas demandadas, implementadas y no implementadas

Política pública demandada	Política implementada	Política no implementada
Continuar con las políticas actuales. Por ejemplo Centro de Referencia (CDR)	Es política del MDS dar continuidad al CDR, conjuntamente con el INAI	
Trabajar en los distintos niveles nacional, provincial y comunal.		No hay trabajo conjunto o complementario entre los gobiernos locales y el gobierno nacional.
Fomentar la realización de los estudios de títulos.	Ley 26.160 de relevamiento territorial, aplicada en la provincia de Tucumán.	
Que se transfieran tierras fiscales a las comunidades indígenas.		Esta propuesta realizada por la UNPDT al poder ejecutivo provincial aún no fue abordada.
Generar un organismo provincial que trabaje la temática indígena en general		Esta propuesta realizada por la UNPDT al poder ejecutivo provincial aún no fue abordada
Abordar la problemática del agua	Nuevos proyectos de agua en zonas de comunidades indígenas. Intervención de organismos como el PROSAP.	
Aplicación de las leyes existentes		Aún no hay un reconocimiento del marco jurídico existente y por lo tanto las leyes no se aplican.
Confección de material de lectura con los conocimientos ancestrales de la zona para los niños de las escuelas de los valles	Existencia del programa EIB, en el cual se podrán acercar estas propuestas.	
En microcréditos se debe tomar en cuenta la cancelación de deudas con producción, aspecto no contemplado por el programa		Se hicieron pedidos desde Tucumán para esto y aún no hay respuesta a nivel ministerial.
Promover las denominaciones de origen para los productos elaborados en las comunidades indígenas y las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)	Existencia de la línea de economía social “Marcas colectivas”	
Proyectos o programas de viviendas ²		Aún no es una política concreta en la provincia.

² En cuanto a las propuestas de vivienda para comunidades indígenas, es interesante destacar un aspecto que presenta una doble acción y por lo tanto un doble efecto en las comunidades. Se ha solicitado desde el programa microcréditos en Tucumán, que se posibiliten fondos de crédito para la construcción de viviendas. Esto no es posible debido a que las comunidades no regularizan la situación de sus tierras y las escrituras o documentación de las mismas. En los casos donde esta situación está resuelta, como es en el caso de la comunidad indígena de Amaicha del Valle, que poseen la titularización de sus tierras

Las políticas implementadas son aquellas que a través de programas o proyectos se han implementado en las comunidades originarias. Las no implementadas podrían sugerir la “inacción” del Estado ante demandas puntuales de los pueblos y otros actores vinculados a la temática indígena.

Por otro lado, aunque en relación a todo lo antes mencionado está la cuestión de la tenencia de la tierra y con este concepto se abarca mucho mas que propiedad, es su uso y manejo, sus prácticas y sus recursos. Los procesos de desarrollo serán prácticamente nulos, o incompletos, así como también la efectiva implementación de políticas públicas si esto no está resuelto.

En la mayoría de las voces de los entrevistados surge el tema del territorio como eje principal de conflictos y donde toda búsqueda de elementos de mitigación a dichos conflictos fracasa. Tal es el caso de numerosas leyes nacionales y algunas provinciales que si bien existen, no se aplican y los desalojos continúan.

Las propuestas de desarrollo rural, desarrollo local y endógeno no pretenden excluir al Estado (Madoery, 2007: 143) ni reemplazarlo, al contrario, se promueve la vinculación con los diferentes órganos del Estado, se pretende un Estado presente y fuerte, que garantice procesos de desarrollo en las comunidades rurales, en este caso, las indígenas.

Esto tiene estrecha relación con las cuestiones territoriales, que al seguir sin respuestas no permitirán de ninguna manera que un proyecto de desarrollo se implemente y se sostenga en el tiempo. Los resultados que se obtendrán del relevamiento territorial en la provincia de Tucumán, indicarán cuáles tierras pertenecen a comunidades originarias y cuáles no.

Si este proceso se efectúa de manera correcta será de incalculable valor, y se espera que dichos resultados mitiguen los graves conflictos territoriales de las comunidades. La aplicación de la ley N° 26.160, y su prórroga, es una interesante política pública que está siendo efectivamente aplicada en territorio a través del ETO. Se esperan los resultados.

Finalmente, otro punto de interés tiene que ver con el apoyo a las organizaciones indígenas, y el fortalecimiento interno que las mismas puedan procurarse en relación a las políticas públicas y las propuestas que desde allí se desprenden.

La formación y capacitación de los agentes de desarrollo que trabajan en terreno debe ser una acción constante, no solamente desde la óptica técnica. Principalmente la formación debe apuntalar a los nuevos paradigmas del desarrollo (territorial, endógeno y local). En el caso de pueblos indígenas, abordajes que tengan que ver con los recursos culturales de los pueblos, el conocimiento y revalorización de prácticas ancestrales y constante referencia hacia lo local (Sili, 2010), son aspectos importantes a tomar en

comunitarias tampoco se pueden solicitar créditos para viviendas. Esto se debe a que los créditos son otorgados bajo la figura de hipoteca, y la tierra indígena, según lo consagra la Constitución Nacional Argentina en su artículo 75 inciso 17 “...ninguna será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Esto representa una gran limitante a la hora de planificar proyectos que requieran la intervención de la cuestión territorial para la construcción. Esto complejiza aún más los escenarios donde implementar políticas públicas.

cuenta a la hora de trabajar con comunidades originarias y brindar propuestas sustentables.

En este marco, se toma a la sustentabilidad como un concepto que no es estático (Ghersa, 2008). “La sustentabilidad viene a solucionar la cuestión del utilitarismo y conservacionismo... Conservar lo que no está manejado por el hombre y mantener lo que el hombre está usando como recurso... eso es sustentabilidad...” (Ghersa, op.cit.).

Por todo lo antes abordado, se insta a continuar profundizando, pensando y debatiendo estrategias el abordaje integral en materia de pueblos originarios.

Se proponen fomentar los procesos de desarrollo rural para mejorar la vida de las comunidades campesinas y en este marco, indígenas. Este desarrollo deberá ser de carácter local, para rescatar y revalorizar las diversidades culturales de la región, de carácter endógeno, es decir de abajo hacia arriba, con participación e intervención de múltiples actores de la zona, entre estos el Estado como garante principal de derecho y hacedor de políticas públicas ajustadas a la demanda sentida.

Estas propuestas deberán resultar en estrategias socio-productivas que garanticen la igualdad de condiciones en estos pueblos.

*“... las comunidades tienen hoy derechos especiales porque tienen desventajas especiales con respecto a cualquier otro ciudadano o grupo, en muchos aspectos...redoblar los esfuerzos, bienvenido sea el día que digamos que hoy estemos hablando del mismo derecho... porque le está llegando en igualdad de condiciones desde una beca, desde el agua, cloaca, desde un servicio público, transporte, vivienda, trabajo, etc. Las cosas que son importantes, lo son para cualquier persona que viva en esta sociedad ya sea en una comunidad indígena o acá en un barrio de Tucumán...”
(JRI).*

8. Bibliografía.

Abdala, D. 2012. Comunicación personal. Abogado Fundación ANDHES.

Abramovay, R. 2006. Para una teoría de los estudios territoriales. Desarrollo rural: organizaciones, instituciones y territorios / compilado por Mabel Manzanal y Guillermo Nieman - 1a ed. - Buenos Aires: Fund. Centro Integral Comunicación, Cultura y Sociedad - CICCUS. ISBN 987-9355-27-X

Aguilar Astorga; Lima Facio. 2009. ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas?. En Contribuciones a las Ciencias Sociales. Septiembre. Consultado el 15/09/2012 en el World Wide Web <http://www.eumed.net/rev/cccss/05/alf.htm>.

Aimaro, J. 2013. Comunicación personal. Delegado del INAI-Tucumán.

Ander Egg, E. 1983. Técnicas de investigación social. Buenos Aires: El Cid editor.

ANDHES. 2006. Comunidades Indígenas de Tucumán. Por una constitución que incorpore y garantice el derecho de los pueblos indígenas.

Aparicio, S. y Tapella, E. Campesinos, proyectos y políticas, de la teoría a la práctica a través de un estudio de caso, en Revista Argentina de Economía Agraria, Nueva Serie, Vol. 7 No. 2, Primavera 2004 ISSN 0327-3318 y en Anales de la Reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria. 30 y 31 de Octubre de 2003. AAEA. ISSN 1666-0285.

Bocchicchio, A. 2008. Apuntes de clase Curso Educación y desarrollo. Maestría en Desarrollo Rural. EPG-UBA.

Boixados, R., Palermo, M. (s/f). Los Diaguitas. La otra historia. Editorial El Quirquincho.

Bonfil Batalla, G. 1977. La declaración de Barbados II y comentarios. Nueva Antropología. Vol. II N° 7. Diciembre. Asociación Nueva Antropología. México.

Borghini, N. 2010. Tenencia precaria de la tierra y políticas públicas en Jujuy, Argentina. Un análisis de los vínculos entre provincia, nación y pueblos originarios CONICET-IDAES-UNSAM.

Canet, V. 2010. Análisis de experiencias de intervención pública y privada con pueblos indígenas. Serie de estudios e investigaciones N° 24. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Secretaría de desarrollo rural y agricultura familiar, Subsecretaría de agricultura familiar. PROINDER.

Chetty, S. 1996. The case study method for research in small- and médium - sized firms. International small business journal, vol. 5, octubre – diciembre.

Chonchol, J. 1994. Sistemas Agrarios en América Latina. De la etapa prehispánica a la modernización conservadora. ISBN 956-7083-29-0

Cinquegrani, M. 2013. Comunicación personal. Responsable proyecto Microcréditos, equipo técnico del INAI-Tucumán.

Cervera Novo, J. 2010. La cuestión indígena en la Argentina, un estudio de actualización. Ministerio de agricultura, ganadería y pesca de la nación. Secretaría de desarrollo rural y agricultura familiar. Subsecretaria de agricultura familiar. PROINDER.

Comunidad India Quilmes. 2006. Los Quilmes contamos nuestra historia.

Constitución de la República Argentina. Disponible en el World Wide Web <http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/>

Constitución de la provincia de Tucumán. Disponible en el World Wide Web <http://rig.tucuman.gov.ar/leyes/scan/scan/L-0-06062006.pdf>

Cruz, M. 2012. Ex cacique de la comunidad Indio Colalao. Comunicación personal.

Díaz, J. 2008. Comunicación personal. Delegado comunal Colalao del Valle, ex promotor Proyecto DCI.

Domínguez, D.; Lapegna, P.; Sabatino, P. 2006. Un futuro presente: las luchas territoriales. Revista digital Nómadas.

Eisenhardt, K. M. 1989. Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review, 14 (4): 532-550.

Fadda, G.; Zucardi, R. 1985. Bosquejo Agrológico de la provincia de Tucumán. Miscelanea N° 86. Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT.

Fandos, C. 2007. La comunidad Indígena de Colalao y Tolombón (Tucumán) en la segunda mitad del siglo XIX: vínculos y estrategias. El caso Guaisman.

Feyto y Pizarro, 2008. Notas de clase.

Flood, C. 2006. Instituciones agrarias y organizaciones de productores en la región pampeana: comentario bibliográfico sobre su evolución y principales contextos.

Flood, C. 2009. Apuntes de clase. Maestría en Desarrollo Rural. EPG-UBA.

Fogón Andino. 2009. Los Chuschagasta. Una comunidad en lucha. Periódico El Equico. Año 3 número 4.

Gallart, M. 1993. La integración de métodos y la metodología cualitativa. Una reflexión desde la práctica de la investigación. Métodos cualitativos II. La práctica de la investigación. Centro Editor para América Latina. pp. 107 - 210.

García Salemi, A. 2008. Recursos en peligro, entrevista a comunera de la comunidad indígena Pueblo de Tolombón. Periódico El Equico. Año 2 número 3.

García Salemi, A. 2009. Agricultura de los Pueblos Originarios. Cátedra de Sociología Agraria de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.

García Salemi, A. 2009. Trabajo final Curso Organizaciones Agrarias. Maestría en Desarrollo Rural. EPG-UBA.

García Salemi, V. 2012. Comunicación personal. Integrante Fundación ANDHES.

Ghersa, C. 2008. Apuntes de clase. Curso Sustentabilidad de los agroecosistemas. Maestría en Desarrollo Rural. EPG-UBA.

Gracas Rúa, M. 2006. En Aguilar Astorga y Facio, L. 2009. ¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas?, en Contribuciones a las Ciencias Sociales. Consultado el 11/07/2011 en el World Wide Web <http://www.eumed.net/rev/cccss/05/alf.htm>.

Gracas Rúa, M. 2009. Políticas Públicas. Universidad de Santa Catarina. Brasil.

Grimson, A. 2006. Nuevas xenofobias, nuevas políticas étnicas en Argentina. CONICET- IDES- Universidad Nacional de San Martín.

Hopenhayn, M. 2003. La pobreza en conceptos, realidades y políticas: una perspectiva regional con énfasis en minorías étnicas división de desarrollo social. CEPAL.

INAI (s/f). El proceso del TucumPACI en la provincia de Tucumán. Informe de avance.

INAI. 2006. Revista del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Número I. Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación.

Kollman, M. 2005. Una revisión en los conceptos de territorios equilibrados y región. Procesos de construcción y deconstrucción. Revista THEOMAI. Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo. N° 11.

Kraft, M.; Furlong, S. 2007. En Soto, X.; Mireya D. 2011 ¿De qué se habla cuándo se habla de políticas públicas? Estado de la discusión y actores en el Chile del bicentenario. Estado, Gobierno, Gestión Pública Revista Chilena de Administración Pública. ISSN 0717-6759 N°17.

Kraft, M.; Furlong, S. 2007. Public Policy: Politics, analysis, and alternatives, 2nd edition, Washington D.C., CQ Press.

Lascano, A. 2009. Aquellos años... Periódico El Equeco. Año 3 número 4.

Lascano A. 2012. Informe SIPROSA CAPS Localidad Gonzalo. Tucumán.

Lois, C. 1999. La invención del desierto chaqueño. Una aproximación a las formas de apropiación simbólica de los territorios del Chaco en los tiempos de consolidación del Estado Nación Argentino. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona N° 38; Abril 15, ISSN 1138 – 9788.

Madoery, O. 2001. El proyecto político local como alternativa de desarrollo. Revista Política y Gestión, volumen 2, publicación arbitrada de la Universidad Nacional de San Martín, U. Nacional del Nordeste, U. Nacional de Rosario, U. Nacional del Litoral, la Universidad de Chile, Colegio de Sociólogos del Uruguay y el Centro de Investigaciones y estudios Sociales del Uruguay, ed. Homo Sapiens.

Madoery, O. 2003. La formación de agentes de desarrollo local: ¿cómo contribuir desde la universidad a la gestión territorial?. VI Congreso Internacional del CLAD. Consultado el 20/02/2013 en el World Wide Web <http://www.clad.org.ve/anales6/madoery.html>.

Madoery, O. 2007. Otro desarrollo. El cambio desde las ciudades y regiones. 1ª edición. San Martín: UNSAM EDITA de Universidad Nacional de General San Martín. 168 p.p. ISBN 978-987-1435-08-1

Maidana, C. 2009. Volver a la tierra. Parentesco, redimensionalización territorial y reconstrucción identitaria. Libro: Pueblos Indígenas, interculturalidad, colonialidad y política. 1ª ed. Buenos Aires. Biblos.

Manzanal, M. 2005. Regiones, territorios e institucionalidad del desarrollo rural. Primeras jornadas de intercambio y discusión: el desarrollo rural en su perspectiva institucional y territorial. Buenos Aires. Junio.

Manzanal, 2009. Notas de clase. Maestría en Desarrollo Rural. EPG-UBA.

Marino, S. (s/f). Estado, políticas públicas y políticas de comunicación. Facultad de Ciencias Sociales. UBA.

Martínez M., M. 2006. La investigación cualitativa. Revista IIPSI. Vol. 9 - Nº 1 - 2006. ISSN: 1560 - 909X.

Medellín, P. 2004. La política de las políticas públicas: propuesta teórica y metodológica para el estudio de las políticas públicas en países de frágil institucionalidad. Chile. Serie: Políticas sociales, num. 93, CEPAL.

Merriam, S. 1998. "Case study research in education: a qualitative approach". San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Mombello, L. 2001. Evolución de la política indigenista en Argentina en la década de los noventa. Universidad Nacional del Comahue (UNC)-Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).

Montero, H. 2009. Los otros desarrollos. Entrevista a O. Madoery. Revista Nomada Nº 16. Abril.

Ottenheimer, A.; Zubrzycki, S., Tamagno, L. 2009. Las luchas por el territorio: el caso de los Myba-Guaraní del Cuña Pirú en tierras de la Universidad Nacional de La Plata. Libro: Pueblos Indígenas, interculturalidad, colonialidad y política. 1ª ed. Buenos Aires. Biblos.

Pelissero, N.; Difrieri H. 1981. Quilmes. Arqueología y etnohistoria de una ciudad prehispánica. Universidad Nacional de Tucumán.

Piossek Prebisch, T. 2005. Los Quilmes. Legendarios pobladores de los Valles Calchaquíes. Texto bilingüe. Edición de autora.

Ríos A. 2003. Factores que aportan a la sostenibilidad de un programa de apoyo al sector de pobres rurales y urbanos marginales: el caso del programa Pro Huerta Tucumán (Argentina). Formación de profesionales para el desarrollo: diagnósticos y propuestas / Alejandro Daniel Ríos...[et al.]. - 1a ed. - San Miguel de Tucumán: el autor, 2004. ISBN 987-43-8225-2.

Ríos, A., Ceconello, M. 2010. Material de lectura Curso de Posgrado sobre Desarrollo Rural Territorial. Cátedra de Sociología Agraria de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.

Rojas Mix, M. 1991. Los cien nombres de América. Eso que descubrió Colón. Colección identidad cultural. Editorial Universidad de Costa Rica. ISBN 84-264-1209-2

Rudelli, M. 2013. Comunicación personal. Técnica Pro Huerta Valles Calchaquíes, participante del equipo del Programa Médicos comunitarios.

Salas Oroño, J. 2007. Tipos de agriculturas y tipos de agricultores. Cátedra de Sociología Agraria de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.

Sánchez, D. Comunicación personal. Representante CPI y dirigente comunidad Potrero Rodeo Grande.

Schejtman, A.; Berdegúe, J. 2004. Desarrollo territorial rural. Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Schkolnik, S.; Del Popolo, F. 2005. Los censos y los pueblos indígenas en América Latina: una metodología regional. CEPAL/CELADE.

SERVINDI. 2012. Servicios de comunicación intercultural. Consultado el 09/11/2012 en el World Wide Web <http://servindi.org/seccion/publicaciones/libros/servindi>

Sosa, J. 2007. Ruinas de Quilmes. Historia de un despropósito. UBA.

Stavenhagen, R. 2007. Los pueblos indígenas y sus derechos. UNESCO. México. ISBN 978-92-95068-00-1.

Subirats, J. 2001. El análisis de las políticas públicas. Departament de Ciència Política i Dret Públic. Universitat Autònoma de Barcelona.

Tamayo Sáez, M. 1997. El análisis de las políticas públicas. Capítulo 11. La nueva administración pública. Comps. Bañon y Carrillo. Alianza Universidad.

Touraine, A. 1983. La intervención sociológica. Punto de vista. Revista de Cultura. Buenos Aires.

Trelles, M. 1857. Registro estadístico del Estado de Buenos Aires.

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán. 2011. Folleto de difusión.

Yin, R. K. 1989. Case Study Research: Design and Methods. Applied social research Methods Series, Newbury Park CA, Sage.

Yin, R. 1994. Diseño para los estudios de caso. Yin Robert K. Case Study Research. Design and Methods, e.Applied Social Research Methods Series, vol 5. Beverly Hill 1993.

Zurita, M. 2004. Lo sagrado en el mundo andino. Ed.: el autor. ISBN: 978-987-43-8095-1.

Anexos

Anexo N° 1

Población por pueblo indígena total del país. Año 2004 y 2005

Pueblo indígena	Población
Mapuche	113.680
Kolla	70.505
Toba	69.452
Wichi	40.036
Diaguita / Diaguita Calchaquí	31.753
Guaraní	22.059
Ava Guaraní	21.807
Tupí Guaraní	16.365
Mocoví	15.837
Huarpe	14.633
Comechingon	10.863
Tehuelche	10.590
Rankulche	10.149
Mbya Guaraní	8.223
Quechua	6.739
Tonocoté	4.779
Charrúa	4.511
Pilagá	4.465
Chané	4.376
Aymará	4.104
Atacama	3.044
Chorote	2.613
Pampa	1.585
Omaguaca	1.553
Lule	854
Querandí	736
Ona	696
Sanavirón	563
Chulupí	553
Tapieté	524
Subtotal	497.647
Otros pueblos declarados	3.864
Subtotal	501.511
Pueblo no especificado	92.876
Subtotal	594.387
Sin respuesta	9.371
Total	603.758

Fuente: INDEC. Encuesta complementaria de pueblos indígenas (ECPI). 2004-2005.
Por Cervera Novo, 2010.

Anexo N° 2

Ministerio de
Desarrollo Social
Presidencia de la Nación



Anexo N° 3

Primera Declaración de Barbados: Por la Liberación del Indígena

Los antropólogos participantes en el Simposio sobre la Fricción Interétnica en América del Sur, reunidos en Barbados los días 25 al 30 de enero de 1971, después de analizar los informes presentados acerca de la situación de las poblaciones indígenas tribales de varios países del área, acordaron elaborar este documento y presentarlo a la opinión pública con la esperanza de que contribuya al esclarecimiento de este grave problema continental y a la lucha de liberación de los indígenas.

Los indígenas de América continúan sujetos a una relación colonial de dominio que tuvo su origen en el momento de la conquista y que no se ha roto en el seno de las sociedades nacionales. Esta estructura colonial se manifiesta en el hecho de que los territorios ocupados por indígenas se consideran y utilizan como tierras de nadie abiertas a la conquista y a la colonización. El dominio colonial sobre las poblaciones aborígenes forma parte de la situación de dependencia externa que guarda la generalidad de los países latinoamericanos frente a las metrópolis imperialistas. La estructura interna de nuestros países dependientes los lleva a actuar en forma colonialista en su relación con las poblaciones indígenas, lo que coloca a las sociedades nacionales en la doble calidad de explotados y explotadores. Esto genera una falsa imagen de las sociedades indígenas y de su perspectiva histórica, así como una autoconciencia deformada de la sociedad nacional.

Esta situación se expresa en agresiones reiteradas a las sociedades y culturas aborígenes, tanto a través de acciones intervencionistas supuestamente protectoras, como en los casos extremos de masacres y desplazamientos compulsivos, a los que no son ajenas las fuerzas armadas y otros órganos gubernamentales. Las propias políticas indigenistas de los gobiernos latinoamericanos se orientan hacia la destrucción de las culturas aborígenes y se emplean para la manipulación y el control de los grupos indígenas en beneficio de la consolidación de las estructuras existentes. Postura que niega la posibilidad de que los indígenas se liberen de la dominación colonialista y decidan su propio destino.

Ante esta situación, los Estados, las misiones religiosas y los científicos sociales, principalmente los antropólogos, deben asumir las responsabilidades ineludibles de acción inmediata para poner fin a esta agresión, contribuyendo de esta manera a propiciar la liberación del indígena.

Responsabilidad del Estado

No caben planteamientos de acciones indigenistas que no busquen la ruptura radical de la situación actual: liquidación de las relaciones coloniales externas e internas, quebrantamiento del sistema clasista de explotación y de dominación étnica, desplazamiento del poder económico y político de una minoría oligárquica a las masas mayoritarias, creación de un estado verdaderamente multiétnico en el cual cada etnia tenga derecho a la autogestión y a la libre elección de alternativas sociales y culturales.

El análisis que realizamos demostró que la política indigenista de los estados nacionales latinoamericanos ha fracasado tanto por acción como por omisión. Por omisión, en razón de su incapacidad para garantizar a cada grupo indígena el amparo específico que el Estado le debe y para imponer la ley sobre los frentes de expansión nacional. Por acción, debido a la naturaleza colonialista y clasista de sus políticas indigenistas.

Este fracaso arroja sobre el Estado culpabilidad directa o connivencia en muchos crímenes de genocidio y etnocidio que pudimos verificar. Estos crímenes tienden a repetirse y la culpabilidad recaerá directamente sobre el Estado que no cumpla los siguientes requisitos mínimos:

- 1) El Estado debe garantizar a todas las poblaciones indígenas el derecho de ser y permanecer ellas mismas, viviendo según sus costumbres y desarrollando su propia cultura por el hecho de construir entidades étnicas específicas.
- 2) Las sociedades indígenas tienen derechos anteriores a toda sociedad nacional. El Estado debe reconocer y garantizar a cada una de las poblaciones indígenas la propiedad de su territorio registrándolas debidamente y en forma de propiedad colectiva, continua, inalienable y suficientemente extensa para asegurar el incremento de las poblaciones aborígenes.
- 3) El Estado debe reconocer el derecho de las entidades indígenas a organizarse y regirse según su propia especificidad cultural, lo que en ningún caso puede limitar a sus miembros para el ejercicio de todos los derechos ciudadanos, pero que, en cambio, los exime del cumplimiento de aquellas obligaciones que entren en contradicción con su propia cultura.
- 4) Cumple al Estado ofrecer a las poblaciones indígenas la misma asistencia económica, social, educacional y sanitaria que al resto de la población; pero además, tiene la obligación de atender las carencias específicas que son resultado de su sometimiento a la estructura colonial y, sobre todo, el deber de impedir que sean objeto de explotación por parte de cualquier sector de la sociedad nacional, incluso por los agentes de la protección oficial.
- 5) El Estado debe ser responsable de todos los contactos con grupos indígenas aislados, en vista de los peligros bióticos, sociales, culturales y ecológicos que representa para ellos el primer impacto con los agentes de la sociedad nacional.
- 6) Los crímenes y atropellos que resultan del proceso expansivo de la frontera nacional son de responsabilidad del Estado, aunque no sean cometidos directamente por sus funcionarios civiles o militares.
- 7) El Estado debe definir la autoridad pública nacional específica que tendrá a su cargo las relaciones con las entidades étnicas que sobreviven en su territorio; obligación que no es transferible ni delegable en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia.

La responsabilidad de las misiones religiosas

La obra evangelizadora de las misiones religiosas en la América Latina corresponde a la situación colonial imperante, de cuyos valores está impregnada. La presencia misionera ha significado una imposición de criterios y patrones ajenos a las sociedades indígenas dominadas, que bajo un manto religioso encubren la explotación económica y humana de las poblaciones aborígenes. El contenido etnocéntrico de la actividad evangelizadora es un componente de la ideología colonialista, y está basada en:

- 1) Su carácter esencialmente discriminatorio originado en una relación hostil frente a las culturas indígenas, a las que conceptúan como paganas y heréticas.
- 2) Su naturaleza vicarial, que conlleva la reificación del indígena y su sometimiento a cambio de futuras compensaciones sobrenaturales.
- 3) Su carácter espurio, debido a que los misioneros buscan en esa actividad una realización personal, sea ésta material o espiritual.
- 4) El hecho de que las misiones se han convertido en una gran empresa de recolonización y dominación, en connivencia con los intereses imperialistas dominantes.

En virtud de este análisis llegamos a la conclusión de que lo mejor para las poblaciones indígenas, y también para preservar la integridad moral de las propias iglesias, es poner fin a toda actividad misionera. Hasta que se alcance este objetivo cabe a las misiones un papel en la liberación de las sociedades indígenas, siempre que se atengan a los siguientes requisitos:

- 1) Superar el herodianismo intrínseco a la actividad catequizadora como mecanismo de colonización, europeización y alineación de las poblaciones indígenas.
- 2) Asumir una posición de verdadero respeto frente a las culturas indígenas poniendo fin a la larga y vergonzosa historia de despotismo e intolerancia que ha caracterizado la labor de los misioneros, quienes rara vez revelaron sensibilidad frente a los valores religiosos indígenas.
- 3) Poner fin al robo de propiedades indígenas por parte de misiones religiosas que se apropian de su trabajo, tierras y demás recursos naturales, y a su indiferencia frente a la constante expropiación de que son objeto por parte de terceros.
- 4) Extinguir el espíritu suntuario y faraónico de las misiones que se materializa en múltiples formas, pero que siempre se basa en la explotación del indio.
- 5) Poner fin a la competencia entre confesiones y agencias religiosas por las almas de los indígenas, que da lugar, muchas veces, a operaciones de compra-venta de catecúmenos, y que, por la implantación de nuevas lealtades religiosas, los divide y los conduce a luchas intestinas.
- 6) Suprimir las prácticas seculares de ruptura de la familia indígena por internamiento de los niños en orfanatos donde son imbuidos de valores opuestos a los suyos, convirtiéndolos en seres marginados incapaces de vivir tanto en la sociedad nacional como en sus propias comunidades de origen.
- 7) Romper con el aislamientoseudomoralista que impone una ética falsa que inhabilita al indígena para una convivencia con la sociedad nacional: ética que, por otra parte, las iglesias no han sido capaces de imponer en la sociedad nacional.
- 8) Abandonar los procedimientos de chantaje consistentes en ofrecer a los indígenas bienes y favores a cambio de su total sumisión.
- 9) Suspender inmediatamente toda práctica de desplazamiento o concentración de poblaciones indígenas con fines de catequización o asimilación, prácticas que se reflejan en el inmediato aumento de la morbilidad, la mortalidad y la descomposición familiar de las comunidades indígenas.
- 10) Abandonar la práctica criminal de servir de intermediarios para la explotación de la mano de obra indígena.

En la medida en que las misiones no asuman estas obligaciones mínimas incurren en el delito de etnocidio o de connivencia con el de genocidio.

Por último, reconocemos que recientemente elementos disidentes dentro de las iglesias están tomando una clara posición de autocritica radical a la acción evangelizadora, y han denunciado el fracaso histórico de la actividad misional

La responsabilidad de la antropología

1) Desde su origen la Antropología ha sido instrumento de la dominación colonial, ha racionalizado y justificado en términos académicos, abierta o subrepticamente, la situación de dominio de unos pueblos sobre otros y ha aportado conocimientos y técnicas de acción que sirven para mantener, reforzar o disfrazar la relación colonial. América Latina no ha sido excepción y con frecuencia creciente programas nefastos de acción sobre los grupos indígenas y estereotipos y distorsiones que deforman y encubren la verdadera situación del indio pretenden tener su fundamento científico en los resultados del trabajo antropológico.

2) Una falsa conciencia de esta situación ha conducido a muchos antropólogos a posiciones equivocadas. Éstas pueden clasificarse en los siguientes tipos:

- a) El cientifismo que niega cualquier vínculo entre la actividad académica y el destino de los pueblos que forman el objeto de esa misma actividad, eliminando la responsabilidad política que conlleva el conocimiento.

- b) La hipocresía que se manifiesta en la protesta retórica sobre la base de principios generales, pero que evita cuidadosamente cualquier compromiso con situaciones concretas.
 - c) El oportunismo que aunque reconoce la penosa situación actual del indio, niega la posibilidad de transformarla, mientras afirma la necesidad de "hacer algo" dentro del esquema vigente; lo que en última instancia se traduce en un reforzamiento de ese mismo sistema.
- 3) La Antropología que hoy se requiere en Latinoamérica no es aquella que toma a las poblaciones indígenas como meros objetos de estudio, sino la que los ve como pueblos colonizados y se compromete en su lucha de liberación.
- 4) En este contexto es función de la Antropología:
- a) Por una parte, aportar a los pueblos colonizados todos los conocimientos antropológicos, tanto acerca de ellos mismos como de la sociedad que los oprime, a fin de colaborar con su lucha de liberación.
 - b) Por la otra, reestructurar la imagen distorsionada que existe en la sociedad nacional respecto a los pueblos indígenas desenmascarando su carácter ideológico colonialista.
- 5) Con miras a la realización de los anteriores objetivos, los antropólogos tienen la obligación de aprovechar todas las coyunturas que se presenten dentro del actual sistema para actuar a favor de las comunidades indígenas. Cumple al antropólogo denunciar por todos los medios los casos de genocidio y las prácticas conducentes al etnocidio, así como volverse hacia la realidad local para teorizar a partir de ella, a fin de superar la condición subalterna de simples ejemplificadores de teorías ajenas.
- El indígena como protagonista de su propio destino
- 1) Es necesario tener presente que la liberación de las poblaciones indígenas es realizada por ellas mismas, o no es liberación. Cuando elementos ajenos a ellas pretenden representarlas o tomar la dirección de su lucha de liberación, se crea una forma de colonialismo que expropia a las poblaciones indígenas su derecho inalienable a ser protagonistas de su propia lucha.
 - 2) En esta perspectiva es importante valorar en todo su significado histórico la dinamización que se observa hoy en las poblaciones indígenas del continente y que las está llevando a tomar en sus manos su propia defensa contra la acción etnocida y genocida de la sociedad nacional. En esta lucha, que no es nueva, se observa hoy la aspiración de realizarla unidad panindígena latinoamericana, y, en algunos casos, un sentimiento de solidaridad con otros grupos oprimidos.
 - 3) Reafirmamos aquí el derecho que tienen las poblaciones indígenas de experimentar sus propios esquemas de autogobierno, desarrollo y defensa, sin que estas experiencias tengan que adaptarse o someterse a los esquemas económicos y sociopolíticos que predominan en un determinado momento. La transformación de la sociedad nacional es imposible si esas poblaciones no sienten que tienen en sus manos la creación de su propio destino. Además, en la afirmación de su especificidad sociocultural las poblaciones indígenas, a pesar de su pequeña magnitud numérica, están presentando claramente vías alternativas a los caminos transitados por la sociedad nacional.

Barbados, 30 de enero de 1971

Firmas:

Miguel Alberto Bartolomé, Nelly Arevelo de Jiménez, Guillermo Bonfil Batalla, Esteban Emilio Mosonyi, Víctor Daniel Bonilla, Darcy Ribeiro, Gonzalo Castillo Cárdenas, Pedro Agostinho da Silva, Miguel Chase-Sardi, Scott S. Robinson, Silvio Coelho dos Santos, Stefano Várese, Carlos Moreira Neto, Georg Grünberg.

Anexo N° 4

SEGUNDA Declaración de Barbados (1977)

Hermanos Indios:

En América los indios estamos sujetos a una dominación que tiene dos caras: la dominación física y la dominación cultural.

La dominación física se expresa, en primer término, en el despojo de la sierra. Este despojo comenzó desde el momento mismo de la invasión europea y continúa hasta hoy. Con la sierra se nos han arrebatado también los recursos naturales: los bosques, las aguas, los minerales, el petróleo. La sierra que nos queda ha sido dividida y se han creado fronteras internas e internacionales, se ha aislado y dividido a los pueblos y se ha pretendido enfrentar a unos contra otros.

La dominación física es una dominación económica. Se nos explota cuando trabajamos para el no indio, quien nos paga menos de lo que produce nuestro trabajo. Se nos explota también en el comercio porque se nos compra barato lo que producimos (las cosechas, las artesanías) y se nos vende caro.

La dominación no es solamente local o nacional, sino internacional. Las grandes empresas transnacionales buscan la sierra, los recursos, la fuerza de trabajo y nuestros productos, y se apoyan en los grupos poderosos y privilegiados de la sociedad no india.

La dominación física se apoya en la fuerza y la violencia y las usa en contra nuestra.

La dominación cultural puede considerarse realizada cuando en la mentalidad del indio se ha establecido que la cultura occidental o del dominador es la única y el nivel más alto del desarrollo, en tanto que la cultura propia no es cultura, sino el nivel más bajo de atraso que debe superarse; esto trae como consecuencia la separación por medio de vías educativas de los individuos integrantes de nuestro pueblo.

La dominación cultural no permite la expresión de nuestra cultura o desinterpreta y deforma sus manifestaciones. La dominación cultural se realiza por medio de:

La política indigenista, en la que se incluyen procesos de integración o aculturación a través de diversas instituciones nacionales o internacionales, misiones religiosas, etcétera.

El sistema educativo formal que básicamente enseña la superioridad del blanco y la pretendida inferioridad de nosotros, preparándonos así para ser más fácilmente explotados.

Los medios masivos de comunicación que sirven como instrumentos para la difusión de las más importantes formas de desinterpretar la resistencia que oponen los pueblos indios a su dominación cultural.

Como resultado de la dominación nuestro pueblo está dividido, porque vive tres situaciones diferentes:

1. Los grupos que han permanecido relativamente aislados y que conservan sus propios esquemas culturales.
2. Los grupos que conservan gran parte de su cultura, pero que están directamente dominados por el sistema capitalista.
3. El sector de la población que ha sido desindianizado por las fuerzas integracionistas y ha perdido sus esquemas culturales a cambio de ventajas económicas limitadas.

Para el primero, el problema inmediato es sobrevivir como grupo, para ello es necesario que tengan garantizados sus territorios.

El segundo grupo está dominado física y económicamente; necesita, en primer lugar, recuperar el control de sus recursos.

El último grupo tiene como problema inmediato liberarse de la dominación cultural a que está sometido y recuperar su propio ser, su propia cultura.

En conclusión, el problema de nuestra población se resume así:

1. Una situación de dominación cultural y física cuyas formas de ser van desde el sojuzgamiento por una minoría blanca criolla, hasta el peligro de extinción en países en que constituyen un bajo porcentaje de la población.
2. Los pueblos indoamericanos están divididos internamente o entre sí por la acción de: las políticas de integración, educativas, de desarrollo, los sistemas religiosos occidentales, las categorías económicas y las fronteras de los Estados nacionales.

Como consecuencia de la situación actual de nuestro pueblo y con el objeto de trazar una primera línea de orientación para su lucha de liberación, se plantea el siguiente gran objetivo:

Conseguir la unidad de la población india, considerando que para alcanzar esta unidad el elemento básico es la ubicación histórica y territorial en relación con las estructuras sociales y el régimen de los Estados nacionales, en tanto se está participando total o parcialmente en estas estructuras. A través de esta unidad, retomar el proceso histórico y tratar de dar culminación al capítulo de colonización.

Para alcanzar el objetivo anterior se plantean las siguientes estrategias:

- a. Es necesaria una organización política propia y auténtica que se dé a propósito del movimiento de liberación.
- b. Es necesaria una ideología consistente y clara que pueda ser del dominio de toda la población.
- c. Es necesario un método de trabajo que pueda utilizarse para movilizar a una mayor cantidad de población.
- d. Es necesario un elemento aglutinador que persista desde el inicio hasta el final del movimiento de liberación.
- e. Es necesario conservar y reforzar las formas de comunicación interna, los idiomas propios, y crear a la vez un medio de información entre los pueblos de diferente idioma,

así como mantener los esquemas culturales básicos especialmente relacionados con la educación del propio grupo.

f. Es necesario considerar y definir a nivel interno las formas de apoyo que puedan darse a nivel internacional.

Los instrumentos que pueden usarse para realizar las estrategias mencionadas son, entre otros, los siguientes:

a. Para la organización política puede partirse de las organizaciones tradicionales tanto como de nuevas organizaciones de tipo moderno.

b. La ideología debe formularse a partir del análisis histórico.

c. El método de trabajo inicial puede ser el estudio de la historia para ubicar y explicar la situación de dominación.

d. El elemento aglutinador debe ser la cultura propia, fundamentalmente para crear conciencia de pertenecer al grupo étnico y al pueblo indoamericano.

Barbados, 28 de Julio de 1977

Anexo N° 5
Constituciones Nacionales de provincias Argentinas

Normativa aplicable a intereses indígenas

CONSTITUCIONES PROVINCIALES

Buenos Aires (1994)
Chaco (1994)
Chubut (1994)
Formosa (1991)
Jujuy (1986)
La Pampa (1994)
Neuquén (1994)
Río Negro (1988)
Salta (1998)

LEGISLACIÓN PROVINCIAL

Chubut - Ley 3657
Chubut - Ley 4013
Chubut - Ley 4384
Formosa - Ley 426
La Pampa - Ley 1610
Mendoza - Ley 5754
Misiones - Ley 2727
Río Negro - Ley 2553
Salta - Ley 4086
Salta - Ley 6373
Santa Fe - Ley 11.078
Tierra del Fuego - Ley 235
Tierra del Fuego - Ley 405

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(REFORMA CONSTITUCIONAL 1994)

ARTÍCULO 36 INC.9: "De los indígenas. La Provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus culturas, y la posesión familiar y comunitaria de las tierras que legítimamente ocupan".

PROVINCIA DE CHACO
(REFORMA CONSTITUCIONAL 1994)

ARTÍCULO 37: "La provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural, la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones; promueve su protagonismo a través de sus propias instituciones; la propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica, en forma gratuita, exentas de todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros. El Estado les asegurará:
La educación bilingüe e intercultural.

La participación en la protección, preservación, recuperación de los recursos naturales y de los demás intereses que los afecten y en el desarrollo sustentable.
Su elevación socio-económica con planes adecuados.
La creación de un registro especial de comunidades y organizaciones indígenas".

**PROVINCIA DE CHUBUT
(REFORMA CONSTITUCIONAL 1994)**

ARTÍCULO 34: "La Provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y la práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Se reconoce a las comunidades indígenas existentes en la Provincia:

La posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

El Estado puede regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

Ninguna de ellas es enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes y embargos.

La propiedad intelectual y el producido económico sobre los conocimientos teóricos y prácticos provenientes de sus tradiciones cuando sean utilizados con fines de lucro.

Su personería jurídica.

Conforme a la Ley su participación en la gestión referida a los recursos naturales que se encuentren dentro de las tierras que ocupan y a los demás intereses que los afectan".

ARTÍCULO 95: Tierras Fiscales "El Estado brega por la racional administración de las tierras fiscales tendiendo a promover la producción, la mejor ocupación del territorio provincial y la generación de genuinas fuentes de trabajo. Establece los mecanismos de distribución y adjudicación de las tierras fiscales en propiedad reconociendo a los indígenas la posesión y propiedad de las tierras que legítima y tradicionalmente ocupan".

**PROVINCIA DE FORMOSA
(REFORMA CONSTITUCIONAL: 1991)**

ARTÍCULO 79: "La Provincia reconoce al aborígen su identidad étnica y cultural, siempre que con ello no se violen otros derechos reconocidos por esta Constitución; y asegura el respeto y desarrollo social, cultural y económico de sus pueblos, así como su efectivo protagonismo en la toma de decisiones que se vinculen con su realidad en la vid provincial y nacional. Asegura la propiedad de tierras aptas y suficientes; las de carácter comunitario no podrán ser enajenadas ni embargadas. La utilización racional de los bosques existentes en las comunidades aborígenes requerirá el consentimiento de éstos para su explotación por terceros y podrán ser aprovechados según sus usos y costumbres, conforme con las leyes vigentes".

**PROVINCIA DE JUJUY
(REFORMA CONSTITUCIONAL 1986)**

ARTÍCULO 50: "La Provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social".

PROVINCIA DE LA PAMPA
(REFORMA CONSTITUCIONAL 1994)

ARTÍCULO 6 2º PÁRRAFO: "La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas".

PROVINCIA DE NEUQUÉN
(REFORMA CONSTITUCIONAL 1994)

ARTÍCULO 23 INC. D: "Serán mantenidas y aún ampliadas las reservas y concesiones indígenas. Se prestará ayuda técnica y económica a estas agrupaciones, propendiendo a su capacitación y la utilización racional de las tierras concedidas, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de esta segregación de hecho".

PROVINCIA DE RÍO NEGRO
(REFORMA CONSTITUCIONAL 1988)

ARTÍCULO 42: "El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborígen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las normas que afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en los derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de las tierras que posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo individual de su comunidad, y respeta el derecho que les asiste a organizarse".

PROVINCIA DE SALTA
(REFORMA CONSTITUCIONAL 1998)

ARTÍCULO 15: Pueblos Indígenas

I. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto un registro especial reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos.

Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley.

II. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relativo con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros.

Ley N° 7958, con fecha del 06/12/2007, declara en todo el territorio de la provincia el día 11 de Octubre de cada año como el "Último día de libertad de los pueblos originarios". Nota: GENERAL VIGENTE POR LEY N° 8240 DIGESTO JURÍDICO.

Esta es una ley que no se implementó en la totalidad de los establecimiento educativos, y a partir de la implementación a nivel nacional del 12 de Octubre como día del respeto y la diversidad cultural, la ley provincial quedó incorporada no de manera formal, a las conmemoraciones del 12 de Octubre.

Anexo N° 6

COMUNIDADES INDIGENAS

Ley 26.160

Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.

Sancionada: Noviembre 1 de 2006

Promulgada: Noviembre 23 de 2006

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley

ARTICULO 1° — Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 (CUATRO) años.

(Nota Infoleg: por art. 1° de la Ley N° 26554 B.O. 11/12/2009 se prorroga el plazo establecido en el presente artículo, hasta el 23 de noviembre de 2013)

ARTICULO 2° — Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1°.
La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.

(Nota Infoleg: por art. 2° de la Ley N° 26554 B.O. 11/12/2009 se prorroga el plazo establecido en el presente artículo, hasta el 23 de noviembre de 2013)

ARTICULO 3° — Durante los 3 (TRES) primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.

(Nota Infoleg: por art. 3° de la Ley N° 26554 B.O. 11/12/2009 se prorroga el plazo establecido en el presente artículo, hasta el 23 de noviembre de 2013- artículo mencionado como 30 en la norma de referencia-)

ARTICULO 4° — Créase un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de \$ 30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES), que se asignarán en 3 (TRES) ejercicios presupuestarios consecutivos de \$ 10.000.000 (PESOS DIEZ MILLONES).

Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos que demanden:

a) El relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas.

- b) Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales.
- c) Los programas de regularización dominial.

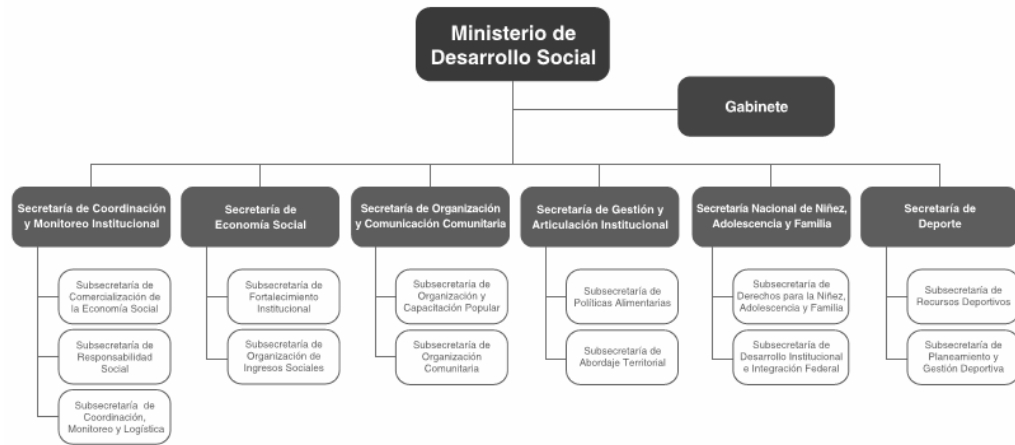
ARTICULO 5° — El Fondo creado por el artículo 4°, será asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

ARTICULO 6° — Esta ley es de orden público.

ARTICULO 7° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, AL PRIMER DIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOSMIL SEIS
— REGISTRADA BAJO EL N° 26.160 —ALBERTO E. BALESTRINI. — JOSE J. B. PAMPURO. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

Anexo N° 7



Anexo N° 8
COMUNIDADES ABORIGENES - LEY N° 23.302

Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes. Objetivos. Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Adjudicación de Tierras. Planes de Educación, Salud y Vivienda.

Sancionada: Setiembre 30 de 1985.

Promulgada de Hecho: Noviembre 8 de 1985.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

**LEY SOBRE POLITICA INDIGENA Y APOYO A LAS COMUNIDADES
ABORIGENES**

I — OBJETIVOS

ARTICULO 1° — Declárase de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.

II — DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS

ARTICULO 2° — A los efectos de la presente ley, reconócese personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país.

Se entenderá como comunidades indígenas á los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad.

La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación.

ARTICULO 3° — La inscripción será solicitada haciendo constar el nombre y domicilio de la comunidad, los miembros que la integran y su actividad principal, las pautas de su organización y los datos y antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia o reagrupamiento y los demás elementos que requiera la autoridad de aplicación. En base a ello, ésta otorgará o rechazará la inscripción, la que podrá cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que la determinaron.

ARTICULO 4° — Las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo a las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación vigente.

III — DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS

ARTICULO 5° — Créase el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social. El Poder Ejecutivo designará a su titular y deberá constituirse dentro de los 90 días de la vigencia de la presente ley.

Contará con un Consejo de Coordinación y un Consejo Asesor.

I — El Consejo de Coordinación estará integrado por:

- a) Un representante del Ministerio del Interior;
- b) Un representante del Ministerio de Economía;
- c) Un representante del Ministerio de Trabajo;
- d) Un representante del Ministerio de Educación y Justicia;
- e) Representantes elegidos por las comunidades aborígenes cuyo número, requisitos y procedimiento electivo, determinará la reglamentación;
- f) Un representante por cada una de las provincias que adhieran a la presente ley.

II — El Consejo Asesor estará integrado por:

- a) Un representante de la Secretaría de Acción Cooperativa;
- b) Un representante de la Secretaría de Comercio;
- c) Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria;
- d) Un representante de la Secretaría de Cultos;
- e) Un representante de la Comisión Nacional de Areas de Fronteras.

ARTICULO 6° — Corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas:

- a) Actuar como organismo de aplicación de la presente ley, velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos;
- b) Dictar su reglamento funcional, normas de aplicación y proponer las que correspondan a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo;
- c) Llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites. Las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, relativas a la inscripción de las comunidades, así como a su cancelación, serán apelables ante la Cámara Federal del lugar dentro del plazo de diez (10) días;
- d) Elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de las tierras, de educación y de salud;
- e) Proponer el presupuesto para la atención de los asuntos indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país.

IV — DE LA ADJUDICACION DE LAS TIERRAS

ARTICULO 7° — Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo.

La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de

indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.

La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios.

ARTICULO 8° — La autoridad de aplicación elaborará, al efecto, planes de adjudicación y explotación de las tierras conforme a las disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre el particular, de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación, aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial y comunal para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la provincia o en su caso, el municipal. Si fuese necesario la autoridad de aplicación propondrá la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes necesarias.

ARTICULO 9° — La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de crédito preferenciales a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras, y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor explotación.

ARTICULO 10. — Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades simultáneas. La autoridad de aplicación, asegurará la prestación de asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización de las actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos.

ARTICULO 11. — Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Las excepciones a este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades oficiales serán previstas por la reglamentación de esta ley. En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte años a contar de la fecha de su otorgamiento.

ARTICULO 12. — Los adjudicatarios están obligados a:

- a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas, personalmente los integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con la colaboración del grupo familiar;
- b) No vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexas las parcelas, sin autorización de la autoridad de aplicación.

Los actos jurídicos realizados en contravención a esta norma serán reputados nulos a todos sus efectos.

c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la autoridad de aplicación relativas al uso y explotación de las unidades adjudicadas.

ARTICULO 13. — En caso de extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán, a la Nación o a la provincia o al municipio según su caso. En este supuesto la reglamentación de la presente, establecerá el orden de prioridades para su readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran quedarán en beneficio de la misma comunidad a que pertenecía.

V — DE LOS PLANES DE EDUCACION

ARTICULO 14. — Es prioritaria la intensificación de los servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas. Los planes que en la materia se implementen deberán resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad aborígen, asegurando al mismo tiempo su integración igualitaria en la sociedad nacional.

ARTICULO 15. — Acorde con las modalidades de organización social previstas en el artículo cuarto de esta ley, los planes educativos y culturales también deberán:

- a) Enseñar las técnicas modernas para el cultivo de la tierra y la industrialización de sus productos y promover huertas y granjas escolares o comunitarias;
- b) Promover la organización de talleres-escuela para la preservación y difusión de técnicas artesanales; y
- c) Enseñar la teoría y la práctica del cooperativismo.

ARTICULO 16. — La enseñanza que se imparta en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas asegurarán los contenidos curriculares previstos en los planes comunes y, además, en el nivel primario se adoptará una modalidad de trabajo consistente en dividir el nivel en dos ciclos: En los tres primeros años, la enseñanza se impartirá en la lengua indígena materna correspondiente y se desarrollará como materia especial el idioma nacional; en los restantes años, la enseñanza será bilingüe. Se promoverá la formación y capacitación de docentes primarios bilingües, con especial énfasis en los aspectos antropológicos, lingüísticos y didácticos, como asimismo la preparación de textos y otros materiales, a través de la creación de centros y/o cursos especiales de nivel superior, destinados a estas actividades.

Los establecimientos primarios ubicados fuera de los lugares de asentamiento de las comunidades indígenas, donde existan niños aborígenes (que sólo o predominantemente se expresen en lengua indígena) podrán adoptar la modalidad de trabajo prevista en el presente artículo.

ARTICULO 17. — A fin de concretar los planes educativos y culturales para la promoción de las comunidades indígenas se implementarán las siguientes acciones:

- a) Campañas intensivas de alfabetización y posalfabetización;
- b) Programas de compensación educacional
- c) Creación de establecimientos de doble escolaridad con o sin albergue, con sistemas de alternancias u otras modalidades educativas, que contribuyan a evitar la deserción y a fortalecer la relación de los centros educativos con los grupos comunitarios; y

d) Otros servicios educativos y culturales sistemáticos o asistemáticos que concreten una auténtica educación permanente.

La autoridad de aplicación promoverá la ejecución de planes educativos y culturales para las comunidades indígenas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, asesorará en la materia al ministerio respectivo y a los gobiernos provinciales y los asistirá en la supervisión de los establecimientos oficiales y privados.

VI — DE LOS PLANES DE SALUD

ARTICULO 18. — La autoridad de aplicación coordinará con los gobiernos de provincia la realización de planes intensivos de salud para las comunidades indígenas, para la prevención y recuperación de la salud física y psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles para la atención de las comunidades dispersas.

Se promoverá la formación de personal especializado para el cumplimiento de la acción sanitaria en las zonas de radicación de las comunidades.

ARTICULO 19. — Se declarará prioritario el diagnóstico y tratamiento mediante control periódico, de las enfermedades contagiosas, endémicas y pandémicas en toda el área de asentamiento de las comunidades indígenas. Dentro del plazo de sesenta días de promulgada la presente ley deberá realizarse un catastro sanitario de las diversas comunidades indígenas, arbitrándose los medios para la profilaxis de las enfermedades y la distribución en forma gratuita bajo control médico de los medicamentos necesarios.

ARTICULO 20. — La autoridad de aplicación llevará a cabo planes de saneamiento ambiental, en especial para la provisión de agua potable, eliminación de instalaciones inadecuadas, fumigación y desinfección, campañas de eliminación de roedores e insectos y lo demás que sea necesario para asegurar condiciones higiénicas en los lugares de emplazamiento de las comunidades indígenas promoviéndose, a ese efecto, la educación sanitaria de sus integrantes y el acceso a una vivienda digna.

ARTICULO 21. — En los planes de salud para las comunidades indígenas deberá tenerse especialmente en cuenta:

- a) La atención bucodental;
- b) La realización de exámenes de laboratorio que complementen los exámenes clínicos;
- c) La realización de exámenes cardiovasculares, a fin de prevenir la mortalidad prematura;
- d) El cuidado especial del embarazo y parto y la atención de la madre y el niño;
- e) La creación de centros de educación alimentaria y demás medidas necesarias para asegurar a los indígenas una nutrición equilibrada y suficiente;
- f) El respeto por las pautas establecidas en las directivas de la Organización Mundial de la Salud, respecto de la medicina tradicional indígena integrando a los programas nacionales de salud a las personas que a nivel empírico realizan acciones de salud en áreas indígenas;
- g) La formación de promotores sanitarios aborígenes especializados en higiene preventiva y primeros auxilios.

Las medidas indicadas en este capítulo lo serán sin perjuicio de la aplicación de los planes sanitarios dictados por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con carácter general para todos los habitantes del país.

VII — DE LOS DERECHOS PREVISIONALES

ARTICULO 22. — El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, elaborará y elevará al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que contemple el derecho a la jubilación ordinaria de este sector social.

La reglamentación de esta ley determinará un porcentual de pensiones no contributivas que beneficiará a los componentes de las comunidades indígenas que reúnan los recaudos establecidos por la ley 13.337.

VIII — DE LOS PLANES DE VIVIENDA

ARTICULO 23. — El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas gestionará la habilitación de planes especiales para la construcción de viviendas rurales y urbanas para los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley, ante organismos nacionales, e internacionales que desarrollen planes habitacionales de fomento.

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley N° 25.799 B.O. 01/12/2003).

ARTICULO 23 BIS — Promuévese en el marco de la presente ley, la conservación de la cultura e inserción socioeconómica de comunidades aborígenes, considerando los siguientes aspectos relacionados con la generación de la infraestructura social básica y el posicionamiento económico de base primaria:

- a) Desarrollo de nuevas destrezas aplicables a los proyectos sociales, a través de la capacitación laboral;
- b) Incorporación de mano de obra propia; y
- c) Desarrollo de la cultura y fomento de la autogestión comunitaria; y
- d) Respeto y adaptación de las técnicas y costumbres de cada comunidad.

(Artículo incorporado por art. 2º de la Ley N° 25.799 B.O. 01/12/2003).

IX — DE LOS RECURSOS

ARTICULO 24. — Hasta la inclusión de las partidas pertinentes en el presupuesto general de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las reestructuraciones de créditos del presupuesto general de la Administración Nacional que fueren necesarias para el adecuado cumplimiento de esta ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes o crear nuevas y reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.

ARTICULO 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los treinta días del mes de setiembre del año mil novecientos ochenta y cinco.

JUAN C. PUGLIESE EDISON OTERO

Carlos A. Bravo Antonio J. Macris

— Registrada bajo el N° 23.302 —

Anexo N° 9

INFORME FINAL PROYECTO TUCUMPACI Exp. N° INAI 50.268/07 Resolución 542/07

COMUNIDAD INDIGENA CASAS VIEJAS – TUCUMAN

El convenio de financiamiento del presente proyecto se firmo en el mes de octubre de 2007.

A partir de su aprobación se realizaron reuniones entre las autoridades de las comunidades indígenas de los Pueblos Diaguita y Lule de la provincia de Tucumán, y entre estas y el equipo regional del INAI para implementar la ejecución del mismo.

Primeramente se realizo la compra del equipamiento solicitado en el presupuesto que fueron instalados en el domicilio de la entonces Cacica Nora Sequeira, este equipamiento esta al servicio del proyecto como de otros proyectos conjuntos de las comunidades y de nuestra propia comunidad de Casas Viejas.

En el mes de diciembre de 2007, se realizo en la comunidad de Tolombón una capacitación de personas propuestos por las distintas comunidades para asumir la responsabilidad como promotores del proyecto.

Estos promotores recorrieron las comunidades reuniéndose con sus autoridades para dar a conocer los objetivos del proyecto y proponer las Asambleas que las comunidades deberían realizar para analizar su situación haciendo un diagnostico de los diferentes problemas que las afectan y un listado de priorizaciones de los mismos.

Este proceso si bien se llevo a cabo en forma lenta se realizo en todas las comunidades con distinta modalidad para el trabajo, ya que existen comunidades con pocas familias como otras con muchas familias y distribuidas en Comunidades de Base.

En estos últimos casos como Amaicha, Quilmes y Tafi, se realizaron reuniones al interior de esas Comunidades de Base y luego los Consejos de Delegados y de Ancianos conjuntamente con los caciques debieron discutir el orden de prioridad.

Como resultado de ese trabajo del que se presentaron las respectivas Actas, que están en los archivos de nuestra comunidad, surge que de las priorizaciones, en la mayoría de los casos la prioridad fue la referida a la problemática del agua, tanto para consumo humano como para riego.

Esta situación tiene que ver en primer lugar con la falta casi total de infraestructuras de riego y más aun en sistemas de provisión de agua apta para el consumo humano. Culturalmente, basamos nuestra economía y subsistencia en la producción agrícola y ganadera, sostenida en el trabajo de la tierra con el esfuerzo familiar y por consiguiente la misma esta ligada a la cuestión del agua.

La situación climática de nuestra región, de características semi árida donde las lluvias son escasas, hace que la disponibilidad de agua para todo consumo sea muy escasa y proviene de pequeñas vertientes que bajan de los cerros de Quilmes y Aconquija, en cuyos faldeos y quebradas se encuentran asentadas nuestras comunidades.

También surgieron como importantes los problemas de vivienda, caminos, infraestructura para la atención de la salud, la educación y espacios de usos comunitaria.

Por supuesto que el tema preponderante es problema territorial aunque las comunidades saben que ya tiene tratamiento porque sus representantes participan activamente para la ejecución del relevamiento Técnico Jurídico Catastral establecido por la Ley N° 26.160. Con las priorizaciones realizadas, las comunidades debieron encarar la segunda etapa del trabajo, que implicaba avanzar hacia la formulación de proyectos tendientes a dar respuestas a los problemas considerados como prioritarios..

El equipo regional del INAI hizo el acompañamiento a medida que las autoridades comunitarias se contactaron con instituciones reconocidas o profesionales con alguna

experiencia en cada zona, para la realización del trabajo técnico en la formulación de los proyectos.

Con la Cátedra de Hidráulica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, se pudo avanzar en el diagnóstico y la formulación del Proyecto de Agua Potable para la comunidad Indígena de La Angostura.

Este proyecto ha sido tramitado ante el INAI y actualmente en ejecución.

El equipo de profesionales, y los alumnos que realizan la dirección técnica de este proyecto, han formulado los proyectos de Agua Potable para La Costa II de la comunidad Indígena de Tafi del Valle, el de Agua Potable para El Chorro de la comunidad indígena de Chuschagastas, y de construcción de camino ripiado para la comunidad de Potrero de Rodeo Grande.

También en la comunidad de La Angostura se pudo desarrollar un proyecto de rescate y revalorización de los tejidos artesanales, el cual ha tenido dos etapas de desarrollo, con muy buena participación por parte de sus miembros.

Esta comunidad y la de Casas Viejas se contactaron con el grupo Tierra. Los Arquitectos realizaron la asistencia técnica para formular los planos de dos proyectos: Casa Comunitaria de la comunidad de La Angostura y Casa Comunitaria de la comunidad de Casas Viejas.

La Comunidad India Quilmes resolvió acordar con el ingeniero Juan Silvetti, (con quien había trabajado en los proyectos financiados por el DCI), con experiencia específica en el armado de sistemas de riego presurizado, el que ha formulado los proyectos de riego para las comunidades de Los Chañares y de Las Cañas, este último ya en circuito administrativo.

También se avanzó en el diseño del sistema de entubamiento del agua de riego proveniente del pozo de profundidad de El Paso, en la Comunidad India Quilmes.

La comunidad Indígena de Tafi del Valle avanzó con este ingeniero en el proyecto de un sistema de riego presurizado gravitacional para La Peñita, proyecto que se encuentra actualmente en avanzada ejecución.

Las comunidades El Mollar, y nuestra comunidad, Casas Viejas decidimos recurrir a los servicios de los ingenieros de la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia para la formulación de las propuestas técnicas en cada caso.

Así se formularon y se encuentran en ejecución el Proyecto de Provisión de Agua Potable para El Mollar y el sistema de riego presurizado para la comunidad de Casas Viejas.

También se formularon proyectos para las localidades de El Potrerillo I y II, Mula Corral, Ojo de Agua, Rincón Las Micunas, Las Lomitas y La Hoyada, los que se encuentran en carpeta sin un tratamiento administrativo aun.

También en nuestra comunidad se formuló y ejecuto el proyecto de Mejoramiento de la producción por incorporación de una raza bovina de aptitud lechera, el cual ha sido de resultados satisfactorios, y ha concentrado la atención de la mayoría de las familias del valle que poseen ganado bovino, en cuanto a la posibilidad de replicar este proyecto.

En la comunidad de El Nogalito se formuló y ejecuto un programa de apoyo a la producción agrícola.

La misma recurrió a la Dirección de Recursos Hídricos para la formulación técnica de un proyecto de Provisión de Agua Potable para El Nogalito, el que se encuentra en plena ejecución.

Con el apoyo técnico del equipo del INAI se diseñó y ejecuto el proyecto Gran Torna, consistente en un fondo rotatorio de apoyo a la producción agrícola ganadera para las comunidades del Valle de Trancas y del Valle de Tafi.

Dicho proyecto fue administrado por la comunidad indígena de Potrero de Rodeo Grande y ha beneficiado a aproximadamente 150 productores de 8 comunidades indígenas.

También se ha ejecutado un proyecto de rescate del trabajo en cuero en la comunidad de Los Chuschagastas.

La Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, asimismo ha ejecutado el proyecto “PROYECTO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y FORTALECIMIENTO DE LA UNION DE PUEBLOS DE LA NACION DIAGUITA Y DEL PUEBLO LULE”, financiado por el INAI y con la comunidad Tolombon como organización ejecutora. Este proyecto ya fue rendido y se esta formulando un segundo proyecto para el acceso a la justicia de las comunidades.

Asimismo se ha formulado y financiado por parte del INAI un proyecto de garantía de acceso a la Justicia en la comunidad de Los Chuschagastas.

Han sido formulados proyectos para la provisión de Maquinarias Agrícolas para comunidades del valle de Trancas y del Valle de Tafi, que han sido presentados a través del Ministerio de Trabajo.

Se ha formulado y esta en circuito administrativo un proyecto de creación de una área de protección de bosques de Algarrobo en la comunidad de Amaicha del Valle.

En el presente nuestra organización se encuentra formulando la segunda etapa de “Acceso a la Justicia” y un proyecto de fortalecimiento comunitario y formación de jóvenes, los que serán ejecutados en las comunidades de Tucumán y Catamarca por la UPNDT, (Unión de Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán).

Se ha trabajado y elevado una propuesta para la provisión de Maquinarias Agrícolas de Uso Compartido para comunidades del Valle de Tafi y del Valle de Trancas, al Ministerio de Trabajo de la Nación.

Se trabajo y elevo un proyecto de FM comunitaria para las comunidades del Valle de Tafi, a la Dirección Nacional de la Juventud.

También con el apoyo de esta Dirección y del CDR Tucumán, se han desarrollado acciones de Jornadas Solidarias en la Comunidades India Quilmes y en la Comunidad de Amaicha del Valle.

Se ha acompañado el diseño de un proyecto de fortalecimiento de una FM comunitaria en la comunidad India Quilmes en el marco del programa Proyectos Socio Comunitarios de la SENAF.

También en el marco de este programa se esta ejecutando un proyecto de Deporte con Identidad en la comunidad de Casas Viejas. Se encuentran elevados a la SENAF los proyectos Yacu Guagua de trabajo con la línea de deportes, e Inti Huayra de fortalecimiento socio cultural, ambos en la comunidad de Amaicha del Valle.

Se han formulado proyectos en el marco del Programa Orígenes de la Secretaria de Deportes de la Nación en comunidades del Valle Calchaquí y del Valle de Tafi, habiéndose ejecutado efectivamente el primero.

Se elaboro un proyecto de Subsidios Institucionales para el club San Carlos de la comunidad Indígena de Tafi del Valle.

En el marco de ejecución del PACI se formularon los proyectos de Represa Ango-Pe, y ampliación del centro comunitario y sala de primeros auxilios en la zona de La Costa de la comunidad de Tafi.

De la experiencia desarrollada con la ejecución de los Fondos Rotatorios se diseño, elevo y aprobó, en el marco de la Ley Nacional de Micro créditos, los Planes de Negocios para comunidades Indígenas año 2008 y año 2009.

Se han trabajado dos propuestas de desarrollo de turismo de base comunitaria. Uno para la comunidad de Quilmes, la misma recorre la zona baja, Centro y Rincón de Quilmes,

y otra propuesta para las comunidades del Valle de Tafi. La primera puesta a consideración de Manos a la Obra, y la segunda en el marco del IDR PROSAP Valles Calchaquíes.

Con el apoyo del INAI y de UNICEF Argentina se han comprometido recursos para la obra de agua potable para las localidades de Los Zazos y Amaicha del Valle, por parte del ENOHA.

Las Comunidades de Tucumán, cuentan con el apoyo permanente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de sus diferentes políticas. Una de ellas es Programa de Empleo Comunitario (PEC), al cual han accedido las Comunidades de Potrero Rodeo Grande; La Angostura; Colalao del Valle, El Pichao y El Arbolar (Comunidades de Base de Quilmes); Amaicha del Valle y Los Zazos, Ampimpa (Comunidades de Base de Amaicha).

Y a través de la firma de un convenio entre Centro de Referencia y la Subsecretaria de Empleo de la Provincia de Tucumán podrán acceder y proponer sus promotores deportivos.

En el marco de las políticas de Economía Social, y a partir de los procesos organizativos de los artesanos, garantizar el acceso al crédito y su inscripción fiscal a través del Monotributo Social, diferentes grupos de artesanos están gestionando sus Marcas Colectivas, como ejemplo: Ruta del Tejido, Manos Tatinistas y Artesanías Los Alisos.

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se ha recibido asesoramiento técnico en el proceso de elaboración y conservación de dulces, recibiendo propuestas de mejoramiento de sus lugares de fabricación.

Los problemas o demoras

El proceso de realización de las Asambleas en las comunidades llevo mucho tiempo, lo mismo que la devolución de las Actas respectivas y los comprobantes de gastos que fue realizando cada comunidad a la que se entregaba un adelanto de dinero para tal fin. Estas demoras en la ejecución han llevado a nuestra comunidad a solicitar una prórroga para la ejecución del proyecto. Esta prórroga fue otorgada por el INAI a partir del 1 de octubre de 2008.

Luego de las asambleas, también fue lenta la identificación de los técnicos y el acuerdo de las comunidades para la realización del trabajo. El echo de proponerles un trabajo a riesgo, cubriéndoles solamente gastos de traslados y alimentos en la mayoría de los casos, los mismos debieron acomodar la tarea a los tiempos disponibles en sus respectivos trabajos.

El trabajo de los promotores como del CPI, acompañó este proceso y debió adecuarse a los tiempos de las organizaciones y a las situaciones climáticas.

Lo positivo del proceso

A pesar de las demoras en la ejecución, debemos decir que fue muy rica la experiencia y los aprendizajes quedaron en poder de nuestras organizaciones.

Hasta el momento las comunidades han presentado ante el equipo técnico regional del INAI 15 proyectos en distinto grado de formulación y sobre los que el equipo esta trabajando conjuntamente con nuestras comunidades.

Asimismo, las autoridades comunitarias realizaron también gestiones ante diversos organismos provinciales como nacionales, que en muchos casos trajo como resultado la posibilidad de generar acuerdos con otras instituciones o de presentar proyectos, ya fueran o no priorizados por las comunidades en el marco del Tucumapaci.

Por ejemplo la Comunidad de El Mollar se encuentra formulando un proyecto que será presentado ante la Dirección Nacional de la Juventud, para la adquisición de una FM comunitaria, y esta ejecutando un programa de vivienda con fondos del programa Hábitat Rural y Vivienda Aborigen.

La Comunidad India Quilmes se encuentra por recibir fondos desde la SENAF para la compra de equipamiento para una FM comunitaria.

La Comunidad de Amaicha se encuentra ejecutando proyectos productivos con financiamiento del PRODERNOA y de Infraestructura comunitaria con financiamiento de UNICEF.

El Tucumpaci fue también parte de las herramientas que las comunidades han aprovechado para su crecimiento organizativo. En la provincia de Tucumán, ya son 15 las comunidades registradas en el RENACI.

Las mismas han sido protagonistas de movilizaciones y logros respecto a la aplicación de nuestros derechos como pueblos. Hoy se encuentra presentada la documentación para la inscripción en el RENOPI a la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán, como organización de 1°.

Casas Viejas, 18 de julio de 2012

Anexo N° 10

Educación Intercultural Bilingüe

La Ley de Educación Nacional en su Capítulo XI contempla, por primera vez en la historia de la educación argentina, la creación de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe –EIB- dentro de la estructura del Sistema Educativo. Esto significa que los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria deben garantizar el cumplimiento del derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar su identidad étnica, su lengua, su cosmovisión y su cultura.

En la provincia de Tucumán, EIB realiza jornadas de reflexión, articulaciones con otros organismos como la Cátedra libre de Pueblos Originarios, charlas, elaboración de secuencias didácticas con contenidos interculturales.

El alcance en Tucumán, es en las escuelas de los Valles Calchaquíes, Valle de trancas, Valle de Tafí y cumbres Calchaquíes.

Anexo N° 11

Algunos aspectos referidos al Proyecto Desarrollo de comunidades indígenas (DCI) El proyecto DCI fue un proyecto promovido y ejecutado por el INAI, durante los años 2002 y 2006. Surge a partir de una propuesta realizada por “Confederación Mapuche Neuquina”, para el manejo de los territorios indígenas en el marco del programa de capacitación para el fortalecimiento de instituciones y comunidades indígenas, el cual tuvo fecha entre los años 1997 – 1998. (Canet, 2010).

El proyecto se financió con un préstamo del Banco Mundial de 5 millones de dólares y un aporte de 800000 dólares del Gobierno Nacional. En sus inicios, los destinatarios fueron tres pueblos:

1. Pueblo Kolla, de Finca Santiago, el cual tiene una extensión de 125000 Hectáreas (Has).
2. Pueblo Diaguita Calchaquí de Amaicha del Valle y Quilmes, pertenecientes a la provincia de Tucumán. Territorio: 110000 Has.
3. Pueblo Mapuche de comunidades que habitan en Pulmarí Provincia de Neuquén.

Los pueblos fueron seleccionados según la organización de las comunidades indígenas. En informes de balance y evaluación, se destaca en el marco de este proyecto las tareas de gestión y administración que debieron llevar adelante las comunidades indígenas, vinculación con otros organismos, manejo de fondos, entre otros (Canet, 2010).

Algunas dificultades que se plantearon por la implementación de proyectos se relacionan con: diferentes tiempos en cuanto a lo administrativo y rendiciones de cuenta - el proyecto se extendió cinco años más de lo planificado – gran demanda de asistencia técnica, conflictos internos, entre otros.

En cuanto a los logros del proyecto DCI, se mencionan: enfoque intercultural de equipos técnicos, obras realizadas, organización de productores y artesanos, fondos rotatorios, gestión y vinculación, entre otros.

Se sugiere consultar para más información acerca del proyecto:

- Convenio marco del Banco Mundial en relación al proyecto DCI;
- Informe PROINDER subsecretaría de Agricultura familiar, de Canet, V. “Análisis de experiencias de intervención pública y privada con pueblos indígenas. Realizado en el año 2010.
- Informes de evaluadores internos y externos.

Se adjunta al presente anexo, a modo ilustrativo un pequeño informe de un Subproyecto comunitario (SpC) del pozo de agua para la comunidad El Paso. Quilmes.

De: Jorge Daniel Aimaro.

Provincia: Tucumán

Ref: **Informe Técnico de Finalización del subproyecto.**

Subproyecto comunitario: “*Provisión y uso sustentable de agua en la Comunidad de El Paso*”

Expediente n° 50.061 -2005

Resolución n° 012/2006

Fecha: 07 de Mayo de 2009

Por la presente, se hace constar que se ha procedido a la verificación en terreno del SpC “Provisión y uso sustentable de agua en la Comunidad de Anjuana” en la fecha 24 de Noviembre de 2007, con la presencia de los técnicos del Proyecto Desarrollo de Comunidades Indígenas, Ing. Álvarez de Toledo y el Lic. Ariel Coppoletta, en la localidad de Anjuana, Comunidad de Base, perteneciente a la Comunidad India Quilmes.

El mencionado subproyecto comunitario planteaba, lo siguiente:

La Perforación de un pozo para la provisión de agua para riego, que logre el mejoramiento de la producción agrícola Ganadera de la Comunidad de Anjuana.

Adquisición e instalación de una bomba de extracción de agua de 60 HP, y su respectivo tablero.

Adquisición e instalación de una subestación transformadora de energía de 160 Kva, para la provisión del suministro eléctrico, al pozo de agua.

Adquisición de materiales y construcción con mano de obra comunitaria de la casilla para el resguardo del tablero y herramientas; y una cisterna para el almacenamiento de agua, a la salida del pozo.

Así mismo, con mano de obra comunitarias se realizaron tareas de zanjeo, limpieza de terreno y el respectivo vallado perimetral. Zanjeo, cruce subterráneo de Ruta Nacional 40, con tubería de PVC y conexión con el sistema tradicional de acequias de riego.

Se llevaron a cabo reuniones comunitarias de organización, de las cuales surge como resultado de las mismas un reglamento de uso interno de los usuarios, en el que prevé la modalidad de uso, pago de la hora, reparaciones y mantenimiento del pozo.

Se han dictado capacitaciones en Ley Provincial de Riego, Cultivos Invernales: Pasturas y forrajes, Papa, Alfalfa, Maíz, Costos de los diferentes cultivos, Conceptos básicos de amortización y determinación del precio por hora de bombeo. Capacitación en lectura e interpretación de las baletas del servicio eléctrico.

Se designo como responsable comunitario al Sr. Arnaldo Guzmán. A posteriori, se conformo una Comisión de manejo, y se designo a un responsable del manejo del pozo (pocero).

De la misma se concluye, en mi opinión que el objeto social motivo del subsidio se ha alcanzando.

Se adjuntan CD e imágenes fotografías del subproyecto.

Anexo N° 12

Marcha Nacional de los Pueblos Originarios. Tucumán



Anexo N° 13

Algunos aspectos referidos al informe presentado al relator de pueblos indígenas Anaya sobre la situación de los mismos en argentina: la agenda pendiente - Diciembre 2011

Estimado James Anaya:

Las organizaciones firmantes, dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en Argentina nos dirigimos a Uds. en relación con su visita oficial al país que tiene lugar entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011. Esperamos que estos aportes le resulte una herramienta útil de trabajo, le permita evaluar los niveles de postergación de los derechos indígenas en Argentina y que contribuya a mejorar su situación.

Atentamente,

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI)

Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)

Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) Grupo de Apoyo Jurídico para el Acceso a la Tierra (GAJAT)

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)

Equipo Patagónico de Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales (EPHADES)

Secretaría con relación de Pueblos Originarios de la CTA

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)

Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP)

Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO)

Comisión de Juristas Indígenas en la Rep. Argentina (CJIRA)

Comisión Provincial por la Memoria

Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ)

Defensoría General de la Nación

CATEDRA LIBRE DE PUEBLOS ORIGINARIOS-UNPSJB

Comisión de Pueblos Originario e Inmigraciones de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP

Comisión de Derechos de los Pueblos Originarios y neoconstitucionalismo de la UBA

Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI)

I. SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS QUE SE DENUNCIAN

En nuestro país, los pueblos indígenas padecen consecuencias de injusticias históricas: la colonización, el despojo de sus tierras y territorios de ocupación tradicional y la falta de control para ordenar sus prioridades de desarrollo.

Si bien en nuestro ordenamiento jurídico existen normas que garantizan una serie de derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos indígenas como tales, no se han visto reflejados en un cambio sustantivo en las condiciones de vida de los pueblos indígenas.

Nuestro país reconoce el derecho de estos pueblos a la propiedad y posesión de sus tierras de ocupación tradicional, pero no ha adoptado medidas eficaces para delimitar y otorgar títulos de propiedad comunitaria sobre estas tierras. Tampoco ha adoptado procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras efectuadas por los pueblos indígenas.

Si bien la 26.160 que declara la emergencia de las tierras ocupadas por comunidades indígenas, establece la realización de un relevamiento de estas tierras, no fija procedimientos para la delimitación y adjudicación de títulos de propiedad comunitaria. Tampoco dispone medidas para solucionar los eventuales conflictos que pudieran suscitarse entre comunidades, con terceros o el propio Estado alrededor de esas tierras. A pesar de la vigencia de la ley, en muchas ocasiones los desalojos continúan sucediendo y, en múltiples casos, los reclamos por el cumplimiento de sus derechos han sido objeto de serias respuestas violentas estatales que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad.

Todo esto sucede en un marco institucional de exclusión política que se refleja en todas las temáticas. Si bien la reforma constitucional y de la adopción de tratados internacionales por la Argentina la inscriben en un nuevo paradigma de emancipación de los Pueblos, en la práctica rige todavía el paradigma de la asimilación y sometimiento. Los pueblos indígenas siguen subordinados a las formas y prácticas neocoloniales. La participación en las decisiones de gobierno que les atañen es sumamente restringida y tratada como una cuestión meramente asistencial.

La máxima autoridad nacional en materia indígena es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente jerárquicamente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que designa a su Presidente. Desde su creación, nunca el Presidente ha sido indígena ni elegido por indígenas.

El alto grado de falta de implementación e inejecución de normas que se expondrá no es casual: está directamente relacionado con la falta de participación de los pueblos indígenas en el gobierno. El Estado argentino no ha dado lugar a la participación real de los Pueblos y garantizar el respeto a su integridad (art. 2.1 C. 169 OIT), lo que se traduce en el irrespeto por sus valores, prácticos e instituciones (art. 5 C. 169 OIT), anulando así toda posibilidad para que ejerzan su derecho a la libre determinación y autonomía.

En la República Argentina, las decisiones fundamentales de gobierno que interesan a los indígenas las diseñan, programan, presupuestan, aprueban y ejecutan los no indígenas sin consulta ni participación previa libre ni informada de los pueblos indígenas. El Consejo de Participación Indígena, es un órgano creado por el gobierno nacional que carece de autonomía y de presupuesto propio. Sus decisiones no son vinculantes ni tenidas en cuenta por el Estado que no lo convoca en la gran mayoría de las cuestiones que afectan intereses indígenas.

II._FALTA DE INFORMACIÓN ADECUADA SOBRE LA COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El Estado Federal tiene todavía una cuenta pendiente en relación con el relevamiento de información sobre los pueblos indígenas, basado en el principio de la autoidentificación reconocido en el Convenio 169 de la OIT. Este incumplimiento ha sido especialmente resaltado, en más de una oportunidad, en las recomendaciones que ha realizado el Comité para la Eliminación de la Discriminación racial (CERD) al el Estado argentino: “Al igual que en las observaciones finales de 2004, el Comité recuerda al Estado parte que dicha información es necesaria para evaluar la aplicación de la Convención y supervisar las políticas a favor de las minorías y los pueblos indígenas. El Comité pide al Estado Parte que publique los resultados del próximo censo 2010 con la esperanza de que recoja, entre otras cosas, información sobre los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes. Además a la luz del párrafo 8 de las directrices relativas a la presentación de informes y de las recomendaciones generales N°4 (1973) y N° 24 (1999), el Comité recomienda que el Estado Parte incluya en su próximo informe periódico información sobre la composición demográfica de la población, en particular sobre los pueblos indígenas”.

En Septiembre de 2010 se llevó a cabo el censo nacional que se realiza en el país cada 10 años. Sin embargo, nuevamente *se omitió incorporar alguna pregunta en el formulario general*. Lo que se hizo fue un formulario ampliado de carácter excepcional, tipo muestrario, donde se sumaban a las preguntas generales algunas específicas como la pertenencia a un pueblo indígena, cuestiones relativas a la discapacidad y otras. Ese formulario era absolutamente minoritario respecto del general (sólo algunos censistas lo tenían) y, por la forma en la que fueron distribuidos, carecía totalmente de la capacidad de mostrar la realidad indígena en el país.

La falta de información adecuada es un problema de suma gravedad si se tiene en cuenta que es de fundamental importancia para el diseño de políticas públicas adecuadas.

Recomendación:

Que se incorpore una pregunta sobre la autoidentificación como indígena en el próximo censo, de manera de obtener información adecuada sobre los pueblos indígenas en la Argentina.

En los siguientes capítulos del mencionado informe se denuncia lo siguiente:

Falta de adecuación del marco normativo a los estándares internacionales y a la Constitución Nacional.

Falta de realización de Derechos territoriales indígenas, en este capítulo se abordan casos concretos de vulneración de Derechos en relación al territorio, el marco legal existentes, los violentos desalojos, los conflictos entre comunidades y terceros (empresas, Estado, particulares), el grave problema de la tala indiscriminada que se vincula con la protección de sus recursos naturales y la ausencia al derecho a la consulta.

Criminalización de la protesta indígena.

Acceso a la justicia y respuestas del poder judicial.

Otros.

En todos los puntos las organizaciones que realizan el informe presentan propuestas para mitigar los conflictos que se denuncian.

Se sugiere la consulta del informe completo denominado: “Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en argentina: la agenda pendiente. Para el relator de pueblos indígenas James Anaya Diciembre 2011”.

Anexo N° 14

**REPUBLICA ARGENTINA LEY 24.071 RATIFICATORIA DEL
CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN
PAISES INDEPENDIENTES**

**76° CONFERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO**

Ginebra, 27 de junio, 1989.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión;

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre prevención de la discriminación;

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores;

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como

del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones; Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957 (n. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957,

Adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989.

PARTE I POLÍTICA GENERAL

ARTÍCULO 1º.

1. El presente Convenio se aplica:

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o por una legislación especial;

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

3. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

ARTÍCULO 2°.

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

- a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;
- b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
- c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socio-económicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

ARTÍCULO 3°.

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminaciones. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminaciones a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

ARTÍCULO 4°.

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

ARTÍCULO 5°.

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

- a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;
- b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
- c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo.

ARTÍCULO 6°.

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

- a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
- b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por los menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
- c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán ejecutarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

ARTÍCULO 7°.

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio

desarrollo económico, social y cultural. Además dichos pueblos deberán participar en la formación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

ARTÍCULO 8°.

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

ARTÍCULO 9°.

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales

deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

ARTÍCULO 10°.

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

ARTÍCULO 11°.

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

ARTÍCULO 12°.

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Anexo N° 15
Cátedra libre de Pueblos Originarios



Anexo N° 16
Codificación de entrevistados

Informantes Calificados

JRI (Jorge responsable INAI)
VLR (Valentina letrado relevamiento)
DDQ (Delfín Dirigente Quilmes)
CCV (Cacique Casas Viejas)
CCN (Cacique Comunidad Nogalito)
CCQ (Cacique Comunidad Quilmes)
MDIC (Marcelo dirigente Indio Colalao)
DCC (Delegado comunal de Colalao del Valle)
DIN (Daniel INAI Nacional)

Técnicos o promotores

TCV (Técnico Casas Viejas)
TLD (Técnico letrado DCI)
JPD (José promotor Quilmes)
MRM (Mariano Responsable Microcréditos)

Comuneros y comuneras

Comunidad India Quilmes

LCQ (Luis Comunidad Quilmes)
J CQ (Jesús Comunidad Quilmes)

Comunidad Nogalito

SCN (Simón comunidad Nogalito)

Comunidad Casas Viejas

NCV (Nora Casas Viejas)
SCV (Santos Casas Viejas)

Comunidad Valle de Trancas

BPT (Beatriz Pueblo Tolombón)
DCP (David comunidad de Potrero)
LIC (Lourdes Indio Colalao)

Anexo N° 17

Quilmes - Departamento Tafi del Valle



(Acceso a la Ciudad Sagrada de Quilmes. Casa de la CIQ)

Anexo N° 18

Cédula Real

La Cédula Real

"Nos los Gobernadores Don Francisco de Nievar y Don Jerónimo Luis de Cabrera y los Jefes de su Majestad Real Don Pedro Díaz Doria y Don Francisco de Lamerçado de Villacorta reunidos en este paraje de Encalilla para dar la posesión real al Cacique de los pueblos del Bañado de Quilmes, San Francisco, Tio-punco, Encalilla y Amaicha Don Francisco Chapurfe quien nos manifestó la Cédula Real que antes dimos, el año de mil setecientos diez y seis en el mes de Apriles, en la que se manifiesta que al ser bautizado su padre el cacique de la Ciudad de Quilmes y de todos estos Pueblos, Don Diego Utibaitina, se labró y selló con nuestros nombres un algarrobo grande, y estando reunida toda la gentilidad de Bacamaca y lagunas, se le hizo abrazar dicho algarrobo, coger agua en una timbe de asta, actos en señal de la posesión de tierras de dichos Pueblos; entrepasándose estata tui terras, quedó en nombre amparado y amparaos; entre dos dipes: y que en ningún tiempo os han de quitar persona alguna; ome os han dado los españoles estas tierras y antes si fuesen amparadas dichas tierras que son: desde el algarrobo sellado línea recta al Naciente hasta dar con una loma pica en el punto del Masao, y de allí por la cuchilla de Aguila Guaci hasta dar con la cima de los Lampazos, y de allí tomando para el Sud el cordón que bota las aguas para el Valle hasta dar con el Nevado, y se vuelve para el Norte por el cordón que bota las aguas para Tafin hasta llegar a la abra que forma el camino que va para este punto y de allí se

P. 18

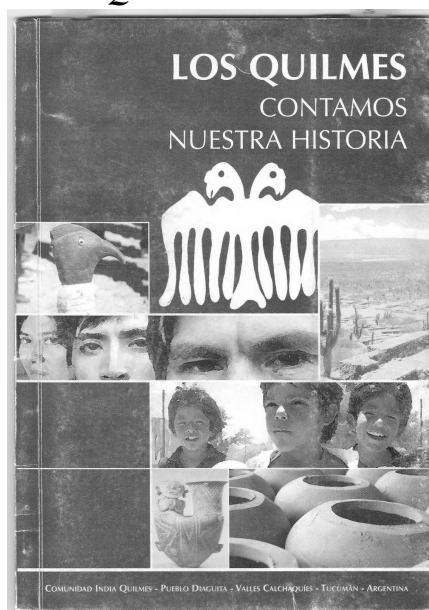
Los Quilmes contamos nuestra historia

mira al Cerro que está entre Nor-Este hasta dar con el cordón que bota las aguas para el Tucumán, y volviendo por este rumbo para el Poniente se toma la línea del algarrobo escrito a la abra del Sud del Morro de San Francisco que mira directamente a la Puerta del Chiflón del Rio de Bacamaca; y por el Norte hasta el Neayacocah, y de allí línea recta al Naciente a un morro alto y siguiendo la línea hasta el cordón que bota las aguas para el Tucumán y volviendo al Neayacocah huye arriba al campo del Moyar, en donde plantamos una Cruz Grande, y de allí se tira línea recta al Poniente al Cerro Grande que está frente a Colalao; quedando este punto y Tolombón y el paraje del Sud de estos pueblos, llamado el Puesto, prestados por el tiempo de seis años en poder de Don Pedro Díaz Doria, para se pastear y invernar tropas de mulas del Ejercito real, gracia que se hizo, por haberse empeñado en cuidado con toda su pia armada a nombre de su Majestad Real y el paraje de Tafin arrendado a Don Francisco de Lamerçado de Villacorta, para se pacer cabras y ovejas de Castilla; Bajo cuyos límites damos la posesión real, temporal y corporal al susodicho Cacique, para él, su Indiada, sus herederos y sucesores; Y ordenamos al Gran Sánchez que está siete leguas de Tucumán abajo, deje venir a los Indios que se le encomendaron por el referido tiempo de diez años para que, instruidos, volviesen todos a sus casas como dueños legítimos de aquellas tierras, para que las posean ellos y sus descendientes. Y así firmamos este acto de Posesión Real en el referido paraje de Encalilla, en dicho día, mes y año".

Comunidad India Quilmes - Pueblo Diaguita

P. 19

Extraído del libro: Los Quilmes contamos nuestra historia. 2006



Anexo N° 19

Comunidades del Valle de Trancas y Choromoro - Departamento Trancas



(Comunidad Indígena Chuschagasta-- Trancas)

Anexo N° 20
Comunidad Indígena de Casas Viejas - Departamento Tafi del Valle



(Camino de acceso a la zona poblada de Casas Viejas)

Anexo N° 21
Comunidad Indígena Nogalito - Departamento Lules



(Parcelas productivas comunidad indígena Nogalito)

Anexo N°22

Microcréditos

El microcrédito es una herramienta que brinda el **Programa Nacional de Microcrédito para la Economía Social y Solidaria** destinado a trabajadores y trabajadoras que desarrollan emprendimientos productivos, comerciales o de servicios de manera asociativa y/o familiar y necesitan dinero para adquirir insumos, maquinaria o para hacer crecer su actividad. Está especialmente pensada para quienes no cuentan con garantías patrimoniales o no reúnen las condiciones para acceder a créditos bancarios tradicionales.

Como parte de la política pública que se lleva a cabo desde **Argentina Trabaja**, el programa de microcrédito tiene entre sus objetivos la organización popular, el acompañamiento continuo y la construcción de lazos de confianza y solidaridad entre los emprendedores y las organizaciones sociales que trabajan en las distintas comunidades.

El microcrédito permite a los argentinos:

- Organizarse y mejorar sus condiciones de trabajo junto con otros/as trabajadores/as y con las organizaciones sociales de microcrédito.
- Participar de espacios de construcción colectiva, fortalecimiento y acompañamiento mutuo.
- Recibir apoyo técnico y capacitación.
- Compartir e intercambiar experiencias y conocimientos.
- Ser parte de un proyecto colectivo que genera cambios concretos en los emprendimientos, las familias y las comunidades.

Esta propuesta surge a partir de la Ley Nacional N°26117. (MDS 2013)

La implementación del proyecto Microcréditos en la provincia de Tucumán.

Datos aportados por el coordinador de la operatoria de microcréditos para la comunidad India Quilmes en la modalidad de consorcio de gestión local en entrevista para el presente trabajo.

La comunidad de Quilmes, está dentro del consorcio de gestión para el desarrollo local de Tucumán, junto con otras organizaciones como CADIF; ATPPS; Cooperativa Ibatín, centro Empresario de Famaillá y el sindicato de amas de casa. Todos estos integran la modalidad de consorcio en la provincia de Tucumán. Hay otras operatorias en paralelo, como el Banco Popular de la buena fe, que financia la comisión nacional de microcréditos (CONAMI), y son denominadas pioneras porque se dedicaban a hacer microcréditos previo a la sanción de la ley.

En Tucumán, se dio inicio a microcréditos en el año 2008, con un plan de negocios aprobado el cual se desembolsaba en 3 etapas de 484000 pesos. Esto se generó a partir de la experiencia Torna Amaicha Quilmes, implementado a través del proyecto DCI.

...el sistema de crédito es escalonado que según la ley nosotros podemos prestar hasta 12 canastas mínima vital y móviles, si eso lo actualizamos a los precios de hoy, originalmente cuando salió la ley estábamos hablando de alrededor de 10000 pesos, esa es la información que nosotros hemos difundido, por lo tanto nuestros emprendedores saben, toman o tienen en sus cabezas que el monto máximo es de 10000 pesos. Con la actualización de la canasta mínima vital y móvil estamos hablando de arriba de, hoy en día podemos prestar arriba de los 22000 pesos...

La ley es la 26117 es una de las 3 leyes de herramientas de economía social que promueve Alicia Kirchner. Junto con esta ley, está el monotributo social o registro nacional de efectores sociales y marcas colectivas. Esas son las 3 leyes, 3 de las 5 herramientas de economía social que hoy manejan en el Ministerio de desarrollo social de la Nación. Lo que establece la ley de micro créditos, es entre otras cosas, que la tasa de interés anual no puede ser superior al 6%.

La difusión se realizó no de manera masiva, informando en cada comunidad de base a los interesados en adquirir créditos. Conjuntamente con esto, se dio inicio a procesos de capacitación a aquellos que serían parte del comité.

En cuanto a la implementación de los créditos en comunidades indígenas, el responsable expresa lo siguiente:

“...Nosotros hemos dado más de 800 unidades de crédito, eso en cantidades de emprendimientos, estamos hablando de un número cercano a los 450 emprendimientos. Actualmente con créditos estamos, es decir con créditos activos es decir gente que tiene cuota vencida o por vencer para pagarnos estamos hablando de estar superando los 300 emprendimientos, ubicados desde La Angostura en el valle de Taft, hasta Amaicha, Quilmes, también tenemos créditos en Cafayate, en San Carlos en la provincia de Salta y créditos en Santa María y hasta en Loro Huasi en la provincia de Catamarca... por un pedido especial del consorcio, nos solicitaban que abramos la operatoria no solamente a comuneros sino a otro tipo de emprendedores, así que ya no se hace distinción de comuneros o no, se atiende a cualquier tipo de emprendedor dentro de los 3 rubros: agrícola, artesanía y servicios turísticos y la comercial...”

Un aspecto que resulta interesante es que el proyecto microcréditos se complementa con proyectos existentes en las comunidades indígenas por ejemplo con Gran Torna en Valle de Taft

Como punto de referencia se establece entre un 2 o 3% de incobrables, es lo aceptable y es lo que la Comunidad India Quilmes mantiene dentro de su cartera. Este dato no responde a la ley, sino se estableció en base a las experiencias previas de las organizaciones que hacían microcrédito. Se estimaba que un 2% de incobrabilidad al año es un porcentaje razonable, mientras que la mora, es decir el atraso en el pago de la cuota, nosotros consideramos comunidad India Quilmes considera “mora” al día siguiente. Hay distintos criterios, no está unificado por la comisión nacional de microcréditos pero se toma como mora a los 60 días de vencido la cuota, sin haber realizado ningún pago, se considera que la persona entra en mora, y las cuotas a vencer entran en los que se llama “cartera en riesgo”. Las moras de microcréditos que maneja la comunidad India Quilmes rondan entre el 20% y 25%.

En relación a propuestas a futuro, desde la coordinación de microcréditos se solicitó la cuestión habitacional como política a incorporar; tema que se vincula directamente con la situación de tenencia de tierra de las comunidades indígenas; además se está trabajando en la mejora en la cuestión comercial de turismo, por ejemplo sistemas electrónicos de pago.

“...el objeto social de microcrédito en el plan de negocios que va ejecutando Quilmes cumple todas las expectativas... con algunas dificultades pero con un alcance destacable...” (Cinquegrani, M.).